

46ª REUNION — Continuación de la 2ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 13/14 DE 1954

Presidencia del doctor Antonio J. Benítez, de la señora Delia D. Degliuomini de Parodi
y del señor José V. Tesorieri

Secretarios: doctores Rafael V. González y Eduardo T. Oliver

Prosecretarios: doctores Roberto J. Murano y Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Policarpo
ACUNA, Judith Elida
AGÜERO, Teodomiro de la Luz
ALBARELLOS, Juan
ALBERTELLI, Pedro A. F.
ALBRIEU, Oscar E.
ALONSO, José
ALVAREDO de BLANCO SILVA, Obdulio
ALVAREZ, Madgalena
ARGUMEDO de PEDROZA, Celfa
ARIAS, Jesús Pablo
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
BALBI, Aimar A.
BELNICOFF, Manuel
BENÍTEZ, Antonio J.
BIDEGAIN, Oscar R.
BIONDI, Josefa
BLASI, Héctor A.
BRIGADA de GÓMEZ, Josefa Dominga
BRIZUELA, Juan Francisco
BUSTOS FIERRO, Raúl C.
CAMPANO, Guillermo M.
CÁMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANTORE, Luis
CARBALLIDO, Dorindo
CARENA, Ezio Armando
CARRERAS, Ernesto
CARRIZO, Francisco Isidro
CASTAGNINO, Héctor
CASTRO, Orlando
CASUCCIO, María Elena
CAVIGLIA de BOEYKENS, María C.
CLEMENT, Fernando Abel
COBELLI, Francisco
CHALUP, Hugo del Valle
DACUNDA, Angélica E.
DA ROCHA, Alejandro J.
DEGLIUOMINI de PARODI, Delia D.
DEGREEF, Juan Ramón
DEIMUNDO, Antonio J. C.
DEL RÍO, Arturo R.
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DISKIN, David
D'JORGE, Luis
DOMÍNGUEZ, Carlos Joaquín
DOMÍNGUEZ, Roberto
DUSSAUT, Santiago
ESPEJO de RAMOS, Juana Alicia
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ, Expédito
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRER ZANCHI, Alfredo G.
FLORES, Francisca A.

FONTANA, Alfredo
FORTEZA, Eduardo J.
GAETA de ITURBE, Dora Matilde
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Juan C.
GIANOLA, Jorge N.
GOBELLO, José
GOITIA, Carlos Inocencio
GÓMEZ, Manuel Vicente
GOMIS, Pedro A. J.
GONZÁLEZ, Antonio F.
GONZÁLEZ, Ventura
GRAMAJO, Rodolfo
GRO, Carlos
HERMIDA, Antonio
IDOMÁNICO, Humberto
LABANCA, Enrique V.
LANFOSSI, Adolfo
LANNES, Héctor L.
LATELLA FRIAS, Donata
LOGUERCIO, Dante N.
LÓPEZ, Gerardo
LÓPEZ, Noé
LÓPEZ, Pablo
LÓPEZ, Plácido Guillermo
LUNA, Pedro Antonio
MACABATE, Manuel E.
MACRI, Ana Carmen
MAESTRO, José Ángel
MARTÍNEZ, Darwin
MATTIS, Eduardo
MERLO, Patrocínio
MESSINA, Bernardo R. A.
MIEL ASQUÍA, Ángel J.
MIGUEL de TUBÍO, Josefa
MONTES, Abel
MORENO, Silverio
MORESCHI, Humberto P.
MOYA, Isaac Donald
MUSACCHIO, Miguel
NUDELMAN, Santiago I.
ORLÓNEZ PARDAL, Pedro A.
ORLANDI, Rómulo E.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
OTERO, Pedro Ramón
PALLANZA, Adolfo
PARINO, Edmundo
PAZ, Edvino Alfredo
PELLERANO, Jorge S.
PERALTA, Angel Enrique
PERETTE, Carlos H.
PÉREZ, José C.
PÉREZ OTERO, Tito V.
PERICAS, Luis
PICERNO, José E.
PIOVANO de DE CASTRO, Mafalda
POSADA, José B.

PRACÁNICO, Zulema N.
PRESTA, José
PRESTE, Pascual N. H.
RABANAL, Francisco
RINALDI, Luis
ROCAMORA, Alberto L.
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Celina E.
RODRÍGUEZ, Manuel Félix
RODRÍGUEZ de COPA, Seferina del C.
ROUGGIER, Valerio S.
RUMBO, Eduardo I.
SÁINZ, Héctor Agustín
SALABER, Carmen
SALVO, Hilario F.
SANTUCHO, Oscar D.
SCANDONE, Eduardo Ernesto
SIBOLDI, Agustín
SPACHESSI, Modesto A. E.
TEJADA, Beato Miguel
TEJADA, María Ubelina
TESORIERI, José V.
TOFANELLI, Oreste
TOMMASI, Victorio M.
TORTEROLA de ROSELLI, Isabel A.
ULLOA, José Manuel
VERGARA, Amando
VILLAFANE, José María
VILLA MACIEL de CANO, Otilia
WEIDMANN, Rodolfo A.
ZEREGA, Oreste A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

DI BERNARDO, Almerindo D.
VILLARREAL, Pedro

AUSENTES, CON AVISO:

AGUILAR de MEDINA, Generosa D.
ALENDE, Oscar Eduardo
ARGAÑA, José María
MARCÓ, Teodoro E.

DELEGADOS PRESENTES:

BARRERA, Néctar A.
ESCARDÓ de COLOMBO BERRA, P.
FADUL, Esther M.
FERNICOLA, Elena A.
MARINO, Ramón
MONTAÑA, Agapito
PAROLÍN, Orlando L.
POLO, Antenor
RÍOS, Octavio A.
RODRÍGUEZ GALLARDO, Alberto
SAN MARTÍN, Pedro J.

SUMARIO

1.—**Consideración del despacho de las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal en el proyecto de régimen legal de los menores y de la familia.** (Página 2716.) Se sanciona.

2.—**Apéndice:**

I.—**Sanciones de la Honorable Cámara.** (Página 2807.)

II.—**Inserciones.** (Página 2812.)

III.—**Asuntos entrados:**

I.—**Comunicaciones del Honorable Senado.** (Página 2826.)

II.—**Despachos de comisión.** (Página 2826.)

III.—**Peticiones particulares.** (Página 2826.)

—En Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre de 1954, a la hora 16 y 15:

1

**REGIMEN LEGAL DE LOS MENORES
Y DE LA FAMILIA**

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar el despacho de las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen legal de los menores y de la familia.

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General y Legislación Penal han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificaciones a las normas en vigor que rigen el régimen de los menores y de la familia; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I

Artículo 1º — Cuando el menor que no ha cumplido dieciséis años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito, la autoridad judicial competente procederá a comprobar el mismo, tomar conocimiento personal y directo del menor, sus padres, tutor o guardadores y ordenar los informes y peritaciones conducentes al estudio de la personalidad de aquél, sus condiciones familiares y el ambiente en que viviere. En caso de estimarlo necesario podrá disponer la internación del menor en un establecimiento adecuado antes de resolver en definitiva. Esta medida durará tan sólo el tiempo indispensable para su mejor examen y facilitar la ulterior adopción del régimen que correspondiera aplicar, conforme lo dispone el artículo siguiente.

Art. 2º — Si las circunstancias del hecho y las condiciones personales del menor evidenciaran que éste no presenta problemas graves de conducta o ambientales, el juez podrá dejarlo con sus padres o tutor, libremente o bajo el régimen de libertad vigilada; podrá también dejarlo con sus guardadores o con otras personas idóneas, pero en estos casos se establecerá siempre un régimen de libertad vigilada apropiado.

Si el menor se hallare abandonado, falta de asistencia, en peligro material o moral, o presentare graves problemas de conducta, el juez podrá disponer del mismo en alguna de las formas previstas en el párrafo anterior o proceder a su internación en un instituto adecuado.

Art. 3º — Cuando el menor de dieciséis a dieciocho años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito y no se tratase de infracciones de acción privada o sancionadas con un año o menos de privación de la libertad, con multa o con inhabilitación, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso. No obstante, cualquiera fuere la naturaleza del hecho, se procederá conforme lo disponen los artículos 1º y 2º.

Art. 4º — Cuando el menor a que se refiere el artículo precedente haya cumplido dieciocho años de edad y por lo menos un año de internación u otro tratamiento tutelar, las autoridades competentes informarán al juez sobre su conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales.

Si de las conclusiones de ese informe, las modalidades del hecho, los antecedentes del menor y la impresión personal directa del juez apareciere fundadamente necesario aplicarle una sanción, éste así lo resolverá, conforme a la ley penal, pudiendo reducirla en la forma determinada para la tentativa.

También en estas circunstancias, el juez podrá proceder, en todos los casos, con arreglo a las demás facultades conferidas en los artículos 1º y 2º.

Art. 5º — La sanción privativa de libertad que el juez impusiere se hará efectiva en institutos especiales. Si en esta situación el infractor alcanzare los veintidós años de edad, será trasladado, para cumplir el resto de la sanción impuesta, a los establecimientos para adultos.

Art. 6º — En todos los casos en que se advirtiere una anormalidad física, psicológica o mental en el menor, éste será sometido al tratamiento especial más adecuado.

Art. 7º — En los casos en que un menor que no ha cumplido dieciocho años de edad, incurriere en un hecho que la ley califica como delito, el juez podrá declarar, según las circunstancias: la pérdida de la patria potestad, la pérdida o suspensión de su ejercicio, la privación

de la tutela o guarda a quienes la ejercieren, y disponer el régimen que corresponda.

Art. 8º — El menor de dieciocho a veintidós años de edad, que infrinja las disposiciones de la ley penal, quedará sometido a ella. Si antes de cumplir los veintidós años debiera ser privado de su libertad, sea durante el proceso o a efectos de cumplir la sanción, será internado en institutos especiales y, hasta tanto sean debidamente organizados los mismos, en secciones especiales de establecimiento para mayores.

A partir de los veintidós años de edad, será trasladado a establecimientos comunes para adultos.

Art. 9º — Cuando la acción correspondiente a un hecho que la ley califica como delito, cometido por un menor de dieciséis a dieciocho años, fuere iniciada después que el mismo alcanzó esta última edad, el juez procederá en las formas contempladas en los artículos 1º a 4º.

Pero si el inculpado fuere, al tiempo de su juzgamiento, mayor de veintidós años, no aplicará las medidas tutelares previstas en dichos artículos.

Art. 10. — Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.

Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta, o no, a efectos de considerarlo reincidente.

Art. 11. — La modificación, suspensión o cesación de las medidas tutelares, responderá a la mejor protección del menor.

A tales efectos el juez procederá, de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, debiendo informarse de la conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales del menor, como así también de las condiciones de las personas que lo tienen o tendrán a su cargo y del ambiente en que vive o habrá de vivir.

Las medidas cesarán de pleno derecho con la mayoría de edad civil.

Art. 12. — Las normas precedentes se aplicarán aun cuando el menor fuere emancipado por matrimonio o por otra causa legal.

Art. 13. — Para el cumplimiento de la libertad vigilada o de las demás medidas tutelares, las autoridades judiciales de cualquier jurisdicción de la República prestarán la colaboración que se les solicite por otro tribunal, aceptando la delegación que circunstancialmente se les haga de las respectivas funciones.

Las sanciones o medidas tutelares que se apliquen de acuerdo a las prescripciones indicadas, podrán hacerse efectivas en jurisdicción nacional, cuando así lo solicitaren las autoridades judiciales competentes.

II

Art. 14. — Para contraer matrimonio se requiere que la mujer tenga 14 años cumplidos y el hombre 16. Podrá contraerse válidamente con edad menor cuando hubiera concebido la mujer, de aquel con quien pretenda casarse. Podrá también obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contemplados en el artículo 132 del Código Penal, la que será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones establecidas por dicho artículo. El matrimonio celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si los cónyuges hubiesen cohabitado después de llegar a la edad legal, ni cualquiera fuese la edad, si la esposa hubiese concebido.

III

Art. 15. — Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñare convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado.

Art. 16. — Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no los hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones.

Art. 17. — Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador el ministerio público y toda persona que tuviera interés legítimo respecto de los bienes del ausente.

Art. 18. — El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor al ausente. El ministerio público será parte necesaria en el juicio.

En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen.

Art. 19. — Oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales, se declarará la ausencia y se nombrará curador. Para esta designación serán preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden:

- 1º El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal.
- 2º Los hijos.
- 3º El padre, o en su defecto, la madre.
- 4º Los hermanos y los tíos.
- 5º Los demás parientes en grado sucesible.

Art. 20. — Las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y curadores. Si antes de la designación del curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el artículo 18.

Art. 21. — Termina la curatela de los ausentes declarados:

1º Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado.

2º Por la muerte del mismo.

3º Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.

Art. 22. — La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado apoderado, sin que de ella se tenga noticia por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento.

Ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente.

Art. 23. — Se presume también el fallecimiento de un ausente:

1º Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o hubiere participado en una empresa que implique el mismo riesgo y no se tuviese noticias de él por el término de dos años, contados desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso.

2º Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida, no se tuviese noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

Art. 24. — En los casos de los artículos precedentes podrán pedir la declaración del día presuntivo del fallecimiento justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente, todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate. La competencia del juez se regirá por las normas del artículo 16.

Art. 25. — El juez nombrará defensor al ausente o dará intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción y citará a aquél por edictos, una vez por mes, durante seis meses. Designará, además, un curador a sus bienes siempre que no hubiese mandatario con poderes suficientes, incluso el que prevé el artículo 19, o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase convenientemente el mandato.

Art. 26. — Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez, si hubiere lugar a ello, declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muer-

te y dispondrá la inscripción de la sentencia en el registro del estado civil de las personas.

La declaración de ausencia que prevé el artículo 19 no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas, para conocer el paradero del ausente.

Art. 27. — Se fijará como día presuntivo del fallecimiento:

1º En el caso del artículo 22, el último día del primer año y medio.

2º En el que prevé el artículo 23, inciso 1º, el día del suceso en que se encontró el ausente, y si no estuviese determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.

3º En los supuestos del artículo 23, inciso 2º, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido.

Cuando fuere posible, la sentencia determinará también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.

Art. 28. — Dictada la declaratoria, el juez mandará abrir, si existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido.

Los herederos al día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, previa formación del inventario.

El dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el registro correspondiente, con la prenotación del caso, a nombre de los herederos o legatarios que podrán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Art. 29. — Si hecha la entrega de los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta de su existencia, aquélla quedará sin efecto.

Si se presentasen herederos preferentes o concurrentes preteridos que justificasen su derecho a la época del fallecimiento presunto podrán reclamar la entrega de los bienes o la participación que les corresponda en los mismos, según el caso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1307 y siguientes del Código Civil, en los casos precedentes se aplicará a los frutos percibidos lo dispuesto respecto a los poseedores de buena o mala fe.

Art. 30. — Transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescrita pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.

Art. 31. — La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento disuelve el vínculo matrimonial y habilita al cónyuge del ausente

para contraer nuevas nupcias. La reaparición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio.

Art. 32. — Si el ausente reapareciese podrá reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen; los adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos.

Si en iguales circunstancias se presentasen herederos preferentes o concurrentes preteridos, podrán ejercer la acción de petición de herencia.

Regirá en ambos casos lo dispuesto respecto de las obligaciones y derechos del poseedor de buena o mala fe.

IV

Art. 33. — Agrégase al artículo 108 del Código Civil, como segundo apartado, el siguiente texto:

«En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver.»

V

Art. 34. — Toda persona puede constituir en «bien de familia» un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente.

Art. 35. — La constitución del «bien de familia» produce efecto a partir de su inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente.

Art. 36. — A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.

Art. 37. — El «bien de familia» no podrá ser enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad del cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuere incapaz, sólo podrá autorizarse el gravamen cuando mediere causa grave o manifiesta utilidad para la familia.

Art. 38. — El «bien de familia» no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca.

Art. 39. — Serán embargables los frutos que produzca el bien en cuanto no sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia.

En ningún caso podrá afectar el embargo más del cincuenta por ciento de los frutos.

Art. 40. — El «bien de familia» estará exento del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la Nación cuando ella se opere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 y siempre que no resultare desafectado dentro de los cinco años de operada la transmisión.

Art. 41. — El propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta propia el inmueble o la industria en él existente, salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas.

Art. 42. — La inscripción del «bien de familia» se gestionará, en jurisdicción nacional, ante la autoridad administrativa que establezca el Poder Ejecutivo nacional. En lo que atañe a inmuebles en las provincias, los poderes locales determinarán la autoridad que tendrá competencia para intervenir en la gestión.

Art. 43. — El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las circunstancias previstas por los artículos 34 y 36 de esta ley, consignando nombre, edad, parentesco y estado civil de los beneficiarios, así como los gravámenes que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, la gestión deberá ser hecha por todos los copropietarios, justificando que existe entre ellos el parentesco requerido por el artículo 36.

Art. 44. — Cuando se hubiere dispuesto por testamento la constitución de un «bien de familia», el juez de la sucesión, a pedido del cónyuge o, en su defecto, de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro inmobiliario respectivo siempre que fuere procedente con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez.

Art. 45. — No podrá constituirse más de un «bien de familia». Cuando alguien resultase ser propietario único de dos o más bienes de familia, deberá optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fija la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como bien de familia el constituido en primer término.

Art. 46. — Todos los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción del «bien de familia» estarán exentos del impuesto de sellos, de derecho de oficina y de las tasas correspondientes al Registro de la Propiedad, tanto nacionales como provinciales.

Art. 47. — La autoridad administrativa estará obligada a prestar a los interesados, gratuitamente, el asesoramiento y la colaboración necesarios para la realización de todos los trámites relacionados con la constitución e inscripción del «bien de familia». Si, ello no obstante, los interesados desearan la intervención de profesionales,

los honorarios de éstos no podrán exceder, en conjunto, del 1 % de la valuación fiscal del inmueble para el pago de la contribución territorial.

Art. 48. — En los juicios referentes a la transmisión hereditaria del bien de familia, los honorarios de los profesionales intervinientes no podrán superar al 3 % de la valuación fiscal, rigiéndose por los principios generales la regulación referente a los demás bienes.

Art. 49. — Procederá la desafectación del «bien de familia» y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:

- a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge; a falta del cónyuge o si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido siempre que el interés familiar no resulte comprometido;
- b) A solicitud de la mayoría de los herederos, cuando el «bien de familia» se hubiere constituido por testamento, salvo que medie disconformidad del cónyuge superviviente o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión o la autoridad competente resolverá lo que sea más conveniente para el interés familiar;
- c) A requerimiento de la mayoría de los coparticipes, si hubiere condominio, computada en proporción a sus respectivas partes;
- d) De oficio o a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistieren los requisitos previstos en los artículos 34, 36 y 41 o hubieren fallecido todos los beneficiarios;
- e) En caso de expropiación, reivindicación, venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad competente.

Art. 50. — Contra las resoluciones de la autoridad administrativa que, en el orden nacional, denieguen la inscripción del «bien de familia» o decidan controversias referentes a su desafectación, gravamen u otras gestiones previstas en esta ley, podrá recurrirse en relación ante el juez de lo civil en turno.

VI

Art. 51. — Toda persona podrá imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios, por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.

El juez podrá autorizar la división, total o parcial, a pedido de la parte interesada y sin es-

perar el transcurso del plazo establecido, cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero.

Art. 52. — Los herederos podrán convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes entre los coparticipes.

Si hubiere herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes legales no tendrá efecto hasta la homologación judicial.

Estos convenios podrán renovarse al término del lapso establecido.

Cualquiera de los herederos podrá pedir la división, antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas justificadas.

Art. 53. — Cuando en el acervo hereditario existiere un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o de otra índole tal que constituya una unidad económica, el cónyuge superviviente que lo hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien por un término máximo de diez años.

A instancia de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la decisión.

Durante la indivisión, la administración del establecimiento competirá al cónyuge sobreviviente.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos.

Art. 54. — La indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su inscripción en el registro respectivo.

Art. 55. — Durante la indivisión autorizada por la ley, los acreedores particulares de los copropietarios no podrán ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal del mismo, pero sí podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su respectivo deudor.

Art. 56. — En los casos de indivisión de bienes hereditarios situados en la Capital Federal o territorios nacionales, la Dirección General Impositiva, a pedido de los interesados, acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin interés, con o sin fianza, los que en ningún caso excederán del término fijado a la indivisión ni de cinco años, si dicho término fuera mayor. Si la división de la herencia tuviere lugar antes de que transcurran los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y el saldo de impuesto que se adeudare deberá ingresarse dentro del mes siguiente a aquel en el cual se hubiere producido la división.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará de los gobiernos provinciales el otorgamiento de fran-

quicias análogas a las establecidas en este artículo.

Art. 57. — La presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogados los artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Penal y todas las disposiciones que y en cuanto se opusieren a ella.

Art. 58. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 11 de diciembre de 1954.

Ventura González. — Raúl Bustos Fierro. — Victorio M. Tommasi. — Héctor A. Blasi. — Esther M. Fardul. — Pedro A. Gomis. — Rodolfo Gramajo. — Enrique V. Labanca. — Edmundo Parino. — Jorge S. Pellerano. — Beato Miguel Tejada.

COMPARATIVO

Proyecto del Poder Ejecutivo

Despacho de las comisiones

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Cuando el menor que no ha cumplido dieciséis años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito, la autoridad judicial competente procederá a comprobar el mismo, tomar conocimiento personal y directo del menor, sus padres, tutor o guardadores y ordenar los informes y peritaciones conducentes al estudio de la personalidad de aquél, sus condiciones familiares y el ambiente en que viviere. En caso de estimarlo necesario podrá disponer la internación del menor en un instituto de observación antes de resolver en definitiva. Esta medida durará tan sólo el tiempo indispensable para su mejor examen y facilitar la ulterior adopción del régimen que correspondiera aplicar, conforme lo dispone el artículo siguiente.

Art. 2º — Si las circunstancias del hecho y las condiciones personales del menor evidenciaren que éste no presenta problemas graves de conducta o ambientales, el juez podrá dejarlo con sus padres o tutor, libremente o bajo el régimen de libertad vigilada; podrá también dejarlo con sus guardadores o con otras personas idóneas, pero en estos casos se establecerá siempre un régimen de libertad vigilada apropiado.

Si el menor se hallare abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presentare graves problemas de conducta, el juez podrá disponer del mismo en algunas de las formas previstas en el párrafo anterior o proceder a su internación en un instituto adecuado.

Art. 3º — Cuando el menor de dieciséis a dieciocho años de edad, incurriere en un hecho que la ley como delito y no se tratare de infracciones de acción privada o sancionadas con un año o menos de privación de la libertad, con multa o con inhabilitación, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso. No obstante, cualquiera fuere la naturaleza del hecho, se procederá conforme lo disponen los artículos 1º y 2º.

Art. 4º — Cuando el menor a que se refiere el artículo precedente haya cumplido dieciocho años de edad y por lo menos un año de internación u otro tratamiento tutelar, las autoridades competentes informarán al juez sobre su conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales.

Si de las conclusiones de ese informe, las modalidades del hecho y los antecedentes del menor, apareciere fundadamente necesario aplicarle una sanción, el juez así lo resolverá, conforme a la ley penal, pudiendo reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Artículo 1º — Cuando el menor que no ha cumplido dieciséis años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito, la autoridad judicial competente procederá a comprobar el mismo, tomar conocimiento personal y directo del menor, sus padres, tutor o guardadores y ordenar los informes y peritaciones conducentes al estudio de la personalidad de aquél, sus condiciones familiares y el ambiente en que viviere. En caso de estimarlo necesario podrá disponer la internación del menor en un establecimiento adecuado antes de resolver en definitiva. Esta medida durará tan sólo el tiempo indispensable para su mejor examen y facilitar la ulterior adopción del régimen que correspondiera aplicar, conforme lo dispone el artículo siguiente.

Art. 3º — Cuando el menor de dieciséis a dieciocho años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito y no se tratare de infracciones de acción privada o sancionadas con un año o menos de privación de la libertad, con multa o con inhabilitación, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso. No obstante, cualquiera fuere la naturaleza del hecho, se procederá conforme lo disponen los artículos 1º y 2º.

Art. 4º — Cuando el menor a que se refiere el artículo precedente haya cumplido dieciocho años de edad y por lo menos un año de internación u otro tratamiento tutelar, las autoridades competentes informarán al juez sobre su conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales.

Si de las conclusiones de ese informe, las modalidades del hecho, los antecedentes del menor y la impresión personal directa del juez apareciere fundadamente necesario aplicarle una sanción, éste así lo resolverá, conforme a la ley penal, pudiendo reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Proyecto del Poder Ejecutivo

Despacho de las comisiones

También en estas circunstancias, el juez podrá proceder, en todos los casos, con arreglo a las demás facultades conferidas en los artículos 1º y 2º.

Art. 5º — La sanción privativa de libertad que el juez impusiere se hará efectiva en institutos especiales. Si en esta situación el infractor alcanzare los veintidós años de edad, será trasladado, para cumplir el resto de la sanción impuesta, a los establecimientos para adultos.

Art. 6º — En todos los casos en que se advirtiere una anormalidad física, psicológica o mental en el menor, éste será sometido al tratamiento especial más adecuado.

Art. 7º — En los casos en que un menor que no ha cumplido dieciocho años de edad, incurriere en un hecho que la ley califica como delito, el juez podrá declarar, según las circunstancias: la pérdida de la patria potestad, la pérdida o suspensión de su ejercicio, la privación de la tutela o guarda a quienes la ejercieren, y disponer el régimen que corresponda.

Art. 8º — El menor de dieciocho a veintidós años de edad, que infrinja las disposiciones de la ley penal, quedará sometido a ella. Si antes de cumplir los veintidós años debiera ser privado de su libertad, sea durante el proceso o a efectos de cumplir la sanción, será internado en institutos especiales y, hasta tanto sean debidamente organizados los mismos, en secciones especiales de establecimiento para mayores.

A partir de los veintidós años de edad, será trasladado a establecimientos comunes para adultos.

Art. 9º — Cuando la acción correspondiente a un hecho que la ley califica como delito, cometido por un menor de dieciséis a dieciocho años, fuere iniciada después que el mismo alcanzó esta última edad, el juez procederá en las formas contempladas en los artículos 1º a 4º.

Pero si el inculpado fuere, al tiempo de su juzgamiento, mayor de veintidós años, no aplicará las medidas tutelares previstas en dichos artículos.

Art. 10. — Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.

Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta, o no, a efectos de considerarlo reincidente.

Art. 11. — La modificación, suspensión o cesación definitiva de las medidas tutelares, responderá a la mejor protección del menor.

A tales efectos el juez procederá, de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, debiendo informarse de la conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales del menor, como así también de las condiciones de las personas que lo tienen o tendrán a su cargo y del ambiente en que vive o habrá de vivir.

Las medidas cesarán de pleno derecho con la mayoría de edad civil.

Art. 12. — Las normas precedentes se aplicarán aún cuando el menor fuere emancipado por matrimonio o por otra causa legal.

También en estas circunstancias, el juez podrá proceder, en todos los casos, con arreglo a las demás facultades conferidas en los artículos 1º y 2º.

Art. 10. — Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.

Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta, o no, a efectos de considerarlo reincidente.

Art. 11. — La modificación, suspensión o cesación de las medidas tutelares, responderá a la mejor protección del menor.

A tales efectos el juez procederá, de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, debiendo informarse de la conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales del menor, como así también de las condiciones de las personas que lo tienen o tendrán a su cargo y del ambiente en que vive o habrá de vivir.

Las medidas cesarán de pleno derecho con la mayoría de edad civil.

Proyecto del Poder Ejecutivo

Despacho de las comisiones

Art. 13. — Las disposiciones precedentes se aplicarán como ley nacional, en todo el territorio de la República.

Para el cumplimiento de la libertad vigilada o de las demás medidas tutelares, las autoridades judiciales de cualquier jurisdicción de la República prestarán la colaboración que se les solicite por otro tribunal, aceptando la delegación que, circunstancialmente, se les haga de las respectivas funciones.

Las sanciones o medidas tutelares que se apliquen de acuerdo a las prescripciones indicadas, podrán hacerse efectivas en jurisdicción nacional, cuando así lo solicitaren las autoridades judiciales competentes.

Art. 14. — Para contraer matrimonio se requiere que la mujer tenga 14 años cumplidos y el hombre 16. Podrá contraerse válidamente con edad menor cuando hubiera concebido la mujer, de aquél con quien pretenda casarse. Podrá también obtenerse dispensa de la edad en el supuesto contemplado en el artículo 132 del Código Penal, la que será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa. El matrimonio celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si la esposa hubiera concebido.

Art. 15. — Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñare convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado.

Art. 16. — Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no los hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, será competente el juez del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones.

Art. 17. — Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador el ministerio público y toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente.

Art. 18. — El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor al ausente. El ministerio público será parte necesaria en el juicio.

En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen.

Art. 19. — Oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales, se declarará la ausencia y se nombrará curador. Para esta designación serán preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden:

1º El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal.

2º Los hijos.

3º El padre, o en su defecto, la madre.

4º Los hermanos y los tíos.

5º Los demás parientes en grado sucesible.

Art. 13. — Para el cumplimiento de la libertad vigilada o de las demás medidas tutelares, las autoridades judiciales de cualquier jurisdicción de la República prestarán la colaboración que se les solicite por otro tribunal, aceptando la delegación que, circunstancialmente, se les haga de las respectivas funciones.

Las sanciones o medidas tutelares que se apliquen de acuerdo a las prescripciones indicadas, podrán hacerse efectivas en jurisdicción nacional, cuando así lo solicitaren las autoridades judiciales competentes.

Art. 14. — Para contraer matrimonio se requiere que la mujer tenga 14 años cumplidos y el hombre 16. Podrá contraerse válidamente con edad menor cuando hubiera concebido la mujer, de aquél con quien pretenda casarse. Podrá también obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contemplados en el artículo 132 del Código Penal, la que será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones establecidas por dicho artículo. El matrimonio celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si los cónyuges hubiesen cohabitado después de llegar a la edad legal, ni cualquiera fuese la edad, si la esposa hubiese concebido.

Art. 16. — Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no los hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones.

Proyecto del Poder EjecutivoDespacho de las comisiones

Art. 20. — Las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y curadores. Si antes de la designación de curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el artículo 18.

Art. 21. — Termina la curatela de los ausentes declarados:

- 1º Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado.
- 2º Por la muerte del mismo.
- 3º Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.

Art. 22. — La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado apoderado, sin que de ella se tenga noticia por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento.

Ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente.

Art. 23. — Se presume también el fallecimiento de un ausente:

- 1º Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o hubiere participado en una empresa que implique el mismo riesgo y no se tuviere noticias de él por el término de dos años, contados desde el día en que ocurrió, o pudo haber ocurrido el suceso.
- 2º Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida, no se tuviere noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

Art. 24. — En los casos de los artículos precedentes, podrán pedir la declaración del día presuntivo del fallecimiento justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente, todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate. La competencia del juez se regirá por las normas del artículo 16.

Art. 25. — El juez nombrará defensor al ausente o dará intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción y citará a aquél por edictos, una vez por mes, durante seis meses. Designará, además, un curador a sus bienes siempre que no hubiese mandatario con poderes suficientes, incluso el que prevé el artículo 19, o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase convenientemente el mandato.

Art. 26. — Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez, si hubiere lugar a ello, declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el registro del estado civil de las personas.

La declaración de ausencia que prevé el artículo 19, no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer el paradero del ausente.

Proyecto del Poder EjecutivoDespacho de las comisiones

Art. 27. — Se fijará como día presuntivo del fallecimiento:

- 1º En el caso del artículo 22, el último día del primer año y medio.
- 2º En el que prevé el artículo 23, inciso 1º, el día del suceso en que se encontró el ausente, y si no estuviese determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.
- 3º En los supuestos del artículo 23, inciso 2º, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido.

Cuando fuere posible, la sentencia determinará también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.

Art. 28. — Dictada la declaratoria, el juez mandará abrir, si existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido.

Los herederos al día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, previa formación del inventario.

El dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el registro correspondiente, con la prenotación del caso, a nombre de los herederos o legatarios que podrán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Art. 29. — Si hecha la entrega de los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta de su existencia, aquélla quedará sin efecto.

Si se presentasen herederos preferentes o concurrentes preteridos que justificasen su derecho a la época del fallecimiento presunto, podrán reclamar la entrega de los bienes o la participación que les corresponda en los mismos, según el caso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1307 y siguientes del Código Civil, en los casos precedentes se aplicará a los frutos percibidos lo dispuesto respecto a los poseedores de buena o mala fe.

Art. 30. — Transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescrita pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.

Art. 31. — La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento disuelve el vínculo matrimonial y habilita al cónyuge del ausente para contraer nuevas nupcias. La reaparición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio.

Art. 32. — Si el ausente reapareciese podrá reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen; los adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos.

Si en iguales circunstancias se presentasen herederos preferentes o concurrentes preteridos, podrán ejercer la acción de petición de herencia.

Regirá en ambos casos lo dispuesto respecto de las obligaciones y derechos del poseedor de buena o mala fe.

Art. 33. — Agrégase al artículo 108 del Código Civil, como segundo apartado, el siguiente texto:

Proyecto del Poder Ejecutivo

Despacho de las comisiones

«En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver.»

Art. 34. — Toda persona puede constituir en «bien de familia» un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente.

Art. 35. — La constitución del «bien de familia» produce efecto a partir de su inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente.

Art. 36. — A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.

Art. 37. — El «bien de familia» no podrá ser enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad del cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuere incapaz, sólo podrá autorizarse el gravamen cuando mediare causa grave o manifiesta utilidad para la familia.

Art. 38. — El «bien de familia» no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca.

Art. 39. — Serán embargables los frutos que produzca el bien en cuanto no sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia. En ningún caso podrá afectar el embargo más del cincuenta por ciento de los frutos.

Art. 40. — El «bien de familia» estará exento del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la Nación cuando ella se opere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 y siempre que no resultare desafectado dentro de los cinco años de operada la transmisión.

Art. 41. — El propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta propia el inmueble o la industria en él existente, salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar solo transitoriamente y por causas debidamente justificadas.

Art. 42. — La inscripción del «bien de familia» se gestionará, en jurisdicción nacional, ante la autoridad administrativa que establezca el Poder Ejecutivo nacional. En lo que atañe a inmuebles en las provincias, los poderes locales determinarán la autoridad que tendrá competencia para intervenir en la gestión.

Art. 43. — El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las circunstancias previstas por los artículos 34 y 36 de esta ley, consignando nombre, edad, parentesco y estado civil de los beneficiarios, así como los gravámenes que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, la gestión deberá

Proyecto del Poder EjecutivoDespacho de las comisiones

ser hecha por todos los copropietarios, justificando que existe entre ellos el parentesco requerido por el artículo 36.

Art. 44. — Cuando se hubiere dispuesto por testamento la constitución de un «bien de familia», el juez de la sucesión, a pedido del cónyuge o, en su defecto, de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro inmobiliario respectivo siempre que fuere procedente con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez.

Art. 45. — No podrá constituirse más de un «bien de familia». Cuando alguien resultase ser propietario único de dos o más bienes de familia, deberá optar por la subsistencia de uno sólo en ese carácter dentro del plazo que fija la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como bien de familia el constituido en primer término.

Art. 46. — Todos los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción del «bien de familia» estarán exentos del impuesto de sellos, de derechos de oficina y de las tasas correspondientes al Registro de la Propiedad, tanto nacionales como provinciales.

Art. 47. — La autoridad administrativa estará obligada a prestar a los interesados, gratuitamente, el asesoramiento y la colaboración necesarios para la realización de todos los trámites relacionados con la constitución e inscripción del «bien de familia». Si, ello no obstante, los interesados desearan la intervención de profesionales, los honorarios de éstos no podrán exceder, en conjunto, del 1 % de la valuación fiscal del inmueble para el pago de la contribución territorial.

Art. 48. — En los juicios referentes a la transmisión hereditaria del bien de familia, los honorarios de los profesionales intervinientes no podrán superar al 3 % de la valuación fiscal, rigiéndose por los principios generales la regulación referente a los demás bienes.

Art. 49. — Procederá la desafectación del «bien de familia» y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:

- a) a instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge; a falta del cónyuge o si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido siempre que el interés familiar no resulte comprometido;
- b) a solicitud de la mayoría de los herederos, cuando el «bien de familia» se hubiere constituido por testamento, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión o la autoridad competente resolverá lo que sea más conveniente para el interés familiar;
- c) a requerimiento de la mayoría de los coparticipes, si hubiere condominio, computada en proporción a sus respectivas partes;
- d) de oficio o a instancia de cualquier interesado: cuando no subsistieren los requisitos previstos en los artículos 34, 36 y 41; si hubieren fallecido todos los beneficiarios; o cuando se hubieren efectuado mejoras o construcciones que valoricen el inmueble, duplicando por lo menos el límite máximo fijado por la

Artículo 49. — Procederá la desafectación del «bien de familia», y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:

- a) a instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge; a falta del cónyuge o si éste fuera incapaz se admitirá el pedido siempre que el interés familiar no resulte comprometido;
- b) a solicitud de la mayoría de los herederos, cuando el «bien de familia» se hubiere constituido por testamento, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión o la autoridad competente resolverá lo que sea más conveniente para el interés familiar;
- c) a requerimiento de la mayoría de los coparticipes, si hubiere condominio, computada en proporción a sus respectivas partes;
- d) de oficio o a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistieren los requisitos previstos en los artículos 34, 36 y 41 o hubieren fallecido todos los beneficiarios;

Proyecto del Poder Ejecutivo

Despacho de las comisiones

reglamentación para la constitución del «bien de familia»;

- e) en caso de expropiación, reivindicación, venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad competente.

Art. 50.— Contra las resoluciones de la autoridad administrativa que, en el orden nacional, denieguen la inscripción del «bien de familia», o decidan controversias referentes a su desafectación, gravamen u otras gestiones previstas en esta ley, podrá recurrirse en relación ante el juez de lo civil en turno.

Art. 51.— Toda persona podrá imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios, por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.

Cuando concurren circunstancias graves, o de manifiesta utilidad, el juez podrá autorizar la división a pedido de uno o varios coherederos, sin esperar al transcurso del plazo impuesto.

Art. 52.— Los herederos podrán convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes entre los copartícipes.

Si hubiere herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes legales, no tendrá efecto hasta la homologación judicial.

Estos convenios podrán renovarse al término del lapso establecido.

Cualquiera de los herederos podrá pedir la división, antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas justificadas.

Art. 53.— Cuando en el acervo hereditario existiere un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole tal que constituya una unidad económica, el cónyuge superviviente que lo hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien por un término máximo de diez años.

A instancia de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la división.

Durante la indivisión, la administración del establecimiento competirá al cónyuge sobreviviente.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos.

- e) en caso de expropiación, reivindicación, venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad competente.

Artículo 51.— Toda persona podrá imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios, por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.

El juez podrá autorizar la división, total o parcial, a pedido de la parte interesada y sin esperar el transcurso del plazo establecido, cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero.

Proyecto del Poder Ejecutivo

Despacho de las comisiones

Art. 54. — La indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su inscripción en el registro respectivo.

Art. 55. — Durante la indivisión autorizada por la ley, los acreedores particulares de los copropietarios no podrán ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal del mismo, pero sí podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su respectivo deudor.

Art. 56. — En los casos de indivisión de bienes hereditarios situados en la Capital Federal o territorios nacionales, la Dirección General Impositiva, a pedido de los interesados, acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin interés, con o sin fianza, los que en ningún caso excederán del término fijado a la indivisión ni de cinco años, si dicho término fuera mayor. Si la división de la herencia tuviere lugar antes de que transcurran los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y el saldo de impuesto que se adeudare deberá ingresarse dentro del mes siguiente a aquel en el cual se hubiere producido la división.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará de los gobiernos provinciales el otorgamiento de franquicias análogas a las establecidas en este artículo.

Art. 57. — La presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogadas todas las disposiciones que y en cuanto se opusieren a ella.

Art. 58. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Angel G. Borlenghi.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 8 de diciembre de 1954.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, remitiéndole el adjunto proyecto de ley que introduce modificaciones a las normas en vigor abarcando, directamente o indirectamente, distintos aspectos del régimen de los menores y de la familia.

I. — Es bien conocida la constante preocupación del gobierno por los problemas del niño, de quien ha predicado que es el único privilegiado en nuestra tierra. Y esto es así, porque esos niños de hoy, han de ser los hombres del mañana, es decir, el sector principal de ese capital humano que constituye el factor básico de la organización social.

El segundo Plan Quinquenal, aprobado por ley 14.184 fija, a través de varias enunciaciones, la importante acción estatal a realizar, dirigida al perfeccionamiento de la niñez y de la juventud. Si esto es así con referencia, en general, a ese núcleo de nuestra población, se comprenderá por qué ha desplegado mayores energías y está dispuesto a desplegar el gobierno para redimir a los niños y jóvenes que, tal vez llevados por un ambiente familiar o social nocivo, cayeron en infracciones antijurídicas.

Si los padres manifiestan su mayor afecto por sus hijos débiles y enfermos, también los gobernantes deben poner el acento en las medidas de tutela,

Artículo 57. — La presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogados los artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Penal y todas las disposiciones que y en cuanto se opusieren a ella.

socorro y protección destinadas a los ciudadanos moralmente debilitados, especialmente cuando son niños y jóvenes.

La idea que priva en el proyecto —artículos 1º a 13— es la de substraer a los menores del Código Penal, para ser sometidos a un régimen especial, adecuado a las modalidades de cada uno, destinándolos, cuando correspondiera, a establecimientos asistenciales y educacionales.

Excluir al menor del ámbito penal, constituye un postulado de la Doctrina Nacional: esa etapa de la vida humana, con los complejos problemas que plantea, debe ser considerada y resuelta de acuerdo con principios e instituciones específicas, formadas en los moldes del Justicialismo peronista.

Las disposiciones legales que se proponen sintetizan principios de fondo aplicables a la materia y constituyen un anticipo a la reforma integral que sobre el régimen de la minoridad se tiene a estudio y se elevará oportunamente a la consideración del Honorable Congreso.

II — Se considera impedimento por la ley de matrimonio civil, sancionada el 12 de noviembre de 1888, no tener la mujer doce años cumplidos y el varón catorce. Siendo que el matrimonio no consiste sólo en la posibilidad de procrear, sino que supone un conjunto de responsabilidades y una conducta de cada cónyuge frente al otro y de ambos frente a los hijos y a la sociedad, que difícilmente pueda darse en edad tan temprana, el proyecto la eleva a catorce y dieciséis años, respectivamente.

Nuestra ley en vigencia adopta las más bajas edades, que eran las fijadas en el derecho romano y en el antiguo derecho canónico y que coinciden, generalmente, con la posibilidad fisiológica de la generación.

El código suizo —artículo 96— exige veinte años para el varón y dieciocho para la mujer. En Francia, dieciocho y quince años; en Finlandia, dieciocho y diecisiete. El código alemán, veintiuno y dieciséis, permitiendo la dispensa de edad para el primero siempre que tenga más de dieciocho años. El código del matrimonio y la familia ruso, dictado en 1926, exige dieciocho años sin distinción de sexo. El del Brasil, establece la edad de dieciocho y dieciséis años; en tanto que el código italiano, coincidiendo con el de derecho canónico, requiere dieciséis años para el varón y catorce para la mujer. Se propician estas últimas edades mínimas en el proyecto, teniendo en cuenta las modalidades de nuestra población y el desarrollo físico y psíquico adquirido a esa altura de la minoridad.

Por razones obvias se conceden dispensas a los menores de esa edad cuando la mujer hubiere concebido de aquel con quien pretende casarse, o se plantee la situación prevista en el artículo 132 del Código Penal. Para evitar dilaciones, el magistrado que entienda en la causa acordará, en esta última hipótesis, la autorización respectiva (artículo 14).

III. — El proyecto contempla substanciales modificaciones al Código Civil sobre la ausencia con presunción de fallecimiento, derogando los artículos 110 a 125 de ese cuerpo de leyes, que tantas críticas justificadas han merecido (artículos 15 a 32).

En primer lugar, se refiere a la situación de las personas que han desaparecido dejando bienes abandonados. Con respecto a ellas no se plantea incertidumbre sobre si viven o han muerto, pero la necesidad de proveer a la conservación de sus bienes justifica el establecimiento de normas legales tendientes a ese fin. Encuéntrase aquí en juego el interés del desaparecido, el de los acreedores y herederos y también el de la sociedad, que no puede asistir impasible a la pérdida o destrucción de bienes aptos para satisfacer las necesidades de la población.

En cuanto a la presunción de fallecimiento, se reducen los plazos requeridos para la declaración de la muerte presunta, de seis a tres años en los casos de ausencia ordinaria y de tres a dos años en los de ausencia calificada, quedando reducido a seis meses en el supuesto especial del naufragio. Con la rapidez y facilidad de las modernas comunicaciones, los plazos del código resultan excesivos. En la conveniencia de limitarlos coinciden hoy todas las opiniones, y en este sentido se orientan también las legislaciones más recientes.

La mayor simplicidad del sistema aconseja, además, suprimir la distinción entre posesión provisoria y definitiva de los bienes del ausente. Declarado el fallecimiento presunto, aquéllos deben transferirse a los herederos, quienes inscribirán el dominio a su nombre en el registro con la prenotación del caso, quedando así impedido de enajenar o gravar esos bienes sin autorización judicial.

Transcurridos cinco años a partir del día presunto del fallecimiento —en lugar de los quince que desde la ausencia establece la ley vigente—, la prenotación queda sin efecto y los interesados pueden disponer libremente de los bienes.

Se prevé también la fijación de la hora presumtiva del fallecimiento, para los supuestos de conmovencia.

La inadecuada redacción del artículo 125 del código actual, que ha determinado soluciones contradictorias, queda superada mediante las pertinentes disposiciones del proyecto.

Cabe señalar, asimismo, la supresión de algunos recaudos legales innecesarios, como es la prueba de que el ausente «haya sido gravemente herido», en el conflicto de guerra determinante de la declaración del fallecimiento presunto, o que en el desastre común «hayan muerto varias personas».

En el orden de los efectos que produce el fallecimiento presunto del ausente, es menester poner de relieve la posibilidad que se abre a favor del cónyuge para contraer nuevo matrimonio. Con ello se asignan a la presunción legal de la muerte todas las consecuencias posibles, y se elude la incongruencia del régimen vigente, que reputa al ausente fallecido respecto de ciertas relaciones jurídicas (dominio de los bienes, sociedad conyugal), pero en cambio lo considera aún con vida, para otros supuestos (inhabilidad de su cónyuge para contraer nuevas nupcias).

La declaración de fallecimiento presunto, formulada por los jueces, induce necesariamente la certeza moral acerca de ese hecho, y por consiguiente proyecta esa misma clase de certeza sobre la efectiva disolución de la unión conyugal. Es en esta certidumbre, establecida por ministerio de la ley, que se cimenta la facultad acordada al cónyuge del muerto presunto para contraer nuevas nupcias.

La eventual reaparición del ausente no debe ser óbice para la subsistencia de esa solución. Por respetable y digna de consideración que sea, en ese supuesto, la situación de aquel a quien se tuvo por fallecido, lo es, en mayor grado, la del segundo hogar creado al amparo de una presunción legal razonable y prudente, que permite a cualquiera de los esposos rehacer su vida y reencontrar en el seno de una nueva familia la felicidad a que todo ser humano tiene derecho.

El artículo 33 contempla situaciones que se presentan en ciertos casos excepcionales en que, a pesar de no existir dudas sobre la muerte de una persona, la desaparición del cadáver constituye un obstáculo insalvable para asentar la partida de defunción, único elemento probatorio admitido por la ley. Los accidentes en las minas y en la navegación suministran ilustrativos ejemplos al respecto. Adviértase que en estos casos, a diferencia de los que en el proyecto se prevén bajo el rubro de «presunción de fallecimiento», ninguna incertidumbre se plantea sobre la existencia del desaparecido, toda vez que las circunstancias que rodean al hecho dan por resultado la certidumbre moral de su muerte. Sería injusto, por consiguiente, privar a las partes interesadas de todo medio de prueba.

Tratándose de situaciones de excepción, en las que se presentan circunstancias que deben ser apreciadas y valoradas, la comprobación de la muerte constituye en estos casos un verdadero acto jurisdiccional, que debe estar a cargo del juez y no del oficial del Registro Civil como en los casos ordinarios.

IV. — Los artículos 34 a 50 disponen sobre el «bien de familia».

Siendo la familia una célula de la sociedad, todo cuanto se haga para vigorizar a aquélla ha de redundar en beneficio de ésta, y, por otra parte, no ha de

poder lograrse la consolidación y armonía del todo social si no se comienza por poner orden, seguridad y concordia, en cada una de sus partes componentes. No ha de olvidarse que, según la concepción del Estado y de la sociedad sustentada por la doctrina peronista, la sociedad, más que una simple unión de personas humanas, es reunión de familias a través de las cuales se incorporan los hombres a la sociedad civil para lograr en ella el bien común, que es el bien de todos y cada uno de los individuos integrantes de la comunidad.

Es por admisión de estos postulados que tanto la Constitución Justicialista de 1949 como el segundo Plan Quinquenal de gobierno, han querido rodear al grupo familiar de las mayores garantías que aseguren su supervivencia, su cohesión, su estabilidad y su mejoramiento económico.

En el orden jurídico argentino, principalmente por obra de esos estatutos, la familia constituye el primero de los organismos sociales, que no en vano define el texto constitucional como «núcleo primario y fundamental de la sociedad», cuyos derechos «reconoce el Estado» en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. Por lo demás, la misma ley fundamental hace de la familia «objeto de preferente protección por parte del Estado», y entre los medios para hacer efectiva esa protección menciona la formación de la unidad económica familiar y la garantía del Estado en favor del «bien de familia», conforme a lo que una ley especial determine (Constitución Nacional, artículo 37, ap. II, incisos 2º y 3º).

Consecuente con esta orientación de nuestra doctrina, el segundo Plan Quinquenal incluye entre los objetivos generales del capítulo I, la preferente atención que recibirá por parte del Estado la familia mediante el desarrollo y protección de los derechos de ella que emergen del artículo 37 de la Constitución Nacional.

En la ejecución de tales propósitos, cabe señalar el primero de los objetivos especiales del mismo capítulo, según el cual, en el quinquenio 1953-1957, la protección de la familia se concretará en la adopción de medidas particulares de protección y fomento que posibiliten la formación del patrimonio familiar (inciso b), y en el establecimiento de exenciones impositivas adecuadas en concepto de «cargas de familia» (inciso d).

Con sentido análogo, el segundo Plan Quinquenal, en el rubro relativo a política impositiva, no sólo preconiza la supresión o reducción de los impuestos que graviten en desmedro de la integración del núcleo familiar (XXII. E. 11), sino que dispone imperativamente que «el bien de familia no será gravado con impuestos cuando se transmita por causa de muerte dentro del núcleo familiar» (XXII. E. 12). Finalmente, el capítulo XXIX, que se refiere a la legislación general, propicia el aseguramiento de la unidad económica familiar, garantizando los medios necesarios para que se produzca y subsista el grupo familiar.

En la vía marcada por todos esos antecedentes, entre los cuales debe computarse el proyecto de ley que enviara el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 1947, y que ahora se substituye por el presente en mérito de los nuevos estudios realizados por los organismos técnicos respectivos, el régimen propuesto sobre los bienes de familia tiende a incrementar la cohesión y estabilidad del grupo doméstico. No puede haber familia vi-

gorosa, si ésta queda librada a su sola suerte, sin el auxilio de medidas que remedien la posible desaparición de quien es su cabeza y sostén o las fluctuaciones de la condición económica de este último. No ha de olvidarse que todos los miembros de la familia en una u otra forma concurren a la formación de los bienes de que es titular, por lo general, el jefe del grupo. De aquí que no sea exagerado ver en el patrimonio del padre de familia una forma de propiedad en condominio, que en alguna medida conviene liberar de los peligros que representan la imprevisión, la necesidad, o aun la misma inconducta del titular, que puede ser llevado por un mal negocio o por abuso del crédito, o por la fuerza de las pasiones, a hipotecar y comprometer los bienes que no son exclusivamente suyos sino en verdad de la familia que él ha formado.

La institución del bien de familia, al substraer del movimiento económico algún inmueble rural o urbano, asegura a la familia contra esa eventualidad e impide que aquello que se ha formado con la cooperación solidaria de padres e hijos pueda menoscabarse o destruirse por la sola acción de uno de sus agentes productores.

A diferencia de lo que ocurría en la regulación que hicieron los proyectos nacionales anteriores del bien de familia, el presente no fija un valor máximo definido a los inmuebles susceptibles de ser afectados en ese carácter, supeditando, en cambio, ese límite a las necesidades de sustentación y alojamiento de la familia beneficiaria, según normas que establecerá la reglamentación.

El temperamento adoptado presenta una doble ventaja. Por lo pronto así se salva el escollo que implica la fijación legal de un límite máximo de valuación del bien, siempre arbitrario en razón del sinnúmero de circunstancias variables que condicionan su equitativa estimación en orden a las necesidades familiares, y la determinación de extensiones prefijadas de los inmuebles rurales, cuya efectiva productividad puede ser distinta según su calidad y ubicación.

Pero, además, cualquier canon preestablecido tiene la desventaja de resultar inequitativo respecto de las familias numerosas, que son las que el Estado está más interesado en proteger adecuadamente para aliviar las cargas de los padres más sacrificados.

El régimen proyectado permitirá ponderar, por una parte, las posibilidades de rendimiento del inmueble que se desea desafectar, y por otra, las exigencias de la familia que se desea proteger, encarradas con el criterio de austeridad y sobriedad exento con todo de mezquindad, que es propio de la Doctrina Nacional que el Poder Ejecutivo se hace un deber en realizar cabalmente.

Entrando en la consideración de otros aspectos del proyecto, cabe señalar que el fin mismo de la institución requiere, como ahora se propone, la afectación no sólo del bien, sino también de sus frutos a la satisfacción de las necesidades de la familia beneficiaria. De aquí también que se exija, salvo situaciones transitorias excepcionales que, tratándose de viviendas, la familia viva en el predio respectivo y que, si se trata de otra clase de bienes, el titular realice la explotación por cuenta propia. Sobre todo con relación al campo esto es fundamental para lograr el arraigo de la familia campesina y para conseguir, como tantas veces se ha propugnado, que la tierra no sea un bien de renta sino un instrumento de producción.

Ya en el funcionamiento de la institución, la defensa de ella queda encomendada en primer término al cónyuge del propietario del bien, después a los demás miembros de su familia y destinatarios de la afectación y luego a la autoridad competente, cuya intervención es indispensable para la desafectación del inmueble de su destino.

La inembargabilidad y la inalienabilidad no deben llevarse más allá de lo que exijan la posibilidad de transmitir el bien previa desafectación, cuando concurre la decisión del cónyuge del propietario del inmueble o de los demás beneficiarios, y en defecto de ella, la autorización judicial. El mismo principio explica también que sea factible embargar la parte de frutos del inmueble afectado que no se juzgue indispensable para cubrir las necesidades de la familia.

Por último cabe destacar la novedad que contiene este proyecto con respecto a los anteriores y que consiste en la exención generalizada de los impuestos a la transmisión de bienes *mortis causa*, de sellado y tasas de inscripción en el Registro de la Propiedad, que favorece a la institución del bien de familia.

El Poder Ejecutivo está persuadido que el fracaso del régimen estructurado por el artículo 13 de la ley 10.284 es la palmaria demostración de que la liberación del impuesto a la herencia, especialmente, por entero coherente con la directiva ya recordada del segundo Plan Quinquenal, es decisiva para atraer el interés del pueblo hacia esa institución del bien de familia. Sólo así hará el hombre modesto el sacrificio de la disponibilidad eventual de su inmueble, desde ya erigido en bien de familia, para asegurar en cualquier contingencia ulterior la tranquilidad y estabilidad económica de los suyos, propósito que resultaría frustrado en la mayoría de los casos por la necesidad de gravar o enajenar el bien que se transmite a los hijos para hacer frente al impuesto sucesorio que recae sobre la misma transmisión.

Por esto, la desgravación debe extenderse a los inmuebles sitos en las jurisdicciones provinciales. No podrá verse en ello un quebrantamiento de las facultades impositivas de las provincias respecto de las personas o las cosas existentes en su territorio. Desde que el bien de familia es una institución impuesta por la Constitución Nacional, y ya que según se ha visto no hay bien de familia practicable si no concurre en él la aludida exención impositiva, paradójico sería admitir en el caso la coexistencia de poderes locales de imposición, incompatibles con la subsistencia del bien de familia. Es inexcusable concluir que quien quiso el fin, quiso también los medios adecuados a la obtención de ese mismo fin. Por tanto, si la voluntad del pueblo justicialista expresada por la voz y el mandato de sus auténticos y legítimos representantes impuso al gobierno de la Nación la obligación precisa de garantizar el bien de familia, ha tenido que darle los medios necesarios para que esa institución sea en nuestro país una realidad feliz y no una enunciación jurídica sin posibilidades de aplicación práctica carente de influencia efectiva en la vida nacional.

En una política coincidente con la expuesta, se establece que la autoridad administrativa deberá prestar a los interesados, gratuitamente, el asesoramiento y la colaboración necesarios para realizar todos los trámites de constitución e inscripción del bien de familia, haciéndose así superflua la intervención de pro-

fesionales, que siempre hará onerosa la gestión. Pero para el caso de que los interesados deseen recurrir a ella, se fija un límite máximo a los honorarios respectivos que ha de importar una considerable reducción de los establecidos por arancel. Desde que el Estado renuncia al cobro de diversos impuestos en obsequio al éxito de la institución proyectada, parece lógico eliminar o reducir otras erogaciones de significación que pudiesen obstar a la difusión de la iniciativa que se propone en beneficio de la familia argentina.

V. — Finalmente, los artículos 51 a 56 se refieren a la indivisión forzosa de bienes hereditarios, propugnando remediar los perjudiciales efectos que, para la unidad y estabilidad de las familias, ocasiona el régimen actual referente a la división de dichos bienes.

El proyecto faculta a los propietarios de bienes imponer a los herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios por un término máximo de diez años. Ciertamente, es juicioso pensar que el mejor defensor que puede encontrar el núcleo familiar es el padre o la madre que lo han formado y que ordinariamente han estado día tras día pendiente de su suerte. Por tanto, si ante la perspectiva de la muerte el fundador de la familia, en vista de las intimidades que él conoce mejor que nadie, desea prolongar esa protección que él ha brindado a los suyos mediante una prudente indivisión temporaria de los bienes que les deja, la ley no debe sino favorecer y mantener esa decisión. Y aun si se trata de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole, con tal que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años.

En el mismo orden de ideas, el proyecto autoriza a los herederos para celebrar convenios de indivisión por un plazo no mayor de diez años.

Pero, sin duda, el precepto de mayor interés es el que acuerda al cónyuge sobreviviente que hubiese adquirido o formado en todo o en parte, un establecimiento comercial o de otra índole el derecho de oponerse a la división de ese bien, que quisiesen hacer los demás herederos por un término máximo de diez años. Es una indivisión impuesta por el cónyuge formada con el esfuerzo personal de una vida que, aluden los autores: el de creador de una industria formada con el esfuerzo personal de una vida que, por la triste circunstancia de haber fallecido su esposa se ve precisado a liquidarla para satisfacer la parte que le reclama los hijos, o tal vez los suegros, con lo que el efectivo dueño de los bienes es tratado por la ley (artículos 1.291, 3.452 y 3.576 del Código Civil) como muerto en vida, y forzado a partir con otros la herencia de sí mismo.

La reforma que hoy se proyecta ha de impedir estas soluciones injustas protegiendo a quien con su trabajo ha creado o adquirido un establecimiento de las condiciones expresadas contra una partición inesperada o inoportuna. Permitirá, en segundo lugar, que la sociedad no se vea privada de una actividad útil o no deba sufrir una dispersión de valores cuya reunión tiene mayor productividad. Tiene, en fin, la originalidad de otorgar la facultad de imponer la indivisión hereditaria —lo que no se había hecho hasta ahora para casos similares— al esposo sobreviviente.

Finalmente, es menester hacer notar la publicidad organizada en todos los supuestos de indivisión, mediante su inscripción en los registros respectivos.

El régimen de publicidad establecido en la medida que resulte practicable de acuerdo a la heterogénea naturaleza de las cosas, que pueden formar parte del acervo, configura un medio indispensable para advertir a los terceros, y especialmente a los acreedores particulares de los herederos, el derecho transitorioamente limitado que éstos vienen a tener sobre su parte hereditaria.

Este régimen resulta ser una exigencia de la misma ley desde que ésta priva a aquellos acreedores del derecho de ejecutar el bien indiviso o una porción ideal suya, impedimento que es una consecuencia ineludible de la misma existencia de la indivisión adoptada, ya que de nada habría valido crear tal sistema si los herederos pudiesen burlarlo por la vía indirecta de la ejecución por parte de sus acreedores reales o aparentes.

Pero lo que les está vedado a los acreedores aludidos, esto es arribar a la liquidación de los bienes indivisos, no resulta prohibido en la misma medida a los propios herederos, puesto que pueden concurrir causas graves que tornen inconveniente la subsistencia de la indivisión, como pueden ser la administración ruinosa que se haga del bien, la improductividad de la explotación, etcétera. En tales supuestos, u otros análogos, la ley contempla con adecuada flexibilidad el recurso judicial que permita hacer cesar la indivisión.

Por último se agrega una disposición tendiente a facilitar el pago de los gravámenes hereditarios mediante concesión de plazos que permitan afrontar su cancelación sin recurrir a la venta forzosa de los bienes sucesorios.

Estas son las razones que motivan y fundamentan el proyecto, para el cual el Poder Ejecutivo solicita de vuestra honorabilidad le preste su aprobación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Angel G. Borlenghi.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González (V.). — Señor presidente: las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal han producido el despacho que está a consideración de la Honorable Cámara; que tiene origen en un proyecto del Poder Ejecutivo y por el que se introducen reformas al Código Penal en cuanto a los menores, al Código Civil en distintos aspectos y se establece una estructuración legal del principio constitucional sobre bien de familia.

Ambas comisiones han estudiado el proyecto y le introdujeron algunas modificaciones; pero ellas no han incidido fundamentalmente ni en su estructura ni en su contenido.

Como bien lo sostiene el Poder Ejecutivo en su mensaje, el proyecto abarca, directa o indirectamente, distintos aspectos del régimen de los menores y de la familia. Concretamente,

legisla sobre régimen de los menores incurso en hechos que la ley califica como delitos; sobre edad mínima para contraer matrimonio; sobre prueba en ciertos casos de defunción; sobre ausencia y declaración de ausencia con presunción de fallecimiento y sus efectos; se estructura también ampliamente un completo sistema vinculado con el bien de familia y, finalmente, se trata de la indivisión hereditaria.

En una palabra: este despacho implica una protección a la familia y a los menores, y, por las razones que daré en el curso de mi exposición, desde ya pido a la Honorable Cámara el voto favorable para el mismo.

Como he anunciado hace algunos instantes, desde el artículo 19 al 13 el despacho trata del régimen de los menores incurso en hechos que la ley califica como delitos. Dichos artículos modifican directamente los artículos 36 a 39 del Código Penal vigente.

La idea fundamental que informa al despacho es el de substraer a los menores del campo del derecho penal. Entiendo, de acuerdo con la doctrina más moderna y con la orientación contemporánea en la materia, que los menores deben salir del campo del derecho penal y estar sometidos a un régimen específico que tenga como propósito fundamental una función tutelar, educativa, protectora y preventiva, en vez de tener un sentido punitivo.

El proyecto implica indiscutiblemente una mejora respecto del régimen actual. Para demostrar esta afirmación, voy a hacer una reseña casi esquemática del sistema que establece el Código Penal vigente respecto de los menores.

El artículo 36 del código actual establece que los menores de catorce años no son punibles, y no lo son porque no son imputables. Añade que si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores, hasta que cumpla dieciocho años. Y en la parte final, el artículo prescribe que si la conducta del menor en el establecimiento diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podría, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estadía hasta que tuviere veintiún años.

Es decir, que si un menor, en el momento actual, comete un hecho delictuoso y no ha cumplido catorce años, la ley penal no lo castiga, pero lo somete a las medidas a que hace referencia el artículo 36.

El artículo 37 del Código Penal establece que, cuando un menor tuviese más de catorce años y menos de dieciocho, y cometiese un hecho delictuoso, su situación depende de la gravedad del hecho cometido. Si éste tuviere pena que pudiera dar lugar a la condena condicional, el

tribunal quedará autorizado para disponer medidas tutelares, ya sea dejándolo en poder de los padres o internándolo en algún establecimiento adecuado, si se creyere pertinente. En cambio, si el delito tuviese pena mayor, fatal y necesariamente el tribunal debe sancionar al menor, si bien es cierto que está facultado para disminuir la pena en la forma determinada para la tentativa, es decir, de un tercio a la mitad.

El artículo 38 establece expresamente que el menor que no ha cumplido dieciocho años no puede ser declarado reincidente.

El artículo 39 prescribe que en todos los casos de delitos cometidos por menores el tribunal puede privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela, etcétera.

Este es el régimen vigente en materia de menores.

Veamos ahora cuál es el sistema que establece el despacho en consideración.

Del contenido y de la economía de los artículos 1º y 2º surge que el menor que no ha cumplido dieciséis años no es imputable. Esta es una de las modificaciones fundamentales del despacho. Mientras que la inimputabilidad en estos momentos llega a los catorce años, de acuerdo con el despacho se eleva a los dieciséis, teniendo en cuenta las tendencias más modernas relativas a esta materia.

Los menores que no han cumplido dieciséis años y cometan algún hecho que la ley califica como delito, no son sometidos a procesos; solamente quedan sujetos a medidas tutelares. Esto está perfectamente determinado en los artículos del despacho que, dado el carácter general de la información que estoy realizando, no creo deba analizarlos minuciosamente.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del despacho, la imputabilidad, pues, se fija en dieciséis años.

El artículo 3º dice lo siguiente: «Cuando el menor de dieciséis a dieciocho años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito y no se tratare de infracciones de acción privada o sancionadas con un año o menos de privación de la libertad, con multa o con inhabilitación, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso. No obstante, cualquiera fuera la naturaleza del hecho, se procederá conforme lo disponen los artículos 1º y 2º.»

De la lectura del artículo surge que si el menor comete un hecho que la ley califica como delito y ese hecho tiene una pena que no exceda de un año, o tiene pena de multa o inhabilitación, o se trata de hechos que den lugar a una acción privada, él no será, en estos casos, sometido a proceso sino a medidas tutelares. En cambio, si el hecho es de mayor gravedad, la situación varía, dado que entonces es de aplicación el artículo 4º del despacho, que dice: «Cuando el menor a que se refiere el artículo

precedente haya cumplido dieciocho años de edad y por lo menos un año de internación u otro tratamiento tutelar, las autoridades competentes informarán al juez sobre su conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales.» El mismo artículo sigue expresando: «Si de las conclusiones de ese informe, las modalidades del hecho, los antecedentes del menor y la impresión personal directa del juez apareciere fundadamente necesario aplicarle una sanción, éste así lo resolverá conforme a la ley penal pudiendo reducirla en la forma determinada para la tentativa.» Como último párrafo agrega: «También en esta circunstancia, el juez podrá proceder, en todos los casos, con arreglo a las demás facultades conferidas en los artículos 1º y 2º.»

De acuerdo, pues, con el artículo 4º, si el hecho cometido por el menor es de aquellos que determinan un proceso —de acuerdo al artículo 3º— el tribunal, una vez que el menor ha cumplido los dieciocho años de edad y luego de haber estado en internación un año o sometido a otro tratamiento similar, está facultado para aplicarle o no una sanción.

En conclusión, si un menor de dieciséis a dieciocho años comete un hecho calificado como delito, no obstante su gravedad el tribunal puede no aplicarle sanción alguna, teniendo en cuenta los factores y circunstancias a que se refieren los artículos 3º y 4º del proyecto.

Por el artículo 8º se establece que cuando el menor de 18 a 22 años de edad infrinja las disposiciones de la ley penal quedará sometido a la ley respectiva, es decir, que cuando cumple 18 años entra de lleno en el campo del derecho penal en cuanto a la responsabilidad, porque también el despacho establece una diferencia en cuanto a la ejecución en beneficio de los menores.

En dos palabras, el sistema es el siguiente: hasta los 16 años el menor es inimputable; de 16 a 18 es imputable, pero se lo puede o no sancionar, en los casos que corresponda proceso, cualquiera sea la gravedad del delito, de acuerdo con las circunstancias; y a partir de los 18 años es perfectamente responsable e imputable, aunque haya una diferencia en favor del menor en cuanto a la ejecución de la pena correspondiente.

Como vemos a través de este simple análisis, son indiscutibles las ventajas que propicia el despacho dentro del derecho positivo argentino.

El artículo 14 del despacho introduce una modificación fundamental en cuanto a la edad para contraer matrimonio. Saben perfectamente los señores diputados que la legislación vigente establece la edad mínima de 12 años en la mujer y de 14 años en el varón. De acuerdo con el despacho que consideramos, esa edad se eleva a 14 en la mujer y a 16 en el varón.

Dada la importancia que tiene este artículo voy a leerlo textualmente, para hacer posteriormente un breve análisis del mismo. Dice así: «Para contraer matrimonio se requiere que la mujer tenga 14 años cumplidos y el hombre 16. Podrá contraerse válidamente con edad menor cuando hubiera concebido la mujer de aquel con quien pretenda casarse. Podrá también obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contemplados en el artículo 132 del Código Penal, la que será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones establecidas por dicho artículo. El matrimonio celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si los cónyuges hubiesen cohabitado después de llegar a la edad legal, ni cualquiera fuese la edad si la esposa hubiese concebido.»

Lo importante en este aspecto es demostrar que la solución que propicia el despacho, en cuanto aumenta el mínimo de edad, está de acuerdo con la doctrina moderna y la legislación comparada actual. En primer término, debemos decir que la edad de 12 y 14 años que establece actualmente el Código Civil es la misma que establecían el Concilio de Trento y las Partidas; en cambio, en el derecho canónico actual —me refiero a la codificación del año 1917— la edad mínima ya no es de 12 y 14 años, sino de 14 a 16, es decir, exactamente igual a la que propicia el despacho.

Evidentemente, cuando se dictó el Código Civil, estableciéndose que la edad mínima para contraer matrimonio era de 12 años para la mujer y de 14 para el varón, se tuvo en cuenta fundamentalmente la posibilidad de la procreación. Nosotros entendemos que no solamente debe tenerse en cuenta ese factor, sino que es necesario también atender a otras circunstancias, porque el matrimonio implica —como muy bien lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo— una serie de responsabilidades de orden moral, material y espiritual de un cónyuge hacia el otro, hacia los hijos y hacia la sociedad, lo que exige un mayor discernimiento que el que puede existir en una mujer de 12 años.

Por ese motivo, consideramos que la reforma es conveniente.

He dicho hace un instante que la solución que da el despacho está de acuerdo con la tendencia moderna en el derecho contemporáneo.

El código del Brasil, por ejemplo, establece 16 años para la mujer y 18 para el hombre; el código suizo, 18 y 20, respectivamente; el código francés, 15 y 18; el código de la Rusia Soviética, sin distinción de sexo, establece 18 años.

Existe, además, una cuestión de orden técnico que fundamenta la reforma que consideramos. El doctor Héctor Lafaille, en su obra *Derecho de familia*, sostiene con acierto que la edad de 12 años que establece el código vigente está en contradicción con lo que determina el artículo

921 del Código Civil, según el cual se consideran actos practicados sin discernimiento los actos jurídicos lícitos realizados por menores de 14 años. Pero resulta que, por otra parte, la ley de matrimonio civil autoriza a casarse a los 12 años, de donde el matrimonio resultaría, en ese caso, un acto realizado sin discernimiento. Con la reforma proyectada salvamos la contradicción actual.

El artículo a que me estoy refiriendo, dice en uno de sus párrafos: «Podrá también obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contemplados en el artículo 132 del Código Penal.» Y los supuestos del artículo 132 del Código Penal se refieren a los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera. Esa dispensa «será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones establecidas por dicho artículo», es decir, que la mujer ofendida debe prestar su consentimiento para casarse, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Por lo expuesto, consideramos que la reforma por la cual se aumenta el límite de edad, es conveniente y merecerá la aprobación de la Honorable Cámara.

De modo general me referiré a las disposiciones que trae el despacho vinculadas a la ausencia y a la ausencia con presunción de fallecimiento.

Por el despacho se modifican los artículos 110 a 125 del Código Civil.

Es sabido que según el artículo 110, cuando una persona está ausente del lugar de su domicilio o residencia, en el país, sin que de ella se tenga noticia durante el lapso de seis años, esa ausencia implica presunción de su fallecimiento. El régimen actual establece que una vez corrido el término de seis años a que aludimos —o el de tres años en los casos extraordinarios que menciona el artículo 112— se puede pedir la declaración judicial del día presuntivo del fallecimiento. Establece también una diferencia entre la posesión provisoria y la posesión definitiva.

Producida la declaración de ausencia, los herederos y legatarios reciben los bienes en posesión provisoria, y a los 15 años de la desaparición del ausente o a los 80 desde su nacimiento, esa posesión se transforma en definitiva. Es éste, en forma esquemática, el sistema del Código Civil en estos momentos.

El proyecto que consideramos establece reformas fundamentales en esta cuestión. Legisla sobre la mera ausencia en el artículo 15, que dice: «Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no

desempeñare convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado.»

El caso a que se refiere el artículo 15 es aquel en que una persona ha desaparecido de su domicilio y ha abandonado sus bienes. No hay, respecto de ella, la duda de si ha muerto o sigue viviendo.

El artículo se justifica perfectamente. Lógicamente, hay interés en proteger los bienes del ausente. En primer término, en interés del propio ausente; en segundo término, en interés de los acreedores; en tercer término, en interés de los presuntos herederos, y, en último término, en interés de la misma sociedad, interesada en que no se destruyan bienes.

Las reformas fundamentales que trae el despacho respecto a esta materia de la ausencia con presunción de fallecimiento son las siguientes. El código actual establece que el término para que proceda la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento es de seis años en los casos normales, a que se refiere el artículo 110, y de tres años en los casos extraordinarios, inusitados, fuera de lo común, como terremoto, naufragio, etcétera. Los términos de seis y tres años que figuran en el código son reducidos a tres y dos años, respectivamente, en el despacho. Y en el caso de tratarse de la desaparición de una aeronave o de un buque ese término se reduce en el despacho a seis meses.

Entendemos que esta reducción en los términos es conveniente. Surge ello, naturalmente, de las circunstancias de que las comunicaciones actuales hacen, por su rapidez, que los términos de seis y tres años establecidos en el Código Civil sean excesivos.

Se suprime, señor presidente, en el despacho, la distinción entre posesión provisoria y definitiva. De acuerdo con el mismo, una vez declarada la ausencia con presunción de fallecimiento, los herederos y legatarios reciben los bienes y los inscriben a nombre propio en el registro respectivo con una prenotación, no pudiendo, mientras tanto, realizar actos de disposición, ni gravarlos, sin autorización judicial. Pero una vez transcurridos cinco años desde el día presunto del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona desaparecida, quedará sin efecto la prenotación prescrita, y los que han recibido los bienes pueden disponer libremente de los mismos. Entendemos que la desaparición del distingo entre posesión provisoria y definitiva implica una simplificación del sistema en beneficio de la claridad de las relaciones jurídicas y de la seguridad de las mismas.

Otra reforma, también fundamental, que trae el despacho es la que se consigna en el artículo 31.

Saben perfectamente bien los señores diputados que en nuestro régimen civil vigente la

única causal de disolución del matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. La legislación actual establece que aun en el caso de ausencia con presunción de fallecimiento el vínculo matrimonial no se disuelve. Nosotros en el despacho propiciamos que en el caso de ausencia con presunción de fallecimiento el vínculo matrimonial se disuelva, autorizando, en consecuencia, al cónyuge a contraer nuevas nupcias sin que la reaparición del cónyuge ausente pueda traer como consecuencia la anulación del segundo matrimonio.

El artículo 31 del proyecto dice lo siguiente: «La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento disuelve el vínculo matrimonial y habilita al cónyuge del ausente para contraer nuevas nupcias. La reaparición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio.» Repito que ésta es una reforma fundamental.

A continuación voy a analizar las disposiciones del proyecto vinculadas con el bien de familia. De acuerdo con nuestra Constitución, artículo 37, apartado 2º, la familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. Dice así la referida cláusula constitucional: «La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.» Y el punto 3º de este mismo apartado, cuyo enunciado acabo de leer, dice: «El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine.» En tanto que el punto 2º dice: «El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca.»

Estas dos disposiciones constitucionales vinculadas con la unidad económica familiar y con el bien de familia implican la protección económica de la familia. No sólo existen en nuestro derecho esas disposiciones constitucionales, sino que dentro del segundo Plan Quinquenal hay una serie de disposiciones concretadas en objetivos que tienden a la defensa económica del grupo familiar. Por ejemplo, podemos traer a la consideración de la Honorable Cámara lo dispuesto en el capítulo XXII, objetivo especial número 11, que expresa: «Los impuestos que puedan gravitar en desmedro de la integración del núcleo familiar, serán suprimidos o reducidos.» Y lo dispuesto en el objetivo especial 12 del mismo capítulo XXII: «El bien de familia no será gravado con impuestos cuando se transmita por causa de muerte dentro del núcleo familiar.»

Vale decir, señor presidente, que cuando estamos legislando mediante este proyecto sobre bien de familia, estamos cumpliendo con un mandato constitucional y además realizando una tarea legislativa que está dentro del espíritu del segundo Plan Quinquenal.

Con respecto al bien de familia es menester hacer brevemente algunas consideraciones de orden general. En Estados Unidos a esta institución se la denomina *homestead*; en Italia, patrimonio familiar —quiero aclarar que esta denominación no significa que el derecho italiano reconozca a la familia personalidad jurídica sino que ella está orientada a poner más de manifiesto el carácter social de la institución—; en Francia, bien de familia; en Suiza, asilo de familia, y entre nosotros, bien de familia.

El *homestead* tiene dos aspectos en Estados Unidos: el vinculado con el derecho público, llamado *homestead* federal, que es un sistema de colonización, y el *homestead* vinculado con el derecho privado, y que implica una excepción.

El *homestead* de derecho público fué creado por una ley de 1862, en tiempos de la presidencia de Abraham Lincoln, y tenía, como propósito fundamental, establecer un sistema de colonización de la tierra pública. En cambio, el verdadero, el auténtico *homestead* tiene por finalidad asegurar la estabilidad y el albergue del grupo familiar y defender la pequeña propiedad familiar.

Haré también una ligera referencia a la legislación francesa sobre esta materia. La ley sobre esta institución en Francia, fué dictada en 1909. Entre los distintos objetivos tenidos en cuenta, podemos mencionar los siguientes: dar al jefe de familia la oportunidad de tener un hogar donde abrigar a su familia en caso de adversidad; fomentar el número de pequeños propietarios; evitar el éxodo del campo a la ciudad.

Durante el debate producido en el parlamento francés se hicieron acerbos críticas de orden jurídico y de orden práctico. Se dijo que desde el punto de vista jurídico, esa institución significaba vulnerar principios fundamentales del derecho —como, por ejemplo, aquel que establece que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores— y menoscabar el derecho de propiedad, porque el propietario se encuentra en una situación similar al de un interdicto. Desde el punto de vista práctico, se objetó que esa institución tiene como inconveniente el de limitar el crédito del titular del bien de familia.

Esas objeciones carecen de fundamento y no pueden prosperar, como ya lo comprobaremos al analizar con alguna detención las distintas cláusulas del despacho. Ninguna de esas objeciones merece ser considerada, porque los beneficios que esta institución brinda a la familia, son fundamentales.

El mayor inconveniente de la ley francesa de 1909, surge de lo dispuesto en su artículo 5º. Dicho artículo establece que la constitución de un bien de familia no se puede llevar a cabo sobre un inmueble gravado con hipoteca, sea

convencional o judicial, cuando los acreedores hayan hecho inscribir su derecho con anterioridad al acto constitutivo, o con posterioridad dentro del plazo señalado por el artículo 6º. Este último artículo fija un plazo de dos meses.

El mayor obstáculo presentado por la ley francesa es el impedimento para que un bien gravado con hipoteca pueda constituirse en bien de familia. En el despacho en consideración no existe disposición similar. Si se estableciera, habría muchas dificultades para constituir un bien de familia. Mucha gente no podría constituir su propiedad en bien de familia porque la gran mayoría las adquiere con hipoteca y continúan con el gravamen.

Esa prohibición es perjudicial y la hemos traído a colación para destacar que nuestro despacho no impide que se constituya en bien de familia un inmueble gravado.

Me referiré ahora a los antecedentes argentinos sobre el bien de familia.

En primer término tenemos la ley 10.284, llamada ley Costa o ley del hogar. Esta ley ha fracasado totalmente en la práctica. En primer término, no fué reglamentada y ello impidió su aplicación.

Voy a analizar algunos textos para poner de manifiesto la economía de la ley 10.284, llamada ley del hogar. En el artículo 1º establece: «Estas fundaciones se hacen como un amparo y una donación de gobierno a la familia argentina.»

El artículo 2º establece: «Los lotes del hogar son propiedad de la familia y no podrán ser embargados, vendidos ni concedidos, salvo a otra familia, y con permiso del Poder Ejecutivo.»

La ley 10.284, en realidad recogió las dos formas del *homestead* norteamericano: la forma pública o *homestead* federal, que es más bien un sistema de colonización, y la forma privada. En el artículo 3º de la ley 10.284 se acepta la forma del derecho público del *homestead* norteamericano y dice lo siguiente: «Todo ciudadano padre de familia o todo extranjero en la misma condición que se obligase a hacerse ciudadano o pudiese serlo legalmente dentro de un plazo que la reglamentación de esta ley determinará, y toda mujer soltera o viuda mayor de 22 años, tendrán derecho a pedir en tierras vacantes del Estado, previa información sumaria de buenos antecedentes, un lote de 20 a 200 hectáreas, siempre que no fuesen propietarios de otro lote, en el momento de su solicitud y establecimiento. En caso de muerte del padre de familia, ésta continuará con todos sus derechos.»

En cambio, en el artículo 13 de la ley 10.284 se legisla sobre el *homestead* privado y se dice lo siguiente: «Todo actual propietario de un terreno rural o urbano, ya sea en las provincias o territorios, que esté o llegue a estar libre de gravamen y no adeudare impuestos ni contri-

buciones, tendrá derecho a declarar ante cualquier autoridad judicial su elección de un lote que se reputará del hogar y en las condiciones del artículo 2º. Esta declaración estará libre de derechos de sellos y de oficina. Ella, si el propietario tuviese otros inmuebles, sólo amparará a los que elija entre todos ellos, a los efectos de la declaración.

«Este derecho se ejercitará hasta el límite máximo de \$ 10.000 moneda nacional como valor del lote de hogar a declararse y surtirá efectos respecto de terceros, una vez hecha la anotación en el registro correspondiente.»

Uno de los mayores inconvenientes de la ley fué recoger esas dos formas del *homestead* norteamericano.

El artículo 6º de la ley 10.284 constituía una derogación del artículo 1184 del Código Civil porque según el artículo 6º no era necesaria la escritura pública para estas donaciones del gobierno a la familia que ocupe inmuebles su lote de hogar; en cambio, el artículo del Código Civil que acabo de citar establece que la transferencia de dominio de un inmueble debe hacerse por escritura pública bajo pena de nulidad, con excepción de las que se realicen en subasta pública.

Tenemos en el país, señor presidente, además de la ley que acabo de comentar, ciertos proyectos que se refieren al bien de familia: el del ex diputado González Zimmermann, en 1927; de Manuel Carlés, de 1912; de José Antonio Amuchástegui, de 1922, y del doctor Cafferatta, de 1914, proyecto éste que tenía como antecedente la ley francesa de 1909.

El proyecto de reforma al Código Civil del año 1936 contiene algunas disposiciones a normas legales respecto al bien de familia y en él se establece un límite de 50.000 pesos en cuanto al valor para constituir un bien de familia.

Existen en el país una serie de leyes que establecen principios vinculados en algún sentido con el bien de familia. Podemos traer a consideración de la Honorable Cámara la ley 14.135 que se refiere a las viviendas para el personal militar y civil del Ministerio de Ejército y cuyo artículo 12 dice: «Los inmuebles a que se refiere la presente ley no podrán ser embargados ni ejecutados por los acreedores, cualquiera sea la naturaleza de sus créditos con la sola excepción del Estado, en los casos y en la forma que determine la reglamentación de esta ley.»

Podemos traer a colación lo dispuesto por la ley 13.995, cuyo artículo 4º dice: «La tierra rural será subdividida teniéndose en cuenta que cada predio debe constituir una unidad económica de explotación, la cual es inembargable e inejecutable, y no podrá ser alterada sin intervención del Estado.»

También la ley 14.277, que en el artículo 5º establece: «Durante el período de diez años, a contar de la fecha de escrituración, regirán las

siguientes limitaciones y facultades con respecto a los adquirentes de las viviendas y sus herederos: a) La propiedad, bajo ningún concepto, puede ser vendida, arrendada total o parcialmente o utilizada para industria o local de negocio; b) La vivienda es inembargable, y no puede ser ejecutada ni aun en caso de concurso del titular; c) No pueden constituirse sobre el inmueble otros gravámenes o derechos reales que la hipoteca, originada por la adquisición.»

Si no todos, éstos son algunos antecedentes inmediatos que podemos traer a colación en este debate sobre bien de familia.

Sobre la materia se ha legislado en países extranjeros no sólo en los respectivos códigos civiles, sino también en el derecho constitucional.

Así, la Constitución alemana de 1919 establecía en el artículo 155: «La repartición y utilización del suelo son controlados por el Estado, de modo que se impida los abusos, y se tienda a asegurar a todo alemán una habitación sana y a todas las familias alemanas, particularmente a las numerosas, un bien de familia que comporte habitación y explotación en correspondencia con sus necesidades.»

La Constitución chilena de 1915 dispone en el artículo 14: «El Estado propenderá a la conveniente división de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.»

La Constitución de Guatemala de 1945 dice en el artículo 73: «El patrimonio familiar es objeto de una legislación protectora especial.»

La Constitución de Bolivia de 1945 dice en el artículo 133: «Las leyes determinarán el patrimonio familiar inembargable e inenajenable, como también el subsidio de familia con relación al número de hijos.»

Y, fuera del derecho constitucional, podemos citar las disposiciones contenidas en el artículo 350 del código civil suizo; el artículo 70 del código civil brasileño; el artículo 167 del código civil italiano; el artículo 723 del código mejicano; el artículo 632 del código venezolano, etcétera.

Expuestos estos antecedentes, voy a referirme ahora, en apretada síntesis, a las características fundamentales del despacho que está a consideración de la Honorable Cámara, en lo relativo a bien de familia.

En primer término, cabe formularse la pregunta acerca de qué bien puede constituirse en bien de familia. La respuesta está dada por el artículo 34 del despacho, que dice: «Toda persona puede constituir en "bien de familia" un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente.»

Recuerdo que en el seno de la comisión el señor diputado Perette hizo una objeción, diciendo que le parecía excesivo entregar estas facultades al Poder Ejecutivo. Nosotros enten-

demos que la forma en que el artículo 34 determina el bien de familia es la única posible para que esta institución tenga un éxito completo. Es evidente que en la ley no pueden establecerse sino principios de orden general, sin que pueda entrar a considerar los casos en particular. La ley establece la norma genérica: el inmueble, ya sea rural o urbano, no debe exceder las necesidades de sustento y vivienda. Ese es el principio rector en la materia. No es posible que la ley entre al detalle, porque eso significaría ponerle trabas y, en última instancia, su más rotundo fracaso.

Es evidente que no es lo mismo un predio en la provincia de Mendoza, por ejemplo, que un predio en la provincia de Buenos Aires. Mientras que en la provincia de Mendoza una familia puede vivir perfectamente con cuatro o cinco hectáreas de viña cultivadas directamente, en cambio una familia con cuatro hectáreas en la provincia de Buenos Aires se moriría de hambre. No es lo mismo el valor de un predio urbano en la ciudad de Buenos Aires que en una ciudad del interior o en un pueblo cualquiera del país. El problema no es el mismo frente a una familia numerosa o a una familia de pocos miembros. En fin, son tantas las circunstancias que pueden influir, que no es posible poner en la norma legal un límite al valor del inmueble que puede ser afectado o inscrito como bien de familia. Por ello, pensamos que el artículo 34, al establecer el principio general de que el bien no debe exceder las necesidades de habitación y de sustento, legisla perfectamente y en la única forma que hará posible el éxito de esta institución en el país.

Otro elemento fundamental en esta institución es la familia, ya que, como de su propio nombre se deduce, es necesario que esté vinculada directamente con ella. ¿Qué concepto de la familia tiene el despacho? El artículo 36 la define perfectamente en estos términos: «A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario y cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos, o en defecto de ellos sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad, y cuando vivieren con el constituyente.»

Quiero dejar perfectamente establecido que cuando el artículo 36 habla de descendientes lo hace con un sentido amplio, comprendiéndolos a todos.

¿Cuáles son las características del bien de familia? En primer término, mientras esté constituido e inscrito como tal, es inenajenable, salvo que se lo desafecte, y no puede ser objeto de legados ni de mejoras testamentarias.

La segunda característica del bien de familia es la de ser inembargable. Este es el principio general que, desde luego, tiene excepciones. Es así que el bien de familia es embargable respecto a las deudas o créditos anteriores a la constitución;

y aun respecto de las deudas que se puedan haber contraído con posterioridad a la constitución e inscripción del bien de familia, existen casos en que puede ser embargado, como cuando se trata de créditos que tienen origen en un gravamen constituido conforme a la ley (artículo 37), o cuando se trata de impuestos o tasas que graven directamente el bien o cuando se trata de mejoras realizadas en el bien. En una palabra, el bien resulta inembargable respecto a deudas contraídas con posterioridad a su inscripción como bien de familia. Pero dentro de este principio existen las excepciones que establece el despacho.

El bien de familia, mientras sea tal, no podrá ser gravado sin la conformidad del cónyuge. Si éste fuere incapaz, se opusiere o faltare, se puede autorizar a que se grave el bien de familia en caso que ello signifique beneficio evidente para los integrantes de la entidad familiar.

Otra de las características del bien de familia es la de que está exento del pago de impuesto sucesorio en todo el territorio de la Nación. Esta cláusula, la del artículo 40 del despacho, en el seno de la comisión fué criticada por el señor diputado Perette. Afirmó que ella significaba vulnerar en algún sentido las facultades impositivas de las provincias, es decir que se afectaba el sistema federal de gobierno.

Entendemos que no existe vulneración de ningún principio constitucional, dado que si la Constitución establece que el Estado garantiza el bien de familia, el Congreso no puede carecer de facultades para alcanzar tal finalidad. Si no pudiéramos legislar esta institución asignándole sus características fundamentales, ella en la práctica fallaría.

La Constitución quiere que el bien de familia esté garantizado en todo el territorio de la República. Si la exención del impuesto sucesorio es una condición esencial de la institución, resulta lógico que si el Congreso debe establecer el bien de familia en todo el país, pueda también determinar la exención en todo el país.

La Constitución de la República Española establecía que el bien de familia estaría exento del pago de impuesto. ¿Por qué fracasó la ley 10.824? Falló fundamentalmente porque no se estableció la exención de impuestos sucesorios. Si no se establece ventaja para el propietario, él no va a tener interés en transformar un bien de familia que le signifique una serie de restricciones, ya que no podrá enajenar o gravar el bien.

El artículo 41 del despacho establece que: «El propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta propia el inmueble o la industria en él existente, salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas.»

En consecuencia, otro de los elementos del bien de familia es la obligación de vivir en el bien.

Con respecto a la autoridad de aplicación, en el orden nacional será la autoridad administrativa que determine el Poder Ejecutivo, y en el orden provincial se deja librado a cada provincia determinar quién ha de aplicar la ley.

El bien de familia puede ser constituido por testamento, y sólo podrá constituirse un único bien de familia, de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 45.

El artículo 49 del despacho determina los casos en que corresponde la desafectación y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario.

No voy a analizar las distintas hipótesis de desafectación porque estimo que el artículo 49 es perfectamente claro y no habrá dudas en su interpretación, y menos en su aplicación.

Para terminar con este análisis de las disposiciones, es necesario poner de manifiesto que, de acuerdo con el artículo 50, se crea un recurso ante el juez de lo civil en turno. El citado artículo dice lo siguiente: «Contra las resoluciones de la autoridad administrativa que, en el orden nacional, denieguen la inscripción del "bien de familia" o decidan controversias referentes a su desafectación, gravamen u otras gestiones previstas en esta ley, podrá recurrirse en relación ante el juez de lo civil en turno.»

Entendemos que el bien de familia, tal como está organizado en el despacho que consideramos, reportará grandes beneficios a la familia argentina. Generalmente, los bienes de las familias están a nombre de una sola persona, del jefe de la familia; pero es indiscutible que en la formación de ese patrimonio participan normalmente todos los integrantes de la familia. De ahí, pues, que no sea justo ni lógico que muchas veces por imprevisión, por necesidad, por inconducta, por malos negocios, o por abuso del crédito hecho por el jefe de la familia, ese patrimonio, que es el producto del esfuerzo común, desaparezca, dejando en el desamparo a la familia.

Para concluir con este punto deseo expresar que esta institución, tal como figura en el despacho, interpreta cabalmente el principio contemplado en la Constitución de 1949 y constituye una garantía para la familia argentina.

Me voy a referir ahora a las disposiciones pertinentes en relación con el problema de la indivisión hereditaria. El despacho establece que toda persona podrá imponer a sus herederos, aun de los forzosos, la indivisión hereditaria por un término que no exceda de diez años; y que, tratándose de un bien determinado, o de una explotación agrícola, ganadera, industrial, comercial o minera, ese término puede extenderse hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad, aun cuando el término exceda los diez años. También establece el despacho que la indivi-

sión hereditaria puede constituirse por voluntad de los herederos, y que en el caso de tratarse de un establecimiento en que el cónyuge supérstite lo haya formado o contribuido a formar y ese establecimiento constituya una unidad económica, el cónyuge supérstite puede oponerse a la división hereditaria por el término de diez años.

De manera que se plantean tres hipótesis: la indivisión puede establecerse por voluntad del causante, por voluntad de los herederos o por voluntad del cónyuge.

Pero esta indivisión puede quedar sin efecto antes del término establecido, porque el artículo 51, que se refiere al caso de la indivisión hereditaria establecida por el testador, en la última parte expresa que «el juez podrá autorizar la división, total o parcial, a pedido de la parte interesada y sin esperar el transcurso del plazo establecido, cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero».

El artículo 52, que trata los casos en que los herederos pueden convenir una indivisión hereditaria, expresa que cualquiera de los herederos podrá pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas justificadas.

El artículo 53 se refiere al caso en que el cónyuge supérstite puede oponerse a la división de la herencia por un término máximo de diez años, pero agrega que «a instancia de cualquiera de los herederos el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la decisión».

Como fundamento de esta disposición diré que es evidente que la división de bienes por causa de muerte ocasiona en muchos casos a los herederos perjuicios irreparables. Si se trata de una unidad económica, de un establecimiento, la obligación de dividir significa destruir esa unidad en perjuicio de la seguridad económica de la familia y de la colectividad. Por eso es conveniente establecer la indivisión en la forma contemplada en este proyecto.

En el país, como antecedente cercano de este proyecto, encontramos el anteproyecto de Biliboni que fija la indivisión hereditaria por el lapso de diez años. Esta institución la encontramos también en el derecho comparado. Por ejemplo, en el Código Civil suizo se legisla lo que se llama la comunidad prolongada, desde el artículo 229 al 236. El cónyuge puede prolongar la comunidad con los hijos habidos en el matrimonio. Esto evidentemente tiende a evitar una partición ruinosa y, además, proteger a la familia.

En el mismo código figura el caso del artículo 620 referente a explotaciones agrícolas. Cuando en los bienes hereditarios existe una explotación agrícola y esa explotación implica una unidad económica, el código autoriza a que

se le entregue a alguno de los herederos y a que no se divida. Si algunos herederos no aceptan la indivisión, tienen entonces derecho a que se les otorgue un crédito sobre el fundo con una garantía que se denomina letra de renta sucesoria.

Señor presidente: a través de este somero análisis he comentado las reformas que se introducen en la legislación vigente, reformas que son necesarias porque, evidentemente, las disposiciones que se modifican no están a tono con el momento actual; además, se legisla sobre un principio constitucional importante como es el referente al bien de familia.

El despacho implica un progreso en el derecho positivo y por ello, en nombre de la mayoría de las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal, pido el voto favorable de la Honorable Cámara. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — En mi carácter de miembro de las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal, debo fijar la posición de nuestro sector con respecto a este proyecto de ley que abarca una serie de problemas importantes para la vida nacional, mezclados en forma injustificada, sin asidero jurídico y sin un principio orgánico de legislación.

Es lamentable que este asunto se trate así, tan vertiginosamente, cuando en verdad el texto del proyecto de ley fué conocido recién el miércoles pasado, sin que exista la dilucidación, la controversia y el aporte de los círculos intelectuales y científicos que es siempre fundamental para la redacción de leyes como ésta que viene a reformar la legislación de fondo en lo civil y en lo penal.

La verdad es, señor presidente, que esta ley es una ley «ómnibus», una ley que contiene materias inconexas y heterogéneas, que aparecen unidas sin ningún fundamento y sin ninguna razón.

Quiero fijar la posición favorable de nuestro sector en todo lo que haga a los principios que enuncia el mensaje con respecto a la protección de menores, a la mejora de nuestra legislación civil y penal, como así también nuestro más fervoroso auspicio a la defensa e integridad de la familia y a la institución del bien de familia.

Estamos, señor presidente, en esta materia, en una actitud que no puede prestarse a ninguna actitud equívoca. Participamos de la necesidad de principios que consagren una legislación integral en defensa del menor. Estamos en favor de una legislación que reforme principios esenciales sobre la ausencia con presunción de fallecimiento. Estamos con todo lo que haga a la defensa integral del núcleo familiar, base de la sociedad. Estamos, igualmente, en favor de la

institución del bien de familia, apuntalado todo ello por nuestra trayectoria en la función de gobierno y de nuestra lucha permanente en la oposición al servicio del país.

Defendemos esos principios que enuncian los conceptos generales de cada una de las reformas de este estatuto con el mismo celo con que defendemos la libertad de ideas, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la vida libre de miserias y de temores, principios éstos consagrados por la Carta del Atlántico; con la misma pasión condenamos todas las transgresiones, todos los abusos del poder, todas las arbitrariedades del despotismo, que jamás podrán contar con nuestro silencio o complicidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Entendemos que es plausible la defensa del valor humano, la defensa de la familia, la defensa de la juventud y el niño encauzándolos hacia senderos de bien y de acción fecunda para la vida del país; pero entendemos que esa defensa del bienestar, esa defensa del mejoramiento social y económico, por la que se cuida a la criatura humana desde la cuna hasta la tumba, no puede significar jamás la renuncia a la defensa de los valores morales y espirituales, que son condición fundamental de los pueblos libres, vigorosos, progresistas y civilizados. La lucha por el bienestar económico jamás puede implicar la renuncia a la lucha contra la opresión.

Recordamos al respecto aquellas advertencias de José Ingenieros dirigidas a la juventud de la patria, que hoy toman la tonalidad de un verdadero mensaje en favor de las fuerzas morales; repetimos las expresiones de Jacques Maritain cuando fundamenta la preeminencia del espíritu y las de Frei de Montalvo cuando una política y espíritu para asegurar esos principios esenciales que enriquecen la vida digna del hombre.

Entendemos, señor presidente, que este proyecto contiene en general propósitos loables, pero tiene vicios fundamentales; tiene transgresiones de técnica legislativa, de coordinación, de ordenación y de anulación de principios esenciales de la legislación penal, civil y constitucional de la República.

Comprende el proyecto que consideramos, que es en realidad una ley sin solución de continuidad, cinco aspectos: el régimen penal de menores; la modificación de la edad mínima para contraer matrimonio, que se eleva a 14 años para las mujeres y a 16 para los hombres; la ausencia con presunción de fallecimiento; la institución del bien de familia, y normas sobre la indivisión forzosa de los bienes hereditarios.

He de analizar, dentro del tiempo precario de que dispongo, los aspectos generales de estas cuestiones, sin perjuicio de que los demás representantes de la Unión Cívica Radical analicen otros aspectos concretos del proyecto.

Este proyecto contiene un grave e insanable error de técnica y de estructuración legislativa. Pocas veces el Congreso habrá sancionado una ley con tantos defectos, con tantos vicios en materia de estructuración parlamentaria. El proyecto a nuestra consideración es una mezcla indiscriminada de reformas que en nada prestigiará al acervo legislativo argentino. Se hubieran podido elaborar, con todo detenimiento, estatutos progresistas para concretar esos principios plausibles a que se refiere el mensaje del Poder Ejecutivo, en vez de hacer este estatuto que abarca desde la reforma penal a la reforma del Código Civil, del bien de familia, sin solución de continuidad, sin discriminar siquiera los capítulos con la materia y sin fijar los artículos que reforma.

Ya me he referido a la precipitación con que se estudia esta ley. Quiero señalar que esto introduce una pésima técnica legislativa, que no se utiliza en ninguna clase de legislación. Se reúnen disposiciones de carácter tutelar de los menores y sobre delincuencia infantil, preceptos modificatorios del Código Civil en lo referente a matrimonio, todo en una mezcla de disposiciones y de materias dispares carentes de justificativo y fundamentación. Se introduce una peligrosa anarquía en nuestro sistema positivo. No hay entre estos proyectos la homogeneidad necesaria; versan sobre hechos totalmente heterogéneos, que no guardan relación alguna entre sí. La buena técnica se caracteriza precisamente por la afinidad entre las materias tratadas. En cambio, el proyecto del Poder Ejecutivo abarca materias que no tienen ninguna homogeneidad y conexión. En efecto, como lo he puntualizado, va de los temas más diversos a los capítulos y fórmulas jurídicas más distintas. ¿Qué nexo de causalidad, qué lazo de unión existe entre el régimen penal considerado para los menores y el régimen establecido para la indivisión de los bienes hereditarios? ¿Qué relación guarda la ausencia con presunción de fallecimiento legislada en los artículos 15 a 21 con el régimen instituido para los menores? La verdad es que se agrupan materias enteramente disímiles que no tienen razón de ser.

Existen también defectos que quiero puntualizar para demostrar la falta de conveniencia de sistematizar en una ley autónoma el material contenido en el proyecto. Puede citarse, por ejemplo, el artículo 33, que dice: «Agrégase al artículo 108 del Código Civil, como segundo apartado, el siguiente texto: En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro...»

Como quiera que sea, solamente este artículo, según se expresa, es el único que se agrega al Código Civil. Quiere decir que, por implicancia, las demás disposiciones que reforman el Código Civil no van a ese estatuto de la legis-

lación de fondo y que el resto del articulado conservaría su autonomía jurídica.

En consecuencia, este artículo revela de por sí esos vicios y esos defectos esenciales. No existen motivos para negar la incorporación al régimen civil de todo lo referente a la presunción de ausencia y de fallecimiento, que son del resorte del derecho civil.

En materia penal hemos de ver cómo falta una estructura integral. Recuerdo que Carne-lutti, en su libro *El delito*, hace acotaciones sobre la crisis del derecho penal. Señala que «la crisis del derecho penal es la crisis de la ley, que nos muestra su más grave aspecto, y mientras consistan las reformas, sobre todo en agregar nuevas normas a las normas antiguas, la crisis no hará más que agravarse».

La verdad es que no se sigue ningún método, ningún principio orgánico que apoye y fundamente esta reforma. Entiendo que esta heterogeneidad del contenido indica la fundamental dificultad que nosotros señalamos como apreciación general, sin perjuicio de las impugnaciones al contenido del articulado.

Recuerdo las críticas de Jiménez de Asúa al anteproyecto redactado por el Instituto de Estudios Legislativos, como estatuto complementario del Código Penal. En esa oportunidad, Jiménez de Asúa puntualizó con todo acierto conceptos que apoyan las razones que estoy exponiendo, al implicar «todas esas materias en una sola ley». Los vicios son aquí mucho más graves. Por otra parte, la forma de legislar, la manera precipitada, la incorporación de normas dispares —como hemos visto los otros días en la reforma a la legislación aduanera con la inclusión de disposiciones referentes al contrabando— señalan una etapa de verdadero contrasentido y de fundamental error en la técnica de legislar por este Congreso.

Quiero hacer notar fundamentalmente que por obra de los vicios que contiene, se presta a lo que se ha dado en llamar la «técnica de la incertidumbre» y de la inseguridad que determina la anulación de las bases de estabilidad de una legislación y es propicia a todos los abusos, favoritismos y persecuciones, que es precisamente la característica de los sistemas absolutistas. Podemos señalar así los diversos defectos de este proyecto: no dice que incorpora las reformas al Código Civil, y sin embargo deroga y modifica artículos expresos de ese estatuto, a la vez que deroga los artículos 36 a 39 del Código Penal, pero tampoco incorpora las nuevas cláusulas al Código Penal. Es decir que se siguen criterios distintos y contrapuestos dentro del mismo proyecto.

Así vemos legislaciones, textos, estatutos que ni siquiera establecen los preceptos que reforman.

No sería de extrañar que esta ley se convierta —ojalá así no sea— en una «caja de

sorpresas», en este mismo debate, o que se agreguen reformas esenciales que no han sido siquiera estudiadas por la comisión.

Quiero referirme al primer aspecto —analizado detenidamente por el señor diputado González—, acerca de la legislación de menores.

El proyecto ha sido objeto de intenso estudio por la comisión —lo reconozco—, dentro del angustioso término y la forma precipitada de legislar. Tiene como idea fundamental la de substraer a los menores del campo del derecho penal. Demostraré que el proyecto carece de organicidad en materia de legislación de menores y que está en quebrantamiento de las propias proyecciones del Poder Ejecutivo y del invocado segundo Plan Quinquenal, y que hasta su principio fundamental está desvirtuado por el texto que se propone, pues no se cristaliza ese propósito de substraer integralmente al menor de la ley penal.

En materia de delincuencia infantil se han señalado tres etapas: la etapa punitiva o represiva, la etapa reformatoria y la etapa preventiva o de acción preventiva, que se abre cauce definitivamente en la órbita de todas las legislaciones progresistas y que tiende a substraer a los menores del campo del derecho penal.

La tendencia moderna es, pues, separar totalmente a los menores del derecho penal y ubicarlos fuera de éste, con su legislación específica. Se ha dicho en un comentario al último código español: «Someter al menor al derecho punitivo, ha sido uno de los mayores errores del derecho penal.» La delincuencia infantil ha crecido y crecerá —precisamente— «mientras no existan las instituciones de derecho tutelar de menores con toda la generalización necesaria».

En este caso, el proyecto no tiene las normas complementarias fundamentales referentes al funcionamiento de las instituciones tutelares de menores. Faltan los tribunales de menores y los establecimientos adecuados que realicen la labor de reeducación de los menores, los cuales, en definitiva, aun con la nueva ley, serán sometidos al sistema policial y carcelario que actualmente rige en el país, con todos los defectos y las graves transgresiones que hemos denunciado en esta Cámara.

La delincuencia infantil no debe analizarse exclusivamente con un criterio punitivo, sino con un concepto de «fenómeno social» que requiere una labor integral, que implica un problema de responsabilidad colectiva y que no puede cumplirse con el simple agregado en el Código Penal de una cláusula determinada.

Podríamos repetir con el gran maestro Luis Jiménez de Asúa: La ciencia penal enseña que el menor ha salido ya para siempre del derecho penal. Los nuevos códigos así lo proclaman, sometiendo a los adolescentes a medidas tutelares de enmienda y de protección. Quedan, no obstante, algunos de fecha remota aferrados

a la vieja idea de que en la infracción es irresponsable y que la adolescencia que quebranta la norma merece pena atenuada.

La solución no está en decir literaria o líricamente que ya las normas sobre menores no figuran en el Código Penal. El problema no se resuelve con decir que ya los menores no están legislados por el Código Penal. El problema es de fondo, integral y exige el funcionamiento de un código de menores, como lo postula José Peco, esa figura, la más brillante en la actualidad de la ciencia penal argentina. Exige, además del código de los menores, los tribunales infantiles, como lo propició con acierto en 1928 aquel otro gran legislador del radicalismo que es el doctor Manuel Pinto, en un profundo estudio sobre los menores delincuentes y la necesidad de su reforma.

Lo esencial es sacar la legislación de menores de las normas del derecho penal y para ello debe legislarse sobre los límites de punibilidad, debe dictarse un código de menores, deben establecerse los tribunales infantiles y deben crearse los institutos especializados.

Nosotros entendemos que el hecho de que no figuren normas penales no puede significar que de por sí ya entramos en la solución integral de este problema. Más aún: los técnicos que concurrieron, trabajaron y aportaron su contribución en la Comisión de Legislación Penal, manifestaron que eran partidarios de un estatuto integral y que eran necesarios estos institutos que hacen a la realización de lo que yo llamaría el moderno derecho de los menores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se limita a enunciar exclusivamente un proyecto integral sobre menores que no veo por qué razón no debe tratarse juntamente con el que considera la Honorable Cámara.

El proyecto en consideración tiene defectos esenciales porque al no entrar en una legislación integral sobre el código de los menores, como lo postulaban Peco y Pintos, frente a esa realidad no hay razón para que se prescinda de la incorporación de cláusulas al Código Penal. He de demostrar con la legislación comparada cómo existen otros conceptos y otros principios que no han sido tenidos en cuenta en este proyecto.

Olvida el proyecto ese aspecto esencial de los tribunales infantiles, que propició en una gran iniciativa el doctor Pinto, después de una encuesta y de estudios realizados con estudiosos y camaristas, que hubiera sido indispensable consultar en esta oportunidad para mejorar la ley que se dicte. Es un defecto esencial la prescindencia de las instituciones del derecho tutelar de menores.

Quiero señalar, señor presidente, que todos los tratadistas y las legislaciones modernas reconocen y reciben el impulso, el efecto y la repercusión de esa profunda transformación del derecho penal en materia de menores.

Ha dicho Sebastián Soler, en su obra, que hoy día se afirma la autonomía del derecho penal frente a los menores y que se llega a una sistemática estrictamente tutelar de acuerdo con estudios y con otras instituciones sobre menores abandonados o en peligro. Se afirmó así en el Congreso Nacional Francés de Derecho Penal, que declara concretamente: «Para los menores no se habla más de expiación ni tampoco de responsabilidad moral.»

Esos conceptos de Sebastián Soler son concordantes con la opinión de Eusebio Gómez, de Rodolfo Moreno y de Peco, que en su proyecto de reformas al Código Penal —un estudio magnífico para toda la legislación penal de fondo— establece normas y principios que aun en la hipótesis que se está considerando merecieron ser incorporados a esta legislación por la sobria clasificación que prevé.

Quiero señalar muy ligeramente —dado el tiempo de que dispongo— algunos antecedentes parlamentarios en esta materia. Puedo citar, aparte del proyecto del doctor Pinto, las iniciativas de los doctores Cabral, Ernesto Sammartino, Félix Liceaga, Modesto Ferrer y Alberto Candiotti sobre Código del Niño, legislación de menores y escuelas hogares, que contemplan aspectos fundamentales en materia de protección social indudable.

No debemos olvidar que en este asunto rigen estatutos que están en íntima relación con los menores. Me refiero a la ley 10.903, sobre patronato de menores, sancionada en 1919; la ley 13.317, sobre trabajo de mujeres y de menores, en la cual tuvo una participación directa aquel gran parlamentario y gran argentino de la hora, Alfredo L. Palacios, que juntamente con Leónidas Anastasi han trabajado tanto por mejorar la legislación social argentina y cuidar el valor humano de la República.

He de mencionar las leyes 12.341 y 14.329, sobre Departamento Nacional de Maternidad e Higiene Infantil, en 1936, y de examen médico de los menores, en 1954.

Y como antecedente de la legislación comparada debo recordar la de Suiza y el Código del Niño de la República de Uruguay, que por su singular trascendencia debe merecer la consideración de esta Cámara. Este Congreso en 1948 propició la creación de una comisión redactora del Código del Niño en interesantes debates.

Nos preocupa fundamentalmente este problema. El crecimiento de la delincuencia juvenil en el país es un hecho evidente. Hemos reclamado las estadísticas sobre delincuencia y no hemos podido lograrlas. Al respecto, el señor diputado Fassi ha presentado una iniciativa reclamando por la falta de publicaciones estadísticas criminales en la Capital Federal y en todo el territorio de la República.

Debemos señalar que las razones que determinan esas causas de la delincuencia precoz es-

tán íntimamente vinculadas a las condiciones éticas del país, al medio ambiente y no sólo a las causas directas o indirectas que fluyen del propio hogar. José Peco señala en su primer y precursor libro *La reforma penal* que las causas de la delincuencia precoz deben buscarse más «en deficiencias del ambiente social que en anomalías de carácter individual». Ese principio, que es de estricta aplicación, se acentúa gravemente en la hora presente. Ferri señala el carácter distintivo de la delincuencia precoz con la delincuencia general, y Peco señala como principales causales de ella a las siguientes: el abandono material y moral de la infancia; el descuido de la educación; la forma como cumplen su función los establecimientos penales y carcelarios.

Sabe bien el país que tanto en las comisarías como en las cárceles hay promiscuidad de los menores con delinquentes mayores que ya tienen la habitualidad del vicio, y como por esta ley no se instituyen los tribunales tutelares, afirmamos categóricamente que todo será igual y que los menores seguirán en el mismo ambiente y clima que hoy, como los estudiantes, las jóvenes, los obreros, las mujeres y los hombres que están en las cárceles de la República por el solo delito de defender la libertad.

En esta materia es fundamental cumplir la función de prevención de los delitos de los menores y no limitarse a la tarea de represión que en definitiva sólo sirve para acentuar los índices de la delincuencia juvenil.

Quiero señalar la importancia de la legislación comparada y la evolución operada. Hay países, como Ecuador e Italia, que fijan la edad de catorce años como límite de la inimputabilidad; mientras que es de dieciséis años en Chile y Nicaragua, que se inspira en el código español; y es de dieciocho años en el Uruguay, México y Brasil.

La legislación moderna tiende a fijar en las leyes penales de fondo el principio de la inimputabilidad de los menores, pero sobre todo a establecer los institutos tutelares y los tribunales infantiles especializados.

Podemos señalar, con respecto a inimputabilidad de menores, en este cuadro obtenido a través de la lectura de los distintos códigos americanos publicados en la obra de Jiménez de Asúa, las siguientes conclusiones: que la Argentina fija la edad de catorce años para la inimputabilidad; Bolivia, la de diez años; en Brasil se fija la edad de dieciocho como inimputable, y veintiuno con atenuación; esta última para delitos determinados en forma disminuida. De doce años en Cuba; e inimputable a los dieciséis años en Chile, pero estando exentos de pena los menores de dieciséis a veinte años que obraron sin discernimiento, teniendo los de veinte años pena con responsabilidad atenuada. Se fija en dieciocho años en la República Domi-

nicana para aquel que obró sin discernimiento y debe ser absuelto. Hasta la edad de catorce años en Ecuador no hay sujeto activo del delito, mientras que de catorce a dieciocho hay reglas especiales, y hasta los veintiuno no pueden ser declarados reincidentes.

El del Uruguay, que es uno de los códigos más avanzados, establece el límite de imputabilidad hasta los dieciocho años, y de dieciocho a veintiuno establece una responsabilidad atenuada. El código de Nicaragua —que sigue al español— hace una discriminación entre la responsabilidad de diez a dieciséis años, y después de dieciséis a veinte años, atenuada. Los códigos de El Salvador, Honduras y Venezuela, quince años, con excepciones a la responsabilidad condicionadas al discernimiento; y el de Guatemala, quince años, pero no habla de discernimiento: el tribunal de menores decide libremente sobre el régimen adecuado.

Jiménez de Asúa destaca que los códigos más recientes ya no actúan en función de ese discernimiento.

El código de Italia, sancionado en octubre de 1930, en su artículo 97 establece que «no es imputable quien al cometer el hecho no había cumplido catorce años», y el artículo 98 determina que al menor de catorce años, que no ha cumplido dieciocho, se le disminuye la pena.

El código de la República Oriental del Uruguay, sancionado en 1933, establece en el artículo 34 una norma clara y precisa: «No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de dieciocho años», redacción precisa y clara que no se sigue en el proyecto. Añade que «el cumplimiento de las medidas educativas se observará en los reformatorios, de acuerdo con las disposiciones vigentes», tal como lo consigna el artículo 98 del código uruguayo.

Esos dos principios sustentados a través de los artículos 34 y 98 de los códigos que he citado no son seguidos en este despacho, aparte que consagra cuatro clases de medidas de seguridad.

El Código Penal español establece la exención de responsabilidad criminal para el menor que no haya cumplido dieciséis años, y añade esta norma clara: «Será entregado a la jurisdicción especial de los tribunales tutelares de menores.» Esta cláusula fundamental tampoco se contempla en este despacho, y ello significa una grave defeción en el articulado del proyecto.

El código peruano fija normas distinguiendo a menores de trece años, de más de trece y menores de dieciocho, de más de dieciocho y menores de veintiuno. Habla del «tratamiento de los menores» y los substraen del Código Penal, lo que no implica que el Código Penal dé los principios esenciales.

Entre los modernos códigos pueden señalarse aquellos que determinan que los menores de dieciocho años no merecen punibilidad, como

los de Méjico, Uruguay, Colombia, Brasil y Costa Rica, que la fija en diecisiete años.

Jiménez de Asúa llega a esta conclusión importante: «Los mejores códigos al respecto no suelen situar ya el problema de la edad como excluyente de responsabilidad tan sólo, sino que le dedican un título propio o disposiciones especiales sobre el régimen tutelar, remitidas a la ley de menores.» Es decir, la tesis que hemos sustentado en la comisión y en este debate.

Esos códigos se limitan a decir, en orden a la imputabilidad de niños y adolescentes, «que los menores de dieciocho años no son punibles».

Debe citarse al respecto el artículo 23 del código de Brasil, el artículo 119 del código de Méjico, el artículo 130 del código de Colombia, el artículo 25 del código de Costa Rica y el artículo 34 del código de Uruguay.

La verdad es que la tendencia moderna se orienta hacia los dieciocho años como grado de inimputabilidad. Ella está de acuerdo, a su vez, con la doctrina internacional, que en su último congreso sobre la materia ha fijado dieciocho años. Se establecen los principios generales, pero sin eliminar los principios básicos del Código Penal, mientras este proyecto los elimina totalmente, como si el hecho de establecer un principio en el Código Penal significase la aplicación de las normas del código en la acción de reeducación de los menores. No hablar de los menores en el Código Penal no significa que ello sea sacarlos del Código Penal.

De manera que la evolución de la legislación comparada no se aprovecha en este estatuto, ni se computan los principios más modernos sobre legislación de menores.

Técnicamente no se sigue esa experiencia que dan la doctrina y la legislación más recientes. Tampoco se cumple con la función de defensa integral del menor, que inspira los estudios más progresistas al respecto.

Además, todos los códigos modernos mencionados, que se orientan hacia la eliminación del menor de la legislación punitiva común, todos los códigos —repito— contienen normas generales sobre menores, mientras que en este proyecto se derogan los artículos 36, 37, 38 y 39 sin que las nuevas cláusulas se incorporen al Código Penal.

A ello debe agregarse que no se instituyen los institutos tutelares de menores y los tribunales de magistrados especializados ya que seguirán existiendo los mismos jueces y en los mismos locales.

Quiero señalar algunos fallos de los tribunales del país que son interesantes pues han fijado el criterio que debe seguirse en esta materia, a pesar de la actual legislación argentina, lo que haré más adelante.

Quiero ahora referirme a algunos aspectos del articulado. La verdad es que si el propó-

sito era establecer normas para resolver el problema básico de los menores, a quienes el gobierno se jacta en señalar como los privilegiados, hubiera sido preferible la sanción del Código de los Derechos de los Menores a que nos hemos referido, y que los propios representantes técnicos del Poder Ejecutivo han propiciado ante él, a pesar de lo cual no se lo ha traído a esta Honorable Cámara.

Más aún; en la hipótesis planteada, de no realizar la legislación integral, es evidente que dentro de la norma penal se debió establecer el concepto, y en vez de consignar una clasificación entre el menor que no ha cumplido dieciséis años y el menor de dieciséis a dieciocho años de edad hubiera sido preferible una clasificación que distinguiera entre el menor de catorce años y el menor de dieciocho años, que sea de 14 años o más, que es la clasificación más aceptada en nuestros precedentes legislativos y mejor recibida por la doctrina.

El proyecto del doctor Peco fija con claridad el concepto sobre esta materia, el cual se inspira en la legislación suiza, considerada como una de las más avanzadas. Figuran en su proyecto en los artículos 31, 32 y 33.

En su proyecto el doctor Peco propicia el código protector de menores, y manifiesta que mientras él no se dicte, el Código Penal no puede desentenderse de estas normas de la minoridad.

Con respecto a las distintas categorías de menores —de catorce y de dieciocho años—, señala dos hemisferios jurídicos distintos. «Lo esencial —añade— es establecer cuáles son las sanciones tutelares según las categorías.»

En la exposición de motivos el doctor Peco expresa: «No está lejano el día en que nuestro país recoja esta generosa aspiración: pero mientras un código integral no colme tales anhelos, el Código Penal no puede desentenderse del régimen de la minoridad.» El doctor Peco propicia en los artículos 31 y 32 de su proyecto un sistema inspirado en la legislación suiza que entiendo era preferible al régimen que se instituye en este despacho.

Los propósitos de esta ley quedan frustrados inclusive cuando se refieren a la substracción del menor a las disposiciones del Código Penal. Quiero señalar que con respecto al menor de dieciséis a dieciocho años, si no se tratare de infracciones privadas o sancionadas con un año o menos de la privación de la libertad, multa o inhabilitación, la autoridad judicial lo someterá a proceso; pero nada dice en esa circunstancias con respecto al menor que no ha cumplido dieciséis años.

En consecuencia, quedan planteados estos dos interrogantes: ¿el menor de dieciséis a dieciocho años que ha cometido un hecho sancionado con más de un año de privación de libertad no está sometido a proceso alguno? ¿El menor

de dieciséis años en ningún caso será sometido a proceso? Ambas situaciones deben contemplarse para no dar lugar al supuesto de que se hubieran cometido hechos que a tenor de la ley penal hubieran resultado un delito grave.

Quiero señalar que por los defectos de no haber consignado una clasificación como el tipo de la legislación suiza y el del proyecto del doctor Peco, según el cual el menor estuviere moralmente abandonado, o pervertido, o revelare peligrosidad, puede llegarse a soluciones censurables como el caso de delito de homicidio o en los casos de violaciones.

Pongámonos en el caso de un hijo a quien le falta un mes para cumplir dieciséis años, matador del padre, o de un hermano de la misma edad, o violador de una hermana: según la parte final del artículo 2º, se puede proceder a su internación en un «instituto adecuado». El tema planteado nos sugiere dos observaciones: la primera, por la falta de establecimientos especiales en toda la amplitud de la República. Para que la ley fuese hacedera, el proyecto ha debido venir acompañado de otro proyecto referente a la creación de establecimientos de menores a lo largo del país.

La segunda observación consiste en que el proyecto no proporciona elementos de juicio alguno para determinar el tiempo en que el menor ha de permanecer en el instituto adecuado.

A primera vista pareciera que el menor está sujeto a la sentencia indeterminada, que vale tanto como expresar que la cesación de la privación de libertad tendrá lugar cuando la autoridad competente lo creyera necesario.

El proyecto debe determinar claramente, por una parte cuál es la autoridad competente para poner en libertad al menor, y por otra establecer cuáles son las normas para decretar la libertad.

De la misma manera que el artículo 1º establece que el menor de dieciséis años, en caso necesario podrá ser internado en un establecimiento adecuado para facilitar la adopción del régimen correspondiente, así también el artículo 2º debió establecer de manera clara cuáles son las normas para determinar el régimen adecuado.

En este despacho se ha dicho que se «subtrae a los menores del campo del derecho penal»; sin embargo, demostraremos que no es así y que va contra la verdadera doctrina de toda la ciencia penal moderna.

El régimen tutelar de que hace gala el Poder Ejecutivo está malogrado por las normas contenidas en la parte final del artículo 4º con relación al menor de 16 a 18 años. Dice el artículo que si de las conclusiones del informe y de las demás circunstancias apareciera fundadamente necesario aplicar una sanción, el juez así lo resolverá «conforme a la ley penal, pu-

diendo reducirla en la forma determinada para la tentativa».

Vale decir que este artículo demuestra que se sigue en el Código Penal, que no se substraen total y definitivamente al menor del Código Penal y que en esta materia se funciona de acuerdo con los principios de la reincidencia y de la tentativa. Se malogran los propósitos perseguidos por el proyecto, de arrancar al menor de las directivas del Código Penal. No se dan normas seguras para adoptar uno u otro criterio.

Esto, además, pone de manifiesto que no se sigue una unidad orgánica ni un criterio coordinado en lo que respecta a la norma a aplicar. Así, por ejemplo, por el artículo 79 se faculta al juez para declarar la pérdida de la patria potestad, la pérdida o suspensión de su ejercicio, pero no se dan a la autoridad judicial, en una reforma de esta índole, elementos de juicio para establecer una u otra medida. Vale decir, entonces, que no se puede dejar librado en forma discrecional ese concepto, sino que ello debe estar resguardado por seguras garantías para seguir uno u otro criterio, como, por ejemplo, en el caso de un menor moralmente abandonado o de un menor moralmente pervertido, que hubiese llegado a la comisión del hecho no sólo por las condiciones ambientales sino principalmente por la conducta del padre o tutor entregado al alcoholismo, el juez debe necesariamente privar de la patria potestad o de la tutela al que la ejerza.

Las disposiciones contenidas en el artículo 89 no tienen razón de ser, ya que no hacen sino repetir la legislación actual. Si un menor de 22 años y mayor de 18 comete un delito está sometido a las directivas del Código Penal, y en este caso la única utilidad que presta el artículo es que las penas por delitos cometidos por los mayores de 18 años y menores de 22 deben ser cumplidas en establecimientos especiales, o en secciones especiales de los establecimientos comunes.

Todo esto está demostrando la necesidad de que las normas jurídicas instauradas en el proyecto tengan una estructuración integral en esta materia y debiera venir acompañado de providencias administrativas destinadas a asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas.

Deseo, además, señalar la falta de la creación de tribunales administrativos. Los artículos 15 y 16 del proyecto de ley del ex diputado doctor Pinto se ajustan, en mi concepto, a una mayor comprensión del problema y a una mejor redacción. Entiendo que el propósito es plausible; pero en ese proyecto del doctor Manuel Pinto —que ha sido precursor en esta materia— se analiza con profundidad y detenimiento la cuestión que tratamos.

Quiero destacar como hecho fundamental que la legislación moderna reclama ese principio de

los tribunales infantiles, que no están previstos en este proyecto. En el capítulo III del proyecto del doctor Pinto se establece esta norma: «No es punible el menor de 16 años. Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal encargará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla 18 años de edad...»

El proyecto que consideramos no resuelve el problema grande y serio de los tribunales infantiles y de la creación de los institutos adecuados de estudio y clasificación de menores. Por ejemplo, el artículo 59 establece que la sanción privativa de libertad que el juez impusiere se hará efectiva en «institutos especiales». Yo pregunto cuáles son esos institutos especiales en los que se ha de recluir a los menores a partir de la aplicación de esta ley. Sin duda alguna, esa reclusión se hará en los establecimientos existentes, en la misma forma y pésimas condiciones en que se procede actualmente, con todos los vicios y defectos de esa materia.

No hay debida correlación y armonía entre los artículos 39 y 49 del proyecto, como lo señalé en la comisión. Nada se prevé sobre normas procesales propias y órganos adecuados para la aplicación de estos principios defensivos, como lo prevén las leyes de Francia, Bélgica y España. Tampoco se promueve la instalación de los tribunales infantiles con carácter mixto, ni el régimen adecuado de institutos especiales y estudios de clasificación para menores delincuentes. Merece recordarse la tesis premiada de la doctora Telma Reca sobre delincuencia infantil en los Estados Unidos y en la Argentina y, sobre todo, el capítulo VII, sobre organización de los tribunales de menores.

El artículo 89 del proyecto permite mezclar los menores de 18 años con los menores de 18 a 22 años, cuya responsabilidad psíquica y criminal es distinta y posibilitará una grave promiscuidad que es inadmisibles.

Eusebio Gómez, destacado penalista argentino, señala la honda preocupación por los problemas de la delincuencia precoz, que califica de «problema inquietante por los caracteres que reviste». En su proyecto de código, en los artículos 21 a 29, legisla sobre esta materia. Se refiere a menores de 18 años. En el 95 % de los casos —dice Eusebio Gómez— el niño o el adolescente debe ser atendido, amparado y educado y será adaptable al medio. Pero «el 5 % no lo será jamás».

Y agrega: «Ninguna reforma puede oponerse a la inclusión de esta materia dentro del Código Penal.» Ello a la vez que propiciando la creación de tribunales para menores, con jueces especializados.

Cito la opinión de Eusebio Gómez porque, precisamente, en el seno de la comisión los representantes de la comisión técnica invocaron

el proyecto de Coll-Gómez. Gómez sostiene concretamente que ninguna reforma puede oponerse a la inclusión de esta materia dentro del Código Penal, sin perjuicio, claro está, de la creación de tribunales para menores, con jueces especializados, lo que implica el coronamiento de la verdadera obra social en esta materia.

Quiero referirme a los conceptos que se han enunciado en defensa de este proyecto.

El segundo Plan Quinquenal que se ha invocado, dice concretamente: «creación de un fuero judicial especializado para menores, estructurado con sentido formativo y no represivo». Es decir, que el segundo Plan Quinquenal establece un principio que no se sigue en este proyecto, pues no se instituye el fuero judicial especializado de que habla esa ley del Congreso. De manera que el proyecto no guarda fidelidad con ese estatuto y antecedente que tanto se invoca.

A esto debo agregar que en las últimas conclusiones del congreso de Bruselas, de 1954, se expresa que «en el ámbito jurisdiccional esta coordinación importa que todos los asuntos concernientes al *status* del menor, así como todas las intervenciones que justifique el comportamiento del mismo, o su situación en su medio, deben confiarse a una jurisdicción especializada dotada de servicios auxiliares adecuados».

Es decir, que esa conferencia, en la que participaron activamente hombres de la comisión técnica del Poder Ejecutivo, propugnó la sanción de normas con principios generales e integrales en materia de legislación de menores.

El Poder Ejecutivo no sigue sus propias orientaciones en esta materia. No sigue la norma de su propio proyecto de Código Penal enviado en 1951; no la sigue en el proyecto de 1953, y en este mismo trabajo de 1954 —del Ministerio de Justicia— se establece que el criterio que se sigue es el de no incluir al menor en el campo penal y, como lógica consecuencia, el propósito de preparar una ley integral sobre menores que abarque los problemas penales, civiles, procesales y asistenciales. Se dice así, concretamente, que «la única disposición que hay en el proyecto, referente a menores, es la del artículo 89».

Es decir, que el Poder Ejecutivo no sigue ni siquiera sus propias iniciativas y está en la constante contramarcha doctrinaria.

Este asunto de los menores debe considerarse en íntima coordinación con la ley de patronato de menores —ley 10.903—, cuya reforma consideramos esencial para ajustarla a los principios más modernos. En el último tomo de *Anales de Legislación Argentina* se publica un interesante estudio sobre la materia.

En el debate de 1919 se decía que había que «preparar la legislación penal para menores y la institución de los tribunales de menores. Ese vaticinio de 1919 vuelve a cobrar realidad ante este proyecto y demuestra cómo se frustra la

gran oportunidad de dar una legislación integral sobre menores.

Entendemos que en esta materia es de lamentar que no se considere todo lo que la legislación comparada enseña. Merece recordarse el profundo estudio sobre los «derechos del niño» realizado en el Congreso Internacional de Economía Social en 1924.

Es un problema esencial el de la delincuencia infantil, como el crecimiento de la delincuencia en general en el país. La delincuencia crece desde 1930. Se puede señalar que el índice más favorable —como dice Nerio Rojas— es el que figura, precisamente, durante los gobiernos de Yrigoyen y de Alvear, y que los índices más altos se registran en los años 1932, 1933, 1934, 1935 y 1936, durante la presidencia de Justo, y mucho más en la hora actual. La estadística da los siguientes porcentajes sobre el crecimiento de la delincuencia en la Capital Federal: en 1930, es de 6,8; en 1931, de 7,3; en 1932, de 8,7, para llegar, en 1946, a 8,4 por ciento. Después no se publican las estadísticas.

El crecimiento de la delincuencia se vincula con problemas esenciales de la vida nacional, vinculación que tenemos el deber de afrontar y señalar. Se vincula también a la seguridad jurídica, al estado de derecho, a la seguridad y libertad que pueda tener el hombre joven para desempeñarse y desenvolverse en la vida argentina. Ha dicho Nerio Rojas que toda dictadura es una escuela de inmoralidad al suprimir la libertad, que es la base de la moral, y señala con todo acierto cómo crecen los índices de delincuencia, precisamente, en esos estados de negación de los principios democráticos y republicanos.

Ahora quiero, señor presidente, referirme ligeramente a la edad mínima establecida para poder contraer matrimonio, que es el segundo aspecto contemplado por este proyecto. Se eleva a 14 años para la mujer y 16 para el hombre. La verdad es, señor presidente, que la comisión aceptó un planteo del señor diputado Fassi, de reforma de este artículo para evitar graves defectos que contenía.

No hemos podido contar con las estadísticas de la materia, que determinan la necesidad de esta reforma. Hemos propiciado una reforma esencial que no ha sido considerada. Entendemos que por una ley especial debe venir la reforma de los artículos 126, 127 y 128 del Código Civil para establecer un nuevo índice en materia de capacidad plena de las relaciones civiles. Debe capacitarse al hombre y a la mujer argentinos a los 20 años para poder actuar en todos los órdenes con la plenitud de sus derechos; existen iniciativas radicales en esta materia. Entendemos que es un paso decisivo, que demuestra nuestra fe en la juventud, confianza en su capacidad, reconocérsela para el ejercicio de la plenitud de la vida civil a los 20 años. De-

mostraremos así nuestra fe y nuestra confianza en la juventud que trabaja, que estudia; en la juventud rebelde, reformista, capaz, de este pueblo argentino que tiene vocación por la libertad y la dignidad, que no podrá destruir ningún sistema, ningún régimen de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Dentro del precario tiempo de que dispongo, quiero ahora referirme a la ausencia con presunción de fallecimiento.

Entendemos que este título es susceptible de esenciales reformas. Efectivamente; el codificador se ha inspirado en conceptos distintos y contradictorios, por lo que se hace necesario mejorar la legislación. Esto no quiere decir que deban introducirse nuevos elementos de caos y de confusión.

Debe tenerse en cuenta que en materia procesal sobre declaración de ausencia con presunción de fallecimiento funcionan tanto las normas de la legislación civil de fondo como también las normas instituidas en los códigos de procedimientos de cada provincia.

La actual legislación distingue, en cuanto a los plazos para la ausencia, los casos ordinarios y extraordinarios reglados por los artículos 110 y 112 del Código Civil, respectivamente.

Es indudable que diversos criterios campean en la actual legislación, por lo que ésta debe merecer una reforma orgánica y cuidadosa, objetivo que no se logra con el proyecto que considera la Honorable Cámara.

No se pudo señalar en la comisión cuál es la filiación doctrinaria de esta reforma. Se hizo en el seno de la misma una impugnación de fondo, que considerará en forma detenida el señor diputado Fassi. Entendemos que son necesarias reformas en este aspecto. Debe llamarse la atención, entre otras cosas, de que la norma establecida en el artículo 31 puede convertirse en una forma de divorcio por mutuo consentimiento, dada su redacción, y que puede prestarse a grandes abusos, porque establece un sistema que es la negación de la seguridad y de principios jurídicos elementales.

Este artículo 31 se puede prestar a la combinación y a la confabulación en contra de nuestra legislación actual, que prohíbe el divorcio por mutuo consentimiento. Por este sistema del artículo 31 se puede prestar a una simulación para obtener prácticamente el divorcio, pudiendo el cónyuge que quede liberado contraer nuevamente matrimonio.

Más aún: el artículo 32 se presta y afirma ese principio de gravedad singular.

Con respecto al bien de familia, cuyo principio general apoya entusiastamente el sector radical, entendemos que debe protegerse íntegramente al núcleo familiar. A propósito recuerdo las palabras de Yrigoyen en su mensaje al Congreso defendiendo la integridad de la familia como núcleo esencial de la sociedad.

El Congreso Panamericano de la Vivienda Popular realizó un magnífico estudio sobre esta materia, que debe merecer la preocupación de los hombres de este Congreso a quienes interesan estos problemas. Debo recordar también los proyectos mencionados por el señor diputado cuando se refería a los proyectos de González Zimmermann, y una iniciativa precursora del doctor Miguel Laurencena, primer gobernador radical de Entre Ríos, quien en el año 1912 propició normas tendientes a consagrar estos principios. Se ha dicho en ese Congreso Panamericano de la Vivienda que la familia es un estado que realiza su derecho, como el Estado político procede a la realización de lo suyo, como síntesis de la gran familia y de la gran comunidad. El bien de familia es, pues, un acto positivo de realización de los derechos de familia.

No es admisible el enjuiciamiento que se quiere consumir con la loable ley del hogar, ley 10.284, sancionada el 25 de septiembre de 1917 y que pone de relieve la noble inquietud de bien social que animaba a esas generaciones de legisladores y gobernantes. Esa ley propició la creación del lote de cada hogar, protegido por una serie de medidas defensivas, y se inspiró en la ley del *homestead*, originaria de los Estados Unidos, a cuyo amparo se cumplió una fecunda tarea de solidaridad social y humana.

Me proponía señalar algunos defectos esenciales del proyecto en consideración, pero la tiranía del tiempo no me permite extenderme. En concreto, diré que no coincidimos con la facultad discrecional que se otorga al Poder Ejecutivo en esta materia del bien de familia; y no coincidimos con las facultades que el Congreso quita a las provincias en materia impositiva. Coincidimos, sí, en que debe estar exento de todo impuesto, de todo gravamen, pero ello debe ser por el cauce natural. El Congreso y el Poder Ejecutivo nacional no son los gigantes todopoderosos para devorarse a las provincias. La legislación, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, uniformemente reprimen y condenan esta invasión sobre los derechos de las provincias. Debe hacerse esa exención, pero por el procedimiento normal. ¿Por qué, señor presidente, este «dolor inútil» de violar constantemente las normas, de avasallar a las provincias, para que el federalismo quede reducido a letra muerta, cuando esos mismos principios pueden conseguirse mediante la sanción pertinente de los propios Estados provinciales?

Con respecto al bien de familia, nosotros entendemos que no solamente ha de otorgarse por voluntad del jefe de familia, sino que también debe instituirse como la consecuencia de una obra realizada por el propio Estado, de modo que todas las propiedades construidas por medio de créditos oficiales deben comprenderse dentro de esas normas que he señalado.

Disentimos también con la interpretación que formulaba el señor diputado por Mendoza. La jurisprudencia es invariable en materia de facultades impositivas de las provincias. El artículo 40 del proyecto es inconstitucional. Más aún, el 42 no es ni siquiera concordante y tiene otra tesitura. El 54 habla en otro tono: «Gestionará de las provincias. . .» La exención es plausible, pero se violan las facultades que tienen las provincias de ejercitar el poder impositivo, la capacidad tributaria. Las provincias, según la Constitución, conservan todo el poder no delegado por ellas al gobierno federal. La capacidad y la potestad tributaria de las provincias hacen a la esencia de su autonomía. Este proyecto significa que el Congreso por sí y ante sí quita a las provincias una facultad que les es propia, lo que no puede ser. Podemos citar al respecto la opinión de Bielsa, de Andreozzi, de Linares Quintana, que han estudiado exhaustivamente este asunto. Ha dicho Bielsa que las provincias pueden fijar el *quantum* del impuesto por consideraciones de orden económico y fiscal. El poder impositivo se expresa en el establecimiento de las contribuciones, dentro de la jurisdicción respectiva y en la extensión lícita.

La verdad, señor presidente, es que no venimos a sostener la política de enfrentamiento de las provincias a la Nación. Coincidimos con la doctrina de que debe establecerse una acción de coordinación y aprovechar la oportunidad propicia para cristalizar los conceptos comparados por todos los autores sobre la materia.

Al respecto recuerdo la opinión de Andreozzi, en el capítulo «Las potestades tributarias argentinas», cuando dice que en el derecho público existen dos categorías de órbitas tributarias: una, en la que están la Nación y las provincias con su capacidad propia, y otra, en la que están los municipios. El artículo 130 de la Constitución, que determina que los gobernadores de las provincias son agentes naturales del gobierno federal, no desnaturaliza esos conceptos sino que los refirma. Es natural consecuencia que las provincias puedan, dentro de la esfera ya consignada, dotar a las normas tributarias de las características que consideren más eficaces.

La Corte ha declarado «que es de exclusiva incumbencia de las provincias crear impuestos, elegir los objetos impositivos y determinar las normas de su percepción».

Más adelante, en un fallo posterior, la Corte ha dicho que «las provincias conservan todo el poder no delegado y, por lo tanto, gozan de la facultad de crear impuestos y elegir la materia imponible, sin más límite que el de la órbita del impuesto nacional, si éste no tiene por la Constitución carácter exclusivo».

Linares Quintana expresa en su libro sobre poder impositivo, de manera categórica, los mismos conceptos.

Como la señal luminosa anuncia el vencimiento del término para mi exposición, dejaré sin analizar el último capítulo de la reforma.

He fijado en términos generales el planteamiento de nuestra oposición. Votaremos en contra del proyecto por los vicios de su estructuración y su falta de organicidad.

Es nuestro anhelo que la juventud argentina tenga una elevada orientación en su educación física y moral. El gobierno ha hablado de «la construcción en todo el país de clubes deportivos» para la juventud, y del deporte como un medio de alejarla del vicio. Consideramos plausible cuanto se haga para aislar a la juventud del sinuoso camino del vicio y la delincuencia precoz, que tanto preocupa a los argentinos. Pero la creación de clubes deportivos no debe significar jamás el abandono de principios esenciales en defensa de los valores morales. Esos clubes deportivos debe instalarlos el gobierno con su propio esfuerzo y no mediante el despojo de los creados por iniciativa privada, como en el caso del club Atlético Estudiantes de Paraná, con cincuenta años de antigüedad, producto del esfuerzo extraordinario de sus socios, que fué entregado a una entidad que es adicta y apéndice del gobierno y lo que representa un zarpazo inusitado.

Son necesarios los clubes deportivos, pero es muy urgente establecer «institutos tutelares de menores», dotar a la República de tribunales infantiles y crear los medios y el clima cívico e intelectual para que la juventud tenga fe en su acción dentro de la vida estudiantil y cívica de la Nación. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Estamos trabajando en esta acción con nobles propósitos de bien público. Hemos concurrido a la comisión y hemos dado a conocer nuestras ideas. Creemos que los problemas del país no se resuelven con «bailes existencialistas» o con la división de la República en «cabezas verdes», «cabezas negras» y «cabezas del gobierno».

Sr. Miel Asquía. — Está fuera de la cuestión el señor diputado.

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Sr. Presidente (Benítez). — Ha vencido el término de que disponía el señor diputado por Entre Ríos para hacer uso de la palabra.

Sr. Perette. — Concluyo, señor presidente.

La recuperación integral de la República sólo se logrará con el afianzamiento de los valores morales. Empeñado en esa tarea, el sector radical brega por los derechos de la juventud, por la libertad, por el mejoramiento social de la clase trabajadora, contra todas las opresiones, contra todas las transgresiones de la ley y contra de todo acto que despoje a la juventud de su función integral, libre, digna y

republicana. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor presidente: por razones de método y acaso porque estimo que así podemos distribuir mejor la tarea los hombres que integramos el sector de la mayoría, voy a comenzar mis modestas palabras aplicándome a discernir acerca de este instituto de extraordinaria importancia y significación jurídico-constitucional que es el bien de familia, para después aludir a las cláusulas de indivisión y, si tengo tiempo, a los otros artículos de este proyecto.

Es necesario subrayar, como primera y fundamental ocurrencia, que este proyecto de ley acerca del bien de familia, obedece antes que nada a una requisitoria de nuestra superlegalidad, a una requisitoria de la Constitución Nacional. Dice ésta, en el artículo 37, lo siguiente:

«Decláranse los siguientes derechos especiales: Capítulo II. — De la familia.

«La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.

«1. — El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad;

«2. — El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca;

«3. — El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine;

«4. — La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.»

Por su parte, el segundo Plan Quinquenal, entre los objetivos generales del capítulo I, alude a este tema y en el capítulo XXII, objetivo especial 11, propicia la supresión, o, en su caso, reducción de impuestos, para instituciones de este linaje; y en el capítulo XXII, objetivo especial 12, propicia la no gravación del bien de familia en las transmisiones *mortis causa*; y en el capítulo XXIX predica la unidad económica familiar.

Nosotros trataremos de establecer la fisonomía precisa de la jornada constituyente justicialista de 1949, porque de su clara inteligencia ha de surgir como una requisitoria inexcusable el texto de ley que hoy consideramos. Yo estimo que es un deber parlamentario inexcusable de los miembros que integramos esta mayoría, esclarecer todos los problemas acerca de la reforma constituyente del 49, cuya nota fundamental y característica —lo dije en otra oportunidad— fué haber propiciado el tránsito del Estado de derecho burgués liberal, o del Estado

de derecho a secas —si se prefiere—, a lo que yo he denominado, en algún trabajo universitario, el Estado de derecho social.

Saben los señores diputados que, desde el punto de vista ortodoxo, la vieja figura jurídica constitucional del Estado de derecho se basaba en la formación constitucional que lograba su unidad política en base al reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, derechos fundamentales cuyas notas científicas han sido suficientemente explicitadas por la doctrina jurídicoconstitucional; derechos fundamentales concebidos como anteriores al Estado, con supremacía sobre éste, sin que el Estado tuviera otra tarea específica que su amparo y protección.

En lo que yo he denominado Estado de derecho social, la unidad política se logra no sólo con el reconocimiento pleno de aquellos derechos fundamentales, de antiguo linaje liberal, sino que además de mantenerse a éstos incólumes en su jerarquía constitucional, se les adosa otros derechos llamados derechos sociales, que también tienen notas científicas precisas y que yo estimo ahora impertinente mencionar para no dar a mis palabras una dimensión extraordinaria.

Queda firme el concepto, pues, de que el Estado de derecho social logra su unidad política no sólo con el mantenimiento de los derechos fundamentales, de linaje y raigambre liberal, a los que se mantiene en toda su jerarquía constitucional, sino que es también lograda por el aditamento de otros derechos sociales a los que se atribuye excepcional importancia y se les estima como substantivos en la nueva estructura constitucional del país.

Saben los señores diputados que los derechos fundamentales recibieron su primera positividad en la vieja Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Francia, que asegura los derechos de libertad, de propiedad, el de resistencia a la opresión y el de seguridad.

Si bien es cierto que otro paradigma del estado de derecho, como la famosa carta de Filadelfia, en su primera formulación no contenía la mención de ningún derecho fundamental, no es menos cierto que una de sus primeras reformas, a instancias de Benjamín Franklin —entonces embajador americano en Francia—, fué incorporar una declaración sobre algunos derechos fundamentales.

Saben también los señores diputados que es generalmente aceptada la conclusión de que todo el pensamiento político que tuvo efectiva gravitación en las grandes formulaciones jurídicoconstitucionales del siglo XIX hasta la primera guerra mundial, estuvo dominado por la cosmovisión de Rousseau, que aparece así como el gran hontanar en donde el hombre occidental abrevara sus ideas políticas fundamentales.

Pero yo estimo que ésta es una aseveración equivocada. Una de las tantas coincidencias convencionales para tratar de avalar un pensamiento político que día a día se tornaba mustio, que día a día transformábase en pura ideología. La verdad es que yo pienso que no es Rousseau quien domina al proceso prealudido, sino el abate Sièyes, al que Paul Bastid dedicara un ensayo jugoso.

Es exacto que una serie de instituciones logradas en la pasada centuria y en lo que va del siglo XX se han inspirado en la concepción de la democracia directa de Juan Jacobo, pero no es menos exacto que, estrictamente, la formulación dialéctica del estado de derecho ortodoxo, del estado de derecho burgués liberal, ha sido lograda a instancia del pensamiento de Sièyes y de sus epígonos al estilo de Benjamín Constant u otros contemporáneos, filósofos y pensadores que se mueven estrictamente dentro de un ámbito de pensamiento político liberal. Pensamiento éste que se muestra, por sobre todas las cosas, desconfiado de la sagacidad del hombre masa, y, por lo mismo, renuente a dejar librado a las instituciones de democracia directa la posibilidad de las grandes decisiones.

Por eso es que, frente a la democracia directa, que fué el predicado supremo de Jean Jacques Rousseau, los liberales ortodoxos del tipo de Sièyes, que aparecen en definitiva —como dije— dominando todo el pensamiento político de la pasada centuria, erigieron en paradigma a la democracia representativa, creando en su consecuencia institutos de representación.

Desde el punto de vista doctrinario, y aun institucional, la oposición conceptual no estaría pues centrada en el clásico contrapuesto: por un lado el gobierno del dictador o del ejecutivo absoluto, y por el otro las formaciones políticas de democracia directa; la verdadera oposición en todo lo que va (en Occidente, al menos) del siglo XIX, se puede resumir en sus aristas más punzantes entre la democracia directa del tipo roussoniano y la democracia indirecta o representativa que predicaran los grandes pensadores liberales de la pasada centuria.

La representación ha devenido así, algo intrínsecamente existencial y acerca de su formulación dialéctica se han expresado las más luminosas averiguaciones, y la verdad es que ella procuró, al menos por una centuria —hay que reconocerlo, con probidad—, paz y dignidad a la vivencia de Occidente.

Quiero señalar, entonces —como conclusión—, que ese olvido liberal en las grandes cartas constitucionales de la pasada centuria, que obedecían a ese pensamiento político, olvido producido acerca de una serie de instituciones sociales, no era en manera alguna un acontecimiento casual, una peripecia fortuita. Por el

contrario, obedecía a un concepto perfectamente madurado de pensamiento político y, sobre todo, a un prejuicio doctrinario en contra de todas las asociaciones que pudieran intermediar entre el hombre a título singular y el Estado.

Ese es el sentido que tiene esa omisión de las sociedades intermedias en el viejo derecho liberal. Un ejemplo elocuente lo tenemos en la vieja ley Chapelier de la Revolución Francesa, que abominaba de las viejas corporaciones e imposibilitaba la organización de las fuerzas del trabajo, que ulteriormente se llamaron fuerzas sindicales. Así también la omisión a toda alusión acerca de la institución familiar. El hombre era concebido como un ente singular. La vieja concepción angélica roussoniana se traducía en este tipo de institución política: el hombre solo frente al Estado, el hombre como criatura individual y singular.

Otro ejemplo característico y elocuente de lo que dejamos dicho lo tenemos en el pensamiento formulado por el profesor alemán Müller Lyer, que se ha tornado ya en un tratadista clásico en problemas de este linaje. En el libro famoso de este autor, *La familia*, dice el profesor alemán: «En el presente libro (y en el siguiente) se pretende obtener un resultado fecondo del método faseológico, dentro de la esfera poliforme de la geneonomía. Por geneonomía entendemos —dice el profesor— la suma de todos aquellos fenómenos sociológicos que inmediata o mediatamente se relacionan con la procreación de seres humanos (así como la economía es la suma de todos los fenómenos que se relacionan con la producción de mercancías).

La geneonomía comprende, pues, la sociología del amor, del matrimonio, del casamiento, de la adquisición de mujeres, del divorcio, de la posición social de la mujer, de la familia, de la crianza, de la sucesión, de la selección, de la situación de la vejez, del parentesco, del clan, de las disposiciones matrimoniales, etcétera. En todos estos fenómenos consideraremos primeramente el proceso evolutivo y lo expondremos en sus aspectos más importantes, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días», desde la época del parentesco, la época de la familia y la época individual.

Dice lo siguiente el profesor Müller Lyer: «En la época del parentesco está constituida la sociedad humana sobre el principio de la descendencia común y de la consanguinidad. La principal formación geneonómica, el clan. En la época familiar se disuelve el clan, que había sido hasta entonces el fundamento de la sociedad; en su lugar aparecen el Estado y la familia, que alcanza su época de mayor florecimiento.» Y aquí viene lo que yo he denominado la falsa previsión de este autor. Dice que «en la época individual (más exactamente social individual), de la cual sólo los principios conoce-

mos, entra la familia (como antes el clan) hasta un cierto grado, en un proceso de disolución; como herederos suyos se destacan cada vez más vigorosamente la sociedad poderosamente organizada y el individuo altamente desarrollado.» Y agrega: «En la época individual continúa este proceso de disolución de las formaciones geneonómicas. El antiguo Estado guerrero —originalmente una pura situación señorial de explotación— se transforma poco a poco en “Estado de trabajo”. El principio geneonómico de organización va cediendo terreno al principio social. El movimiento parece derivar hacia un punto lejano, en el cual el parentesco y la familia habrán abandonado todas las funciones no geneonómicas en manos de la sociedad perfectamente organizada. De esta época sólo conocemos la fase primaria individual, que se inicia con la diferenciación de la mujer.»

Estimo que esta predicción del profesor alemán es absolutamente errónea. Casualmente, en el derecho público, al través de las cartas constitucionales, fundamentales en el mundo occidental, el proceso es inverso. La familia, en vez de sufrir un proceso de disgregación, en lugar de diluirse, de desdibujarse, va siendo protegida —cada vez más— por estas nuevas cartas constitucionales. Para esto es necesario que haya aparecido en el mundo occidental la gravitación inexcusable del cristianismo, que es reconocida por el gran jurista francés Troplong, que no pertenece a ninguna confesión determinada, que atribuye al cristianismo esta valorización de la institución familiar. Ha sido necesario también que la mujer haya sido jerarquizada y haya logrado la paridad jurídica con el hombre, cosa que fué lograda, en mi opinión, al menos, cuando por el alto predicado de María, la mujer alcanzó en el mundo occidental su plena transfiguración. Claro está que coadyuva a este resultado la aparición del hombre masa, como cabal protagonista político, hecho que se evidencia, sobre todo, después de las dos grandes contiendas guerreras. El estilo masivo de la política contemporánea apresuró la incorporación de los derechos sociales en las cartas constitucionales contemporáneas.

Es necesario, antes de entrar en la materia específica de mi discurso, que hagamos una breve y rápida indagación en lo que yo llamo el derecho privado posliberal. Preocupémonos por establecer cómo ha actuado la familia frente a este problema fundamental relativo a su establecimiento como sujeto de derecho.

La doctrina italiana y la doctrina argentina, expresada por la mentalidad distinguida del viejo maestro doctor Lafaille, se muestra reuente y esquiva a reconocer a la familia posibilidades para ser titular de derechos. Hay una excepción en la doctrina argentina en favor del profesor doctor Juan Carlos Rébora, quien haciendo el panegírico de ciertas insti-

tuciones medievales, dijo que la exención de impuestos en la transmisión *mortis causa*, y la preservación de la unidad económica a través de las generaciones sucesivas era una de las altas razones por las que el mundo medieval, en la alta edad media, sobre todo, había alcanzado el equilibrio de justicia social y de justicia económica.

Pero la doctrina italiana, por ejemplo, a través de las expresiones del doctor Antonio Cicu, dice que es imposible o se hace muy difícil establecer a la familia como titular de un derecho de propiedad, porque la variedad de la organización impide a ésta ser elevada a ente jurídico, y a sujeto del derecho civil.

Doménico Barbero se expresa así: «La familia no es una unidad de derecho sino una pluralidad de sujetos.»

Walter Davauzo expresa que la familia, no obstante su compacta organización, no es otra cosa que un organismo jurídico.

Brugi Broggi, profesor de Pisa y Padua, dice que la familia constituye un consorcio social cuya unidad está asegurada y atestiguada por la comunidad de nombre, de ciudadanía, de domicilio, y por ciertas obligaciones que, en forma diversa, corresponden a quienes pertenecen a ella.

En cambio, el ilustre Legaz y Lacambra, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, huésped el año pasado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta ciudad, expresa que, en su opinión, el derecho positivo puede acordar a la familia una subjetividad o una capacidad jurídica concreta. Esto lo expresa en su libro *Introducción a la ciencia del derecho*.

Creo que el doctor Legaz y Lacambra es quien exhibe en esta emergencia una mentalidad moderna en cuanto maestro del derecho privado, porque si el derecho privado no quiere divorciarse del derecho público, si el derecho privado quiere aparecer inmerso en las grandes formaciones juridicoinstitucionales, ha de adecuar su cometido, y ello de manera ineluctable, a los paradigmas que le señala el derecho público. Y un ejemplo concreto de lo predicho nos lo suministra el texto constitucional acerca de la familia, y este texto de ley que en su consecuencia se dicte. Las jornadas justicialistas de 1949 que produjeron, como dije, el tránsito radical del Estado de derecho a secas al Estado de derecho social, formulan un requerimiento perentorio al órgano encargado de dictar la ley, con el objeto de que elabore una disposición en consonancia con las normas constitucionales que he leído.

En consecuencia, vemos aquí, en un instrumento de derecho público —el ápice de nuestra organización legal—, imponiendo sus designios a los institutos de derecho privado.

Por eso estimo, señor presidente, en primer lugar, que es exacto que la familia puede ser organizada por el derecho positivo como un sujeto de derecho, como titular del derecho de propiedad. No sólo es un organismo jurídico, no sólo es un fenómeno existencial capaz de provocar consecuencias jurídicas, sino que ella, de por sí, con una adecuada organización en la positividad del país, puede ser exhibida plenamente, por su carácter, condiciones y cualidades jurídicas, como sujeto de derecho.

Estimo que es necesario aportar algunos antecedentes de la doctrina extranjera acerca de este particular, y en este asunto, en este problema concreto de la familia, no podemos olvidar el código de Malinas, alto paradigma del pensamiento católico en el mundo occidental, ni la ilustre figura de su inspirador, el cardenal Mercier, que respecto de este problema expresa: «Siendo como es la familia la fuente de donde recibimos la vida; la primera escuela donde aprendemos a pensar, el primer templo donde aprendemos a orar, hay que combatir todo lo que la destruya o la quebrante; hay que alabar y estimular cuanto favorece su estabilidad y su fecundidad.»

El proceso constitucional de los años inmediatamente anteriores a la guerra ha sufrido la influencia de este punto de vista y así tenemos, por ejemplo, la famosa Constitución de Weimar, a la que yo alguna vez calificué (en un trabajo universitario) como una constitución fundamentalmente de compromiso, porque era un pacto, una transacción entre una organización burguesa y una organización socialista de la vida. No obstante ello, la Constitución de Weimar incorpora al artículo 119 esta institución, expresando que «el matrimonio, fundamento de la vida familiar y del mantenimiento y aumento de la nación, está bajo la protección especial de la constitución. Se basa en la igualdad jurídica de ambos sexos. Incumbe al Estado y a los municipios mirar por la pureza, la sanidad y el mejoramiento de la familia. Las familias de prole numerosa tienen derecho a la protección y asistencia del Estado».

La Constitución checa de 1920 incorpora asimismo esta institución. La de España, en 1937. La de Italia de 1947, dice: «La República reconoce los derechos de la familia como una sociedad natural fundada en el matrimonio.» Destacándose, por sobre todas las otras constituciones de Europa, la de Irlanda, de 1937, expresa en el artículo 41: «El Estado reconoce a la familia como el grupo unidad social natural, primero y fundamental, y como institución moral y poseyendo derechos inalienables e imprescriptibles, anteriores y superiores a toda ley positiva. El Estado, por lo tanto, garantiza proteger la familia en su constitución y autoridad como base necesaria del orden social y

como indispensable para el bienestar de la Nación y del Estado.»

En América nos acompaña en este esfuerzo estimable la Constitución de Guatemala de 1945. Expresa: «la familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protección del Estado, quien velará en forma especial por el estricto cumplimiento de las obligaciones que de ellos se derivan».

La Constitución cubana de 1940 dice más o menos lo mismo. La Constitución de la república hermana del Uruguay de 1942, en su artículo 39 expresa: «el Estado velará por el fomento de la familia».

La Constitución de Ecuador dice: «el Estado protege y las leyes regularán el matrimonio, la familia y el haber familiar».

La Constitución de Brasil de 1946 en el artículo 163 establece: «La familia es constituida por el casamiento de vínculo indisoluble y tendrá derecho a la protección especial del Estado. El casamiento será civil y gratuita su celebración. El casamiento religioso equivaldrá al civil, si, observados los impedimentos y las prescripciones de la ley, así lo requiriese el celebrante o cualquier interesado, con tal que el acto sea inscrito en el registro público.»

Sería dar extensión inusitada a mis palabras mencionar prolijamente todos los antecedentes extranjeros. Bastará la mención que a título de ejemplo formulé para dejar suficientemente esclarecido que todo el proceso constitucional contemporáneo hace hincapié en la defensa, en el apoyo de la institución familiar e importa, por sobre todas las cosas, un rotundo aval a una concepción vigorosamente social de la política que considera a la familia como la célula primigenia del todo social.

Eso ocurre, señor presidente, cuando el hombre masa ha advenido —como antes lo expresé— al campo de la política y se ha mostrado como un categórico protagonista, cosa que ocurrió notoriamente, sobre todo, después de la segunda contienda mundial.

En nuestro país tenemos algunos antecedentes inmediatos. En primer lugar, la clásica ley Costa, la ley *homestead*, que fué el primer ensayo en nuestro país en esa materia; pero que era, de alguna manera, si no incompatible, si no inconstitucional, porque ello sería exagerar las conclusiones, si antihistórica dentro de la estructura y del encuadre jurídico de la vieja e ilustre Constitución del 53. Por el contrario, esa ley Costa hubiera sido mucho más lógica dentro del cuadro de las instituciones que habrán de florecer y fructificar después de las jornadas justicialistas de 1949.

En segundo lugar, tenemos el anteproyecto de la comisión reformadora del Código Civil, del año 1936, en que se incorporan al nuevo código elaborado por dicha comisión disposiciones expresas acerca del bien de familia. Dice

el artículo 124: «Para constituir el bien de familia, a fin de gozar de los beneficios que ésta impone y reconoce, será necesaria la inscripción del mismo con ese carácter en el registro de inmuebles.»

Además, tenemos un antecedente que nos sirve y nos alude a nosotros, en cuanto integrantes de la revolución nacional. El 17 de septiembre de 1947 tuvo entrada el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de fecha 12 de dicho mes y año, por el que se autoriza la inscripción de inmuebles con el carácter de bienes de familia. Dice el artículo 1º del proyecto de referencia: «Autorízase a quienes cumplan los requisitos que esta ley establece a inscribir en el Registro de Propiedad de la Capital o de las provincias un bien inmueble con el carácter de privilegio de bien de familia.» Por el artículo 9º se establece que la ley 10.284, la ley de *homestead*, la ley Costa, continuará en vigor respecto de los casos que la misma contempla, pudiendo quienes están acogidos a ella obtener los beneficios de la presente, si lo solicitaran.

Estos son, señor presidente, los antecedentes inmediatos que encontramos en nuestro país.

Ahora es necesario, y entrando ya concretamente en materia, que hagamos una explicitación, de manera formal al menos, acerca de los puntos más importantes de esta institución que se trata de incorporar a nuestra estructura legal.

Así por ejemplo, sabemos que esta ley, ligeramente heterogénea, inicia en el artículo 34 lo referente al bien de familia. Este artículo esclarece perfectamente el problema en lo que se refiere a la institución que consideramos. En primer lugar, se soslaya todo lo atinente a la propiedad familiar y se reduce el proyecto de nuestra consideración al bien de familia, por entender que éste, y no aquélla, tiene una posibilidad de vigencia inmediata, y, además, es una institución mucho más simple y con posibilidades de pronta aplicación.

El artículo 34 dice: «Toda persona puede constituir en bien de familia un inmueble urbano o rural de su propiedad, cuyo valor no exceda de las necesidades del sustento y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente.» Se ha preferido en esta fraseología usar una fórmula elástica, fluida, parecida a la del código suizo, aunque, naturalmente, este instituto extranjero funciona por la vía judicial. En cambio acá, al referirse a futuras normas reglamentarias, se alude a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, por la vía del Ministerio de Hacienda o algún derivado suyo, apareciera como organismo específico y más calificado para estimar el *plafond*, el máximo de valor, que tendría este bien familiar según las distintas zonas del país y sus diversas modalidades.

Este artículo 34 se vincula concretamente, como dije, con el artículo 350 del código suizo,

que dice así: «Los predios que tuvieren destino agrícola o industrial y las casas habitación con sus dependencias pueden ser constituidas en asilo de familia en las condiciones siguientes: el inmueble no será mayor de lo que requiera la empresa o el alojamiento de una familia. Las cargas que puedan gravarla y los otros bienes que tenga el propietario no se toman en cuenta. El propietario personalmente, o su familia, están obligados a explotar el inmueble o la industria a que está destinado o a habitar la casa habitación, salvo las excepciones que la autoridad competente pueda permitir, temporariamente y por justos motivos.»

También hay un antecedente mediato en el código brasileño, cuyo artículo 70 expresa: «Es permitido a los jefes de familia gestionar un predio para domicilio de ésta con la cláusula de quedar exenta de ejecución por deudas, salvo las que provinieran de impuestos relativos al mismo inmueble. Esta excepción durará mientras vivieren los cónyuges y hasta que los hijos alcancen su mayoría de edad.» Igualmente el artículo 167 del código italiano expresa: «Pueden ser constituidos en patrimonio familiar determinados bienes inmuebles o títulos de crédito. La constitución del patrimonio familiar importa la inalienabilidad de los bienes y el destino de los frutos al provecho de la familia.» La constitución puede ser hecha aún durante el matrimonio por uno o ambos cónyuges, por acto público o bien por un tercero, por acto público o por testamento.

El artículo 36 del proyecto, que describe lo que se entiende por familia, alude a que ésta está constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o, en defecto de ellos, por sus parientes colaterales hasta tercer grado inclusive, de consanguinidad. Pero se exige que convivan con el constituyente.

Este artículo está vinculado con el artículo 169 del código italiano, que expresa que el acto de constitución del patrimonio familiar debe ser inscrito si se refiere a bienes inmuebles.

El artículo 37 dice: «El bien de familia no podrá ser enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad del cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuere incapaz, sólo podrá autorizarse el gravamen cuando mediare causa grave o manifiesta utilidad para la familia.»

Aclaro que en este caso, el juez, el órgano jurisdiccional, tiene una potestad ilimitada para apreciar si se está o no se está en presencia de una causa grave.

El artículo 38 es de fundamental importancia. «El bien de familia —dice— no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes

constituídos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca.»

«Serán embargables —dice el artículo 39— los frutos que produzca el bien en cuanto no sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia. En ningún caso podrá afectar el embargo más del 50 % de los frutos.»

El artículo 37 reconoce su antecedente en el artículo 167 del código italiano, que expresa que el tribunal puede autorizar, en caso de necesidad, la enajenación de los bienes constitutivos del patrimonio familiar cuya propiedad pertenezca a uno de los cónyuges o a entrambos. Puede además autorizar la enajenación en caso de utilidad evidente, determinando el modo de reinvertir el precio. La ejecución de los frutos de los bienes constitutivos del patrimonio familiar no puede tener lugar por deudas si el acreedor sabía que se habían contraído con fines ajenos a las necesidades de la familia.

Además, expresa dicho código que el predio, en las condiciones expresadas, no podrá tener otro destino o ser enajenado sin consentimiento de los interesados o de sus representantes legales.

El texto del artículo 38 es original en el sentido de que ha sido logrado por la legislación argentina. Reconoce su antecedente completo en el proyecto del Poder Ejecutivo, de 1947, cuyo artículo 6º dice: «No se podrá enajenar o gravar el bien de familia si no media consentimiento unánime de los propietarios constituyentes. Si los propietarios fueran herederos del que constituyó el bien, se requerirá la conformidad del cónyuge supérstite y de la mitad por lo menos de aquéllos. Si el propietario constituyente fuera una persona casada y el bien fuera ganancial, se requerirá consentimiento del cónyuge.»

El artículo 70 del código brasileño se expresa en términos parecidos.

Por su parte, la ley francesa de 1909 expresa en su artículo 10 que el bien de familia, así como sus frutos, es inembargable, aun en el caso de quiebra o liquidación judicial. No existe más excepción que aquella que es en beneficio de los acreedores anteriores que han cumplido con las disposiciones precedentes para conservar el ejercicio de su derecho. No puede ser embargado o vendido con pacto de retroventa. Sin perjuicio de ello, los frutos podrán ser ejecutados para el pago: 1º) De deudas por gastos de justicia; 2º) De impuestos y de primas de seguro contra incendio; 3º) De deudas por alimentos.

El artículo 40 declara exento al bien de familia del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte, en todo el territorio de la Nación.

El artículo 41 expresa que el propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta propia el inmueble o

la industria en él existente, salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas. La locución «autoridad de aplicación» debe entenderse como la autoridad administrativa que en la reglamentación que se dicte se debe expresar con toda especificidad.

Después viene el artículo 42, relativo a la publicidad de este derecho, que es ineludible para constituir todo derecho real. Dice el artículo 42: la inscripción del «bien de familia» se gestionará, en jurisdicción nacional, ante la autoridad administrativa que establezca el Poder Ejecutivo nacional. En lo que atañe a inmuebles en las provincias, los poderes locales determinarán la autoridad que tendrá competencia para intervenir en la gestión.

El artículo 45 expresa que no podrá constituirse más que un solo bien de familia, y que cuando alguien resultase ser propietario único de dos o más bienes de familia deberá optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter, dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como bien de familia el constituido en primer término.

Todos los trámites —añade el artículo 46— y actos vinculados a la constitución e inscripción del bien de familia estarán exentos del impuesto de sellos, de derechos de oficina y de las tasas correspondientes al Registro de la Propiedad, tanto nacionales como provinciales.

Los artículos 47, 48 y 49, importan una novedad absoluta en esta institución en lo que se refiere al asesoramiento y a la colaboración que la autoridad administrativa está obligada a prestar.

Dice el artículo 47: La autoridad administrativa estará obligada a prestar a los interesados, gratuitamente, el asesoramiento y la colaboración necesarios para la realización de todos los trámites relacionados con la constitución e inscripción del «bien de familia». Si, ello no obstante, los interesados desearan la intervención de profesionales, los honorarios de éstos no podrán exceder, en conjunto, del uno por ciento de la valuación fiscal del inmueble para el pago de la contribución territorial.

Por su parte, el artículo 48 dispone que: en los juicios referentes a la transmisión hereditaria del bien de familia, los honorarios de los profesionales intervinientes no podrán superar al 3 % de la valuación fiscal, rigiéndose los demás bienes por los principios generales.

El artículo 49 establece el procedimiento para la desafectación del «bien de familia».

Como problema específico en esta materia podemos establecer que la autoridad competente para la desafectación del bien de familia es, en primer término, la administrativa, pero que puede ocurrirse a la autoridad judicial, o sea al juez de lo civil en turno, en el caso de un

incapaz o de un menor, para decidir en definitiva. Esto está suficientemente esclarecido en el artículo 50 que dice así: «Contra las resoluciones de la autoridad administrativa que, en el orden nacional, denieguen la inscripción del bien de familia o decidan controversias referentes a su desafectación, gravamen u otras gestiones previstas en esta ley, podrá recurrirse en relación ante el juez en lo civil en turno.»

De manera que se organizaría algo así como una primera instancia, magistratura que estaría radicada en el *a quo* administrativo y el *a quem* sería el juez en lo civil en turno.

Estos son los elementos de juicio que yo he querido reunir para que los señores diputados puedan decidir en definitiva acerca de este simpático instituto del bien de familia.

Los artículos 51 a 57 se refieren a un problema de derecho civil que no tiene relación directa con la constitución del bien de familia; pero en cambio sí puede tener esta vinculación cierta: que las causas de indivisión propenden a crear una mayor solidaridad en el instituto familiar.

Antes que nada debemos, a manera de profesión de fe científica, hacer nuestra la tesis del Código Civil argentino que explica la naturaleza jurídica de la propiedad siguiendo la clásica escuela de Demolombe con el instituto de la copropiedad, desechando las otras escuelas doctrinarias que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la copropiedad por la vía de la servidumbre, como las de Aubry y Rau, de Durantón, de Pardessus, sobre todo en Francia.

El artículo 51 dice expresamente: «Toda persona podrá imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios, por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.»

Este artículo contempla fundamentalmente tres supuestos de indivisión: en primer lugar la indivisión impuesta por el causante según el artículo 52, que acabo de leer, que modifica el artículo 3598 del Código Civil; en segundo término la indivisión pactada con los herederos, establecida en el artículo 52, que modifica los artículos 3452 y 2693 del Código Civil; y en tercer lugar, la indivisión impuesta por el cónyuge sobreviviente a los demás herederos.

El artículo 52 dice así: «Los herederos podrán convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes

entre los copartícipes. Si hubiere herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes legales no tendrá efecto hasta la homologación judicial. Estos convenios podrán renovarse al término del lapso establecido. Cualquiera de los herederos podrá pedir la división, antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas justificadas.»

Por su parte, el artículo 53 dice: «Cuando en el acervo hereditario existiere un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole tal que constituya una unidad económica, el cónyuge supérstite que lo hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien por un término máximo de diez años. A instancias de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la decisión. Durante la indivisión, la administración del establecimiento competará al cónyuge sobreviviente. Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos.»

Cuando en el texto del proyecto se habla de causa grave, se desea expresar de manera concreta que es el juez el que tiene facultades para decidir en cada caso si se está o no en presencia de una causal suficiente como para superar esta cláusula que impone la indivisión.

Además, se expresa en el artículo 56 que en los casos de indivisión de bienes hereditarios situados en la Capital Federal o territorios nacionales, la Dirección General Impositiva, a pedido de los interesados, acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin interés, con o sin fianza, los que en ningún caso excederán del término fijado a la indivisión ni de cinco años si dicho término fuera mayor. Si la división de la herencia tuviere lugar antes de que transcurran los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y el saldo de impuesto que se adeudare deberá ingresar dentro del mes siguiente a aquel en el cual se hubiere producido la división. El Poder Ejecutivo nacional gestionará de los gobiernos provinciales el otorgamiento de franquicias análogas a las establecidas en este artículo.

Por último, se expresa en el artículo 57 que la presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogadas todas las disposiciones que y en cuanto se opusieren a ella.

Hubiera deseado referirme a otros aspectos de la ley, al interesante articulado que alude a la represión de los menores, como así también a aquel otro instituto del derecho civil que

apunta a la ausencia con presunción de fallecimiento. Lamentablemente, la exigencia de la hora me impide hacerlo, pero reconozco que este asunto ha sido suficientemente esclarecido por el miembro informante de la comisión, señor diputado por Mendoza, y espero también que el ilustrado diputado por Córdoba doctor Bustos Fierro habrá de explicitarse con suficiencia acerca de los temas de mi alusión.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don José V. Tesorieri.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor presidente: para terminar, quiero dejar establecido que con la incorporación del bien de familia, que de ahora en más habrá de formar parte de la estructura legal del país, la revolución nacional, superando las ásperas peripecias del proceso político, mantiene incólume su preocupación por asegurar para la República los intereses superiores y permanentes de la patria. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Weidmann. — Señor presidente: dentro del mosaico caleidoscópico de iniciativas contenidas en el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo nacional ha sometido a consideración del Honorable Congreso, cábeme ocuparme —en razón de la división del trabajo— del aspecto relacionado con la institución del bien de familia.

Ella es una verdadera avanzada social que configura uno de los aspectos típicos de la intervención del Estado en la vida de la comunidad, encaminada a la protección del individuo, a la justicia social y a la obtención de la seguridad para todos los habitantes del país.

La familia, como bien se ha dicho, en las comunidades cristianas es la célula primaria y el basamento de la sociedad. Todo lo que se haga para fortalecer sus vínculos morales y espirituales, para afianzarla en su basamento económico —que es la base indisputable de su perfeccionamiento moral—, bienvenido sea, porque contribuye a consolidar la estructura de la comunidad social y, a la vez, a asegurar los fundamentos sobre los que descansa el progreso espiritual y moral de la Nación.

El bien de familia contempla la necesidad de asegurar al núcleo familiar vivienda y el aprovisionamiento del sustento necesario para subvenir a sus necesidades. Es una adaptación de la propiedad que se funda precisamente en el concepto de que ella cumple una función social. Todas las restricciones que, para hacer factible la acción de este instituto, se imponen a la disponibilidad, estableciendo una especie de inmovilización comercial, a mérito de asegurar su inembargabilidad, su inejecutabilidad y su

indivisibilidad, y la restricción severa a la facultad de gravar el bien —en atención a que el gravamen es un principio de enajenación—, están fundadas en la necesidad de que el bien afectado preste ese servicio a la comunidad, consistente en asegurar al núcleo familiar la vivienda y el aprovisionamiento de lo que él necesita para satisfacer sus necesidades.

De ahí que se funda en las concepciones que le asignan a la propiedad una función social.

Es en base a esta concepción que todas las restricciones que son necesarias imponer a la libertad individual del titular y de los beneficiarios de esta institución, están totalmente justificadas por la ulterior finalidad que se persigue.

Hemos pasado rápida revista a la ley de colonización y a las distintas escuelas que dividen a los estudiosos en materia de propiedad, llegando a la conclusión de que es esa orientación social a que me he referido la que determina la adopción de esta institución que también llena una finalidad política estatal, como ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica cuando se creó la *homestead* federal, o sea la llamada ley de colonización protegida. Ella tenía por objeto el hacer posible la colonización de tierras difíciles por su aridez y por su alejamiento de los grandes centros de población en contraposición al otro tipo de *homestead* privado, que es el que reconoce como origen una afectación hecha por el titular del bien.

El asentamiento del productor en la tierra que cultiva eleva su moralidad y evita las crisis agrarias, que con tanta frecuencia se producen.

En lo que respecta a la vivienda, en el caso de los inmuebles urbanos, también está totalmente justificada la institución, porque tiende a llenar una necesidad de orden primordialísimo y a poner a cubierto la comunidad familiar de todas las contingencias adversas que el devenir, en su evolución, le depara. Las restricciones que puedan traer al crédito del titular de un bien de esta naturaleza todas estas condiciones de indisponibilidad que rodean la afectación, están contrapesadas con creces por el beneficio que consiguientemente se obtiene.

Para que esta institución sea factible reconoce como necesidad que el Estado se haga cargo de su papel en la misión de proteger y favorecer el desarrollo y el asentamiento de la comunidad familiar.

En cuanto al aspecto del crédito, reitero lo que ya dije en otros debates en esta materia, en el sentido de que no debe estar orientado hacia una finalidad comercial o financiera, sino que debe tender a un propósito económico social, de manera tal que el productor rural que no pueda, por esas circunstancias, disponer del crédito requerido para las necesidades de su explotación, disponga de la garantía de que el Estado acudirá a solventar esas expensas en atención a la

elevada finalidad social que se persigue con este instituto.

A la vez, la unidad económica de explotación que configura el *homestead*, dentro de mi concepto —que he de desarrollar a renglón seguido—, constituye una aspiración de la comunidad porque es el basamento de su propia existencia; es un medio de contener el éxodo rural, y tal como se dijera en Francia por parte de los miembros informantes en el Senado y en la Cámara de Diputados durante la discusión de la ley sancionada en el año 1909, el desmembramiento de la propiedad rural y la falta de estabilidad por parte de la familia, son los factores primordiales del éxodo hacia las grandes ciudades. De manera tal que la reconstrucción de esa propiedad y el afincamiento de la familia son las bases sobre las que cabe desarrollar todo el plan tendiente a colonizar el campo, a aumentar la producción agropecuaria y a evitar el éxodo hacia las grandes ciudades y, quizá, a conseguir también que mucha gente que ha emigrado a los centros urbanos, llevada por un falso espejismo, vuelva a la tarea del campo en la que hacen falta muchos brazos.

En el campo hay una gran riqueza inmovilizada que espera, para bien de toda la Nación, que se incorpore el brazo del hombre, poniendo todo su afán y su inteligencia en la tarea de acrecentar la producción de los bienes que la tierra brinda con tal generosidad y que tanta falta hacen a la economía del país, hoy resentida por la falta de elementos para subvenir a las necesidades alimenticias de la población y a las exigencias del intercambio internacional, a través del cual el país puede obtener aquellos bienes de capital, equipos industriales y materias primas indispensables para alcanzar un mayor grado de progreso y mantener en actividad resortes vitales de la vida nacional.

Voy a prescindir —porque el tiempo de que dispongo me lo impone— de remitirme al análisis de la legislación comparada y de los antecedentes nacionales en la materia, muy interesantes por cierto, que pueden ilustrar el criterio del legislador, mostrándonos cómo ya hace muchos años existía una evidente preocupación por subvenir a esta exigencia del núcleo familiar. Y voy a hacer, en la medida que el tiempo me lo permite, un análisis de este proyecto caleidoscópico en lo que va de los artículos 34 al 50, que se refieren específicamente al bien de familia.

El artículo 34 comienza por sentar el concepto del bien de familia, y habla de un inmueble urbano o rural de propiedad de la persona que desee constituirlo. Refiriéndome al inmueble rural en primer término, pregunto por qué se habla de un solo inmueble, si el crecimiento de la familia puede exigir imperativamente acrecentar esa unidad con la incorporación de nuevas parcelas que en conjunto, totalicen una

unidad económica o una unidad de explotación, concepto racional que en esta materia siguen la ley de colonización, la ley de régimen de tierras fiscales, y la ley de arrendamientos y aparcerías rurales.

Otras legislaciones contemplan el caso de que cuando por la evolución lógica de la familia el bien con que originariamente se constituyó el patrimonio familiar resulte pequeño e insuficiente, puedan incorporarse por sucesivas compras nuevas fracciones de tierra que complementen la capacidad de rendimiento del bien que se designó. Lo mismo cabría decir del inmueble urbano destinado a habitación o vivienda.

Continúa diciendo el artículo que es bien de familia aquel cuyo valor no excede las necesidades de sustento y vivienda del titular y su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente.

Ya hemos apuntado nuestro disenso con que la legislación delegue en forma absoluta al Poder Ejecutivo la potestad de establecer las normas que regirán la determinación de ese valor. Precisamente, la variedad de circunstancias que se presentan para hacer esa determinación, exigía que el legislador fijara normas generales que luego la reglamentación adaptaría a cada caso particular.

No estoy de acuerdo con que el valor sea el módulo para determinar las necesidades de sustento y vivienda de la familia. Esta es una base totalmente falsa, tan insegura y tan ineficaz al logro del objetivo que se persigue, como la que figuraba en las leyes anteriores y en muchos proyectos de leyes que se cuentan entre nuestros antecedentes y que establecían una cantidad en dinero. Con este proyecto estamos en la misma situación de inhabilidad para resolver el problema.

A mi entender el valor podrá alguna vez coincidir con la capacidad locativa del inmueble urbano para resolver las necesidades de la familia, o con el rendimiento económico del inmueble rural, o su aptitud para constituir una unidad económica; pero éstas son coincidencias meramente casuales. El concepto que debe regir en esta materia en cuanto a los inmuebles urbanos, debe estar referido al espacio habitable para subvenir a las necesidades del núcleo familiar, con prescindencia absoluta del valor, que es un factor que no juega en esta determinación ningún papel decisivo.

En cuanto al inmueble rural, la norma de apreciación para establecer si constituye un bien de familia, debe ser la misma de la ley de arrendamientos rurales y aparcerías, artículo 30 del reglamento general; de la ley de régimen de la tierra fiscal, número 13.995, artículo 49; y de la ley de colonización que la Cámara sancionó el viernes pasado, artículo 21, apartado 2º.

El concepto es que se entiende por unidad económica de explotación todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación es trabajado por una familia agraria que aporta la mayor parte del trabajo necesario y permite subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa.

Ateniéndonos al texto literal del proyecto, pareciera que al hablar de sustento se refiere a una unidad económica rural que alcanzara nada más que para cubrir las necesidades de alimentación de la familia. Pero ése no es el concepto del *homestead* rural de la colonización protegida de otros países que se han adelantado a nuestras realizaciones; ni tampoco es el concepto que impera en la propia ley de colonización sancionada recientemente, en la cual, sin decirlo en forma explícita, se establece un conjunto de disposiciones que configura casi exactamente el *homestead* rural.

El llamado predio de colonización en la unidad económica adjudicada dentro del plan establecido por esta ley, es inembargable e inejecutable por imperio del artículo 60. Por el inciso a) del artículo 61, es indivisible en el tiempo y en el espacio; por el inciso b) del mismo artículo, no puede su titular constituir derechos reales sin el consentimiento del instituto colonizador, en este caso del Banco de la Nación; y por el inciso c), tampoco puede transmitir o enajenar el dominio a terceros sin ese recaudo. Y el artículo 62 expresa: las transmisiones de dominio contrarias a las disposiciones de esta ley, estarán afectadas de nulidad absoluta.

El artículo 64 prescribe, para el caso de transmisión hereditaria, la indivisibilidad de la unidad económica; que el banco designará, en defecto de acuerdo, el heredero que continuará como titular del predio.

Finalmente, el artículo 77 establece una exención impositiva referente al impuesto inmobiliario, por el término de cinco años, a partir de la fecha de la adjudicación del predio de colonización.

Aparte de estas características, hay una serie de preceptos concernientes al precio de venta de la unidad de colonización y a la forma de pago, vinculándola con el rendimiento de la producción y adversidades o contingencias climáticas que imposibiliten al productor para satisfacer el pago de la cuota o del canon anual en la fecha preestablecida; de la inembargabilidad que establece el artículo 40, en su inciso e); de los elementos y animales de trabajo, maquinarias, muebles, enseres, ropa y útiles domésticos, rodados, semillas y otros bienes necesarios para la explotación del predio, dentro de los límites que se fijan en la reglamentación.

Entiendo, señor presidente, que por la forma como el artículo 34 de este proyecto caracteriza al bien de familia, se pone en contradicción con

la ley de colonización y con otras disposiciones legales que rigen la materia. Entiendo que en lugar de hablarse del valor se debe hacer referencia a los medios de determinación que dejo señalados.

El artículo 36 define lo que se entiende por familia a los efectos de esta ley, y empieza diciéndonos que es «la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes y ascendientes o hijos adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente».

Veo, señor presidente, que en la familia que esta ley caracteriza, a los fines de considerarla beneficiaria de la afectación de un inmueble urbano o rural, hay elementos que la integran, en caso de transmisión *mortis causa* por el constituyente, que se excluyen, porque la presencia de unos provoca la eliminación de los otros en el orden hereditario. Es el caso de los ascendientes y descendientes, en que los segundos excluyen a los primeros; o el de los hijos adoptivos. Sabemos que no puede haber adopción cuando hay hijos legítimos o naturales reconocidos. La ley, pues, no es clara, y encierra una grave contradicción con el régimen sucesorio instituido por nuestro Código Civil y con la misma ley de adopción.

El artículo 37 es el que habla de la indisponibilidad prohibiendo los legados y las mejoras testamentarias. Este artículo nos está indicando a todas luces la preocupación por mantener el orden hereditario del Código Civil. Pero ninguno de los dos artículos a que me acabo de referir resuelve el problema, que dejo planteado, de la concurrencia simultánea de presuntos herederos, de los cuales unos excluyen a los otros.

El artículo 38, que habla de la inembargabilidad e inejecutabilidad del bien de familia, trae la excepción proveniente de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble.

Entiendo, señor presidente, que la voracidad del fisco debe detenerse ante una situación de respeto a algo que hace a la esencia de la solidez de la comunidad social, como es el bien de familia, y que sólo tratándose de contribuciones de mejoras para pagar obras públicas que benefician al inmueble o de tasas retributivas de servicios, se justificaría el embargo, pero nunca la ejecución del bien. La ejecución debe hacerse solamente sobre los frutos del bien y en la medida en que ello no afecte la subsistencia del núcleo familiar. En este asunto, el Poder Ejecutivo está en contra de las disposiciones del tan mentado Plan Quinquenal, ley 14.184, que en el capítulo XXII, política impositiva, objetivo especial E.11, habla de que esos impuestos serán suprimidos o reducidos. Ahora nos encontramos que en el primer caso de aplicación de la nueva política social a la constitución del bien de familia, se establece la

exención de la inembargabilidad o inejecutabilidad a favor del fisco, para el cobro de los tributos.

El artículo 39 del proyecto dice que serán embargables los frutos que produzca el bien en cuanto no sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia. Pero no establece el término de tiempo, lo que es de una elasticidad que llega a la arbitrariedad. Debió haberse dicho, como cuando se sancionó la reforma de la ley 12.636, que el beneficio de inembargabilidad contemplaba los frutos necesarios a la subsistencia de la familia durante el término de un año.

El artículo 40 se refiere a la exención del impuesto a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte, en todo el territorio de la Nación. Nosotros decimos categóricamente que estamos totalmente de acuerdo con la exención impositiva al bien de familia en todos los aspectos congruentes con la equidad y con la posibilidad de prestación de algunos servicios públicos que beneficien al inmueble o a sus titulares; pero no creemos que el medio de llegar a esta exención sea el de avasallar las facultades de las provincias, las que conservan todo el poder no delegado a la Nación y entre ellos, los poderes impositivos que hacen a la esencia de su soberanía, de su economía. Sin independencia económica, como dijéramos días pasados, el federalismo y la autonomía de las provincias se convierten en un mito, porque quedan supeditados a la voluntad del poder central de la República. Creemos que debe llegarse a conseguir esta finalidad mediante la formalización de convenios con las provincias, en virtud de los cuales éstas accedan a eximir al bien de familia del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Pero el señor miembro informante de la mayoría de la comisión, diputado por Mendoza, ha esbozado una razón que vale la pena analizar aunque sea brevemente. Habló el señor diputado González de que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes conspiraba contra la existencia del bien familiar. Yo confieso mi asombro ante esta manifestación de parte del señor diputado por Mendoza cuando oímos hablar continuamente de la contemplación que el Estado tiene con los contribuyentes y de la equidad de los impuestos.

Esto será exacto cuando el impuesto a la transmisión gratuita de bienes sea confiscatorio, en cuyo caso el impuesto sería abiertamente inconstitucional. Pero extraña la preocupación del Poder Ejecutivo por este gravamen que aplican las provincias en sus jurisdicciones, cuando en el caso de impuestos nacionales no vacila en establecer la posibilidad de ejecutar el bien de familia, para que el fisco nacional haga efectivo el cobro de los respectivos impuestos.

El artículo 41 habla de la obligación de habitar o explotar por cuenta propia el inmueble o la industria en él existente por el propietario o su familia, pero no aclara en ninguna parte si esta obligación comprende colectivamente a todos los integrantes del núcleo familiar o si basta —me refiero al caso especial de un inmueble rural cuya explotación requiere el concurso de la mano de obra de varias personas— con que haya un número suficiente de integrantes de ese núcleo como para subvenir las exigencias de mano de obra de la explotación. Sería inconcebible que por la defección de uno o dos integrantes del núcleo familiar, se privara al resto, que a justo título pueda disfrutar de la protección legal, de la posibilidad de continuar beneficiándose con la subsistencia del bien de familia.

El artículo 42 es motivo de una discrepancia fundamental de nuestro bloque. Atribuye a una autoridad administrativa que determine el Poder Ejecutivo nacional dentro de su jurisdicción, la inscripción y todo lo atinente a la gestión del bien familiar. Entendemos que es una delegación de poderes que está en pugna con la Constitución Nacional y que, por ende, esta disposición es totalmente inconstitucional.

El anteproyecto de Bibiloni y el de la Comisión Reformadora del Código Civil establece la competencia judicial. Las legislaciones suiza, francesa e italiana, entre otras, también atribuyen a los jueces la competencia exclusiva en materia tan delicada.

Nosotros creemos que el artículo 95 de la Constitución, al decir que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y leyes de la Nación, con la reserva hecha por el inciso 11 del artículo 68; que el artículo 89, al decir que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación; y que el artículo 90, al decir que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, impiden en forma absoluta que una materia tan delicada pueda ser deferida a un órgano administrativo.

La disposición implica una invasión de poderes y entraña, por consecuencia, el vicio de inconstitucionalidad.

La familia es una institución clásica del derecho civil, legislada en el Código Civil. La Constitución, en su artículo 68, inciso 11, defiende la aplicación del Código Civil a los tribunales de la Nación y de las provincias, según que las personas o las cosas caigan en sus respectivas jurisdicciones. No se concibe cómo un instituto del derecho civil como es la familia —el problema del bien de familia está directamente

vinculado con su constitución y su supervivencia—, sea atribuido a una autoridad administrativa.

Por otra parte, hay casos en que se da intervención a la autoridad judicial. Por ejemplo, el artículo 44 contempla el caso de que el bien de familia se hubiere constituido por disposiciones testamentarias y nos dice que el juez de la sucesión a pedido del cónyuge o, en su defecto, de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro inmobiliario respectivo, siempre que fuera procedente; y si entre los herederos hubiere incapaces, la inscripción podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez.

Al hablar de la desafectación, otra materia de suma importancia que no puede estar deferida a un órgano administrativo, nos dice el inciso b) del artículo 49: «Cuando el «bien de familia» se hubiere constituido por testamento, a solicitud de la mayoría de los herederos, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión o la autoridad competente resolverá lo que sea más conveniente para el interés familiar.»

No es posible que la autoridad administrativa sea la competente en esta disyuntiva de la última parte del inciso b) del artículo 49 del proyecto; que sea el órgano administrativo el que entre a juzgar cuando hay de por medio incapaces. Todo el régimen de nuestro Código Civil relativo a la incapacidad requiere, bajo pena de nulidad absoluta, la intervención del ministerio público (artículos 493 y 494 del Código Civil). De modo que no se concibe que un órgano administrativo entre a juzgar y a decidir de verdaderos litigios en los que están involucrados problemas que hacen a la capacidad de los integrantes de la familia, y prescindiendo de aquel órgano judicial.

Termino, señor presidente, ante el apremio del tiempo, diciendo que tampoco estamos de acuerdo con el avance que este proyecto importa sobre las potestades de las provincias.

Los artículos 47 y 48 del proyecto hablan de los aranceles que corresponderán a los profesionales intervinientes. Esta es una materia deferida por nuestro sistema institucional a las provincias dentro de la órbita de sus facultades.

Nosotros hubiéramos querido hacer un estudio exhaustivo de todos los factores que juegan alrededor de este importantísimo asunto. Es una institución loable y quisiéramos verla incorporada a nuestro acervo institucional con todas las características que le aseguren su vigencia, porque no quisiéramos ver repetido el caso de la ley Costa, que jamás tuvo aplicación.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

Sr. Weidmann. — Quisiéramos que fuera un instrumento eficaz para asegurar a la familia la disposición de un ámbito habitable; para impulsar la colonización y estabilizar la familia rural en el medio campesino, dándole un estímulo para incrementar la producción agrícola. Pero por encima de todos estos conceptos y refiriéndome a la protección y defensa del núcleo familiar como base de la comunidad social, decimos que nuestra concepción no se reduce estrictamente a contemplar los aspectos económicos y materiales. Quiero repetir los postulados contenidos en nuestra profesión de fe doctrinaria para remarcar así nuestro concepto y la posición de nuestro partido: «El radicalismo es la corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino, de la auténtica realización de su vida plena en el cultivo de sus bienes morales y en la profesión de los grandes ideales surgidos de su entraña.

«En el proceso transformador que vive el mundo, transfórmase también el Estado, pero el radicalismo, centrado en su preocupación por el hombre, no puede invertir los fines del Estado, cuyo intervencionismo sólo puede referirse a la administración de las cosas y a los derechos patrimoniales, y no a los derechos del espíritu, morada de la libertad humana.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora delegada por Chubut.

Sra. Escardó de Colombo Berra. — Señor presidente: la ley que estamos considerando comprende tres tópicos: los delitos de los menores, la ausencia en función legal y el bien de familia.

Yo quiero referirme en especial a los artículos 34 a 58, que tratan del «bien de familia».

No por repetido y bien conocido tiene menos valor el concepto de que la familia es la célula de la sociedad, la columna donde se asienta con base firme toda la organización social.

Formada la familia por los lazos del afecto, cumple aspiraciones supremas del hombre y de la mujer, ya que no sólo satisface las necesidades materiales, sino que convierte en realidades el sentimiento de la supervivencia humana, al querer prolongar nuestra vida en nuestros hijos. Y como si eso fuera poco, es base de todos nuestros afanes y nuestros desvelos, de nuestras preocupaciones y de nuestras aspiraciones.

¡Cuántas cosas se hacen por los hijos, y cuántas cosas no se hacen por ellos! ¡Cuántas hace un hombre por una mujer, y cuántas no hace por afecto a ella!

Y en esta escala ascendente de sentimientos, cuál es sino la madre la figura cumbre de toda la vida afectiva de los seres humanos, y cómo es de sublime su afecto y heroica su vida por sencilla que sea y sencillos los detalles de sus múltiples desvelos y grandiosos los más débiles momentos de adhesión al hijo. Junto a

esa figura no es menos noble y generosa la del padre, que en una comunión de sentimientos y de iguales anhelos y aspiraciones rodean a ese ser indefenso en su comienzo y débil siempre, en el enfoque del cariño de sus padres, que desean para él todo lo mejor y todo lo más bueno. Por lo menos, así lo entienden los padres de buenos sentimientos.

Cimentado por el afecto y la comprensión, el hogar sigue su ruta luchando por la vida con todos los altibajos que éstos representan, y las dificultades más grandes son generalmente las de la salud y de la economía familiar.

Siendo la vivienda, la casa habitación, el centro físico y material donde se alberga y desarrolla la vida familiar, todo lo que la legislación prevea o determine para su mayor estabilidad, será siempre lo mejor.

Por eso esta ley al referirse en sus artículos 34 a 58 al bien de familia, introduce una sensación de seguridad familiar en esta Nueva Argentina, que es un índice más de lo que el peronismo lucha por la felicidad de los habitantes de esta patria.

Es sumamente interesante el análisis detenido de estos artículos. En primer lugar, ya la definición «bien de familia» implica en sí lo bueno, lo benéfico, lo saludable, lo que no trae pena, ya que en su definición está la palabra «bien», y luego expresa claramente que es una propiedad cuyo valor no exceda a las necesidades de sustento y vivienda de la familia; es decir, aquello que es primordial en el desarrollo material de la vida de los seres: la casa, el hogar y el alimento. El bien queda, pues, circunscrito al concepto de utilidad estricta, desprovisto de todo sentido especulativo.

El artículo 36 define con claridad los miembros de esa familia: los esposos, base necesaria de toda organización humana, y luego los hijos, no sólo los propios sino los adoptivos también —otra ley amparadora del peronismo, que proporciona un hogar a aquel que lo perdió o lo desconoció—, y luego los ascendientes.

Nadie como la inolvidable ausente tuvo en nuestro país una preocupación mayor por los ancianos, por los que fueron olvidados o reclusos sin esperanzas. Si bien los niños son los privilegiados, los ancianos son los amparados, protegidos, respetados y considerados por nuestro movimiento.

Aun más: establece la persistencia del bien de familia para parientes colaterales hasta tercer grado, significando con ello que si convive en un hogar es parte integrante de él y, por lo tanto, con todos los derechos.

El bien de familia no podrá ser enajenado ni legado, ni gravado sin el permiso del cónyuge, o sea, que se trata de que se mantenga lo más íntegro y limpio que pueda ser posible, en el eterno concepto del hogar paterno, de ese dulce hogar familiar que sugiere nuestros más caros

recuerdos y despierta siempre al evocarlos nuestros más emocionados momentos. Aspiración del ser que sacude en sus embates la vida, y que descarta, como la famosa poesía, volver al dulce hogar, al regazo de la madre, al cuento de la abuela o a la caricia del hijo. Y aun el concepto es más amparador todavía, ya que protege este bien de los posibles errores humanos, pasiones o vicios, evitando los embargos por deudas, generalmente producto de conductas desordenadas.

Los artículos de esta ley que se refieren al bien de familia tienen un solo objeto: mantener incólume, libre y seguro el hogar familiar en su concepto material, para que el espíritu de la familia feliz reine en él, sin zozobras ni inquietudes.

La Nueva Argentina, de Juan Perón y de Eva Perón, va cimentando con su legislación moderna, meditada y generosa, la felicidad de un pueblo en marcha hacia seguros destinos. Se dijo, y se dijo muy bien, que Eva Perón es la llama viva del peronismo; el espíritu de aquella ausente está hoy, más que nunca, presente en el devenir de nuestros días, y ese espíritu, cuya esencia fué darse sin pausa, da sus frutos. Dos de sus grandes preocupaciones, los niños y los ancianos, encuentran en lo que hoy consideramos, el bien de familia, una seguridad más para sus vidas. Los primeros para asegurarles un porvenir libre de preocupaciones materiales, los segundos para que terminen sus días tranquilos al calor de los afectos de la familia que supieron formar.

Sabemos todos que un ser feliz fuera del hogar lo es si disfruta de paz y bienestar en su casa y que su rendimiento en el trabajo está íntimamente vinculado a ello. Por eso, por iniciativa de Eva Perón se levantaron los cientos de viviendas que se siguen levantando, y que de casas de alquiler pasaron a ser propiedad de sus ocupantes. Así es como la legislación actual va, paso a paso, cimentando la felicidad del pueblo.

Por su iniciativa, mejoraron las condiciones de trabajo de los obreros, para lograr el bienestar de la familia y se dignificó a la mujer. Y hoy, ese espíritu siempre presente quiere que el matrimonio feliz, los hijos y los padres, y hasta los parientes, tengan en la seguridad familiar la base de su felicidad.

Por eso, es grande nuestro movimiento, porque legisla para cimentar, orienta el país hacia rumbos seguros. Por eso es ésta la era que vivimos en la Argentina, la bien llamada Nueva Argentina de Juan Perón y de Eva Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Latella Frías. — Yo quiero sentar como premisa inicial de mi exposición el siguiente concepto: así como en el orden físico no se pueden violar las leyes de la naturaleza, así también en el orden social no se puede torcer

impunemente la orientación jurídica de un pueblo.

Pienso ante este proyecto de ley, que no es sino una reedición de toda la norma proyectista de los asesores del Poder Ejecutivo de la Nación, que ellos se introducen por la ventana de los códigos o de las leyes, picotean distintas disposiciones del derecho positivo argentino, traen la inconnexión, la falta de homogeneidad y de continuidad jurídica en todas las disposiciones y leyes que se están votando, y nos queda a nosotros la certidumbre de que ese derecho positivo argentino no tendrá en el futuro una fuente suficiente y capaz de interpretación, en su aplicación sucesiva.

Ya no puede hoy argüirse la interpretación de la ley por la mente del legislador sino por la sistemática jurídica, y hay momentos en la vida de los pueblos en que la época determina la sistemática de la ley. Vale decir que en ciertos momentos y en determinados períodos de la vida y el gobierno de los pueblos, se puede caracterizar sintomáticamente cómo es la ley juzgando cómo es el momento social y cuál es la orientación del gobierno.

Así, si encontramos en un período de la historia de un pueblo un momento en que el derecho desaparece, en que las garantías son mera ficción en la vida social o individual, en que reina el absolutismo, la arbitrariedad y el totalitarismo, tendremos una contextura jurídica de ese tipo, que trata no solamente de afianzar el poder absolutista y arbitrario, sino también de justificarlo. Por el contrario, si en un momento determinado de la vida social se practican las leyes y la armonía democrática y liberal de los pueblos libres, tendremos que decir que esa legislación, que surge en ese momento de la vida del pueblo, es amplia y liberal, progresista y humana.

Hago este planteamiento inicial porque estamos observando continuamente cómo se efectúan incursiones en el contenido de ese monumento de la vida jurídica del país, en las fuentes primarias de nuestro derecho, ya sea público o político, emanadas de la gloriosa Constitución de 1853. También observamos incursiones al Código Civil, obra de aquel ilustre hijo de Córdoba, tan versado como ningún otro en la ciencia de lo jurídico, que construyó el monumento imperecedero que no han podido reemplazar todavía las generaciones posteriores a 1870. Solamente por vías de incursión, entrando por la ventana y no por la puerta amplia de su reforma total, estamos viendo que se está paulatinamente tergiversando y disminuyendo el valor de algunas disposiciones fundamentales de su estructura. Se están incorporando disposiciones contradictorias con el resto de la contextura y sistemática general del código de Vélez Sársfield, que no podrá ser interpretado por los jueces del futuro en forma armó-

nica, porque se le infiltran e injertan normas contradictorias que derogan parte de las disposiciones, y cuando quedan vigentes otras en franca contradicción con las que se introducen.

La ley que estamos considerando es un aspecto de este todo jurídico que se está dando al país en forma incoherente y arbitraria; va a determinar la incertidumbre del derecho o su negación, en lugar de llegar a las generaciones futuras lo que debió ser una continuidad histórico-jurídica del país; lo que fué la fuente del 53 para la interpretación del derecho público, político, y el código, para el derecho privado.

Ahora nos encontramos con que esta ley de distinto aspecto, de distinta índole, unas veces de derecho público y otras de derecho privado, de procedimientos, de derecho penal o civil, crea en este momento de la vida argentina una especie de revisionismo jurídico, semejante a ese otro intento de revisionismo histórico que ya fracasó y que quería nada menos que reivindicar ante el escenario de la vida argentina el espectro sangriento de la tiranía de Rosas, que en algún momento y por las circunstancias actuales, pudo haber tenido eco en la conciencia argentina. Sin embargo, y a pesar de todo, el repudio general ha determinado el más rotundo fracaso de esa intencional indebida en la relación colectiva, política y social del pueblo argentino.

Este revisionismo jurídico nos lleva a distintas consideraciones y posturas en cuanto a las disposiciones fundamentales de nuestro derecho positivo. Y todas de resultado falso y negativo.

Este despacho no introduce ninguna mejora y no trae innovaciones de jerarquía jurídica.

¿Qué ventajas representa esta continuidad incoherente de disposiciones, no digo para el acervo jurídico del país, sino para la aplicación práctica de la ley en el devenir de la vida orgánica y social de la Nación?

Nosotros, por medio de las exposiciones de los señores diputados Perette y Weidmann, hemos dado nuestra opinión. Muchas de las situaciones que contempla esta ley ya están consideradas en códigos anteriores, como en el penal, por ejemplo; pero hay disposiciones en esta ley, que se presenta como una innovación y un adelanto en el proceso jurídico de la Nación y que resultan una vuelta atrás; y no contemplan, además, instituciones modernas que ya están legisladas y que pueden, en consecuencia, mantenerse y consagrarse en el derecho positivo, y que rigen en algunos Estados de la República. Me refiero, por ejemplo, al asunto que tocó con toda suficiencia el señor diputado Perette, cuando dijo que al tratarse un proyecto que, como el que estamos considerando, contempla la situación de los menores ante los tribunales de justicia, debe empezarse por la creación de los tribunales especiales con ese objeto.

A este respecto, puedo decir —reivindicando para Córdoba y para su gobierno radical el patrimonio de la iniciativa— que en 1939 se dictó el Código de Procedimiento en lo Penal vigente en aquella provincia, código que constituye un avance en el derecho positivo procesal de la República, que consagra la oralidad, ejemplo y modelo de muchas otras instituciones legales de este carácter en el país. En la exposición de motivos hecha por un jurisconsulto de la talla del doctor Sebastián Soler, se señalaba como una novedad en ese momento —año 1939— la creación de los tribunales de menores con un concepto social y humano digno de apreciación. Decía en la exposición de motivos el jurista citado: «Dando mayor desenvolvimiento a la idea que la referida ley italiana admite con timidez, por cuanto en ésta el tribunal se integra con dos magistrados y un psiquiatra, propugnamos nosotros uno compuesto por el juez de menores, un médico y un pedagogo. El tribunal superior formará anualmente, según se dispondrá en las reformas de la ley orgánica, una doble lista de médicos y maestros —sin distinción de sexos— de las cuales los jueces de menores se servirán para llamar en cada caso, por turno, a las personas que deben intervenir en las audiencias del juicio.»

En los artículos 433 a 440 del mencionado código están perfectamente legislados los juicios especiales, los juicios de menores, el procedimiento, la forma de resolución y, sobre todo, las medidas de protección, seguridad, previsión y educación de los menores.

El contenido de estas disposiciones que traen la ley procesal de Córdoba y también con analogía la legislación de otras provincias, no ha sido contemplado en ningún momento en el proyecto que estamos considerando, de tal modo, que queda librada la dilucidación de la contienda judicial de los menores, a los mismos jueces que con idénticas modalidades jurídicas entienden en los juicios de los mayores.

En lo relativo a la prevención y al aislamiento de los menores en lugares adecuados, el país no cuenta con los medios necesarios para poner en vigencia las medidas que se propician.

En otro orden de cosas me voy a referir al contenido del artículo 15 y a la expresión que en el mismo se utiliza. Dice el artículo: «cuando una persona hubiera desaparecido del lugar de su domicilio o residencia...», etcétera. Técnicamente, nos parece más adecuada la expresión «ausencia», porque se ha suprimido en el proyecto una hipótesis que figura en el artículo 60 del proyecto de la comisión de 1936, donde ilustres juristas del país hicieron consideraciones de orden legal respecto al texto que consideramos. En el citado artículo se decía: «Procederá también el nombramiento de curador, aun conocido el actual paradero del ausente, si

hubiere urgencia y éste se hallare en la imposibilidad de proveer al cuidado de sus bienes.»

El artículo 15 del despacho sólo se pone en el supuesto de que no se conozca el paradero de la persona, pero puede haber conocimiento y sin embargo existir imposibilidad de la persona para llegar al país a fin de atender la administración de sus bienes, por causas ajenas a su voluntad, como ha ocurrido, por ejemplo, durante las últimas guerras mundiales.

El artículo 17 podemos observarlo diciendo que la enumeración que en el mismo se hace es incompleta. Cuando se menciona a «toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente», sólo se ha recogido uno de los supuestos previstos por el artículo 61 que proyectó la comisión de 1936. Estrictamente, no se ha previsto la situación del cónyuge, dado que los bienes abandonados pueden no ser gananciales sino propios del ausente.

No se puede afirmar que los herederos presuntos (habría que agregar ab intestato, por cuanto no será aún el momento de que obren los testamentarios) estén comprendidos en la expresión de «toda persona que tuviera interés legítimo respecto de los bienes del ausente», pues mientras no se haya producido la muerte o la presunción de muerte del causante, los herederos carecen hasta de derechos en expectativa.

Asimismo podemos observar el artículo 18, en cuyo segundo párrafo se faculta al juez para «adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen». Habría que limitar esas medidas judiciales a las simples medidas conservatorias de los bienes, mientras aparezca el ausente.

En cuanto al artículo 19, por las razones que acaban de darse, se propone esta redacción para la primera parte del mismo: «Oído el defensor del ausente, y cumplidos los extremos legales, se declarará la ausencia y se nombrará curador, o bien se procederá conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo precedente.» «Para la designación de curador serán preferidos los parientes idóneos del ausente...», etcétera. El artículo 31 del proyecto, establece el divorcio y ya lo veremos sancionado y ampliado.

Las disposiciones que ha citado el señor miembro informante, del artículo 3.452, del Código Civil, sobre indivisión de los bienes, son las contempladas en el artículo 51 del proyecto y del artículo 3.035 del anteproyecto de Bibiloni, con la diferencia de que contemplada la relación de ese artículo con los artículos 2.612, 2.613, 2.694 y 3.598, dice Bibiloni: «Para conciliar las disposiciones (se refiere al artículo 3.452) hay que limitar a los herederos forzosos la aplicación del último» (alude al artículo 3.598).

De tal manera que al hacer práctico el artículo 51 queda una desvinculación con los artículos

citados del Código Civil, dando lugar a disposiciones contradictorias. La jurisprudencia futura tendrá que encontrar el camino, dificultoso desde luego, para la real interpretación de cuál es la vigencia efectiva de la disposición legal: si la del artículo 51 de este proyecto, o la de la correlación de ese artículo con los que he mencionado anteriormente del Código Civil y que siguen vigentes.

Esta falta de coordinación, esta forma fragmentaria de introducirse en disposiciones fundamentales de la vida jurídica del país, no es oportuna ni adecuada, ni significa ventaja para el derecho. En debates anteriores hemos recordado el compromiso del Poder Ejecutivo de enviar a esta Cámara un proyecto de reforma total del Código Civil. Eso hubiera sido lo conducente y lo práctico, porque tomada orgánicamente no puede complementarse una disposición con otra si no se forma un todo, un conjunto conexo que sería, en todo caso, la aplicación estricta de la ley, con su interpretación dentro de la ley misma. Así, por ejemplo, el anteproyecto de Bibiloni, que adelanta en algunos aspectos a la propia obra fundamental e imperecedera de Vélez Sársfield, podría ser una solución para las relaciones de derecho positivo en la República.

Como he dicho hace unos instantes, aparte de las dificultades que ya en sí tenía en algunos aspectos la aplicación del propio Código Civil, este proyecto crea tres formas de indivisiones, como lo ha hecho notar, también, el señor miembro informante: la del testador, la de los herederos y la del cónyuge supérstite, que crean por otra parte una excepción dilatoria a los herederos de la copropiedad, y que si bien es cierto coadyuvan a la garantía del bien indiviso, tienen ciertos aspectos criticables en cuanto a los derechos legítimos de los acreedores en algunos casos. Estos sólo pueden hacer efectivos sus créditos dentro del estado de indivisión, solamente con los productos, el esfuerzo o el trabajo emanado de los bienes indivisos.

Por otra parte, hay una situación fundamental para nosotros, que hace que las disposiciones legales estén condicionadas al momento que vive el país.

No podemos ser optimistas ni ocultar nuestra profunda preocupación por lo que hemos llamado estado antijurídico al actual estado institucional de la Nación y al actual sistema del Poder Ejecutivo.

Cuando la aplicación de la ley se hace estando garantizados todos los derechos y esa aplicación se hace estrictamente amparando a los derechos individuales y sociales, sea bienvenida la ley; pero cosa muy distinta es en un estado como el actual, en que empezamos porque no existe la justicia, pues el Poder Judicial es una simple dependencia del Ministerio del Interior; en que se ha empezado a sentar esta jurispru-

dencia de avasallamiento e inconstitucional de la intervención al Poder Judicial de las provincias; en que se ha reformado la ley de los ministerios pasando el Poder Judicial a depender del Ministerio del Interior, como si se tuviera la preocupación esencial de poner en sus manos no sólo el Poder Judicial de la Nación, sino también el de las provincias.

El caso más inmediato es, desgraciadamente, el de la provincia de Córdoba. Su gobernador solicita la intervención al Poder Judicial haciendo caso omiso de las disposiciones constitucionales que establecen los resortes adecuados para someter al juicio político a los jueces que pudieran no cumplir rectamente con su misión. Y como si ese pedido no bastara, como prueba de la abrogación de la autonomía de la provincia, mandó después al ministro del Interior y Justicia un telegrama de agradecimiento por haberse dispuesto esa intervención al propio Poder Judicial de su provincia.

Todo ello ocurrió no obstante que el gobernador, al leer su mensaje el 19 de mayo en la Legislatura, proclamó la excelencia del Poder Judicial de aquella provincia; más aún, pocos días antes de pedir la intervención, había prometido a los jueces aumentar sus emolumentos.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia ruega al señor diputado por Córdoba que vuelva al asunto en debate.

Sr. Latella Frías. — Todo esto no denota adelanto. El derecho debe renovarse; no podemos estar en contra de la reforma de disposiciones, algunas inactuales, que han venido rigiendo la vida de la Nación; pero, eso sí, más que con el sistema de las reformas, estamos con la reforma del sistema; que los derechos estén garantizados; que para nadie haya desamparo; que no se vuelva a la Edad Media y que no se exalten períodos de regresión y de barbarie. No queremos que so pretexto de un revisionismo se elogie la tiranía y la dictadura y se infiltre ese virus a la juventud argentina.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia ruega nuevamente al señor diputado por Córdoba que se atenga al tema en debate; de lo contrario, requerirá una votación de la Honorable Cámara para determinar si está fuera de la cuestión.

Sr. Latella Frías. — Nuestra preocupación ha de ser legar a las generaciones futuras el derecho positivo que lleve al pueblo la felicidad en el ámbito de la democracia, al reconocimiento efectivo y garantizado de los derechos

del hombre y al respeto a las instituciones jurídicas y sociales de la República tan vilipendiadas en estos momentos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora diputada por Presidente Perón.

Sra. Alvaredo de Blanco Silva. — Señor presidente; el proyecto de ley que está considerando la Honorable Cámara establece un régimen especial para represión de los delitos cometidos por los menores de edad.

Ello es una consecuencia de dos orientaciones de nuestro movimiento revolucionario peronista: el concepto de las medidas penales, que dio lugar a la inclusión en la reforma constitucional de 1949 de ese principio fundamental de que «las cárceles serán adecuadas para reeducación social de los detenidos en ellas» y la norma esencial que se concreta en la frase «los únicos privilegiados de la patria son los niños».

Es así como se concretan en los artículos de este proyecto las medidas especiales que protegerán a los menores delincuentes, a fin de que no se vean conducidos por la acción represiva del Estado, en vez de serlo hacia su reeducación y elevación moral para hacerlos dignos ciudadanos de la patria, hacia la degradación de criminales empedernidos y maleantes que habrán de vivir permanentemente al margen de la ley.

Esto ocurría a menudo con los pobres jovencitos que caían, a veces por causas insignificantes, bajo la severa justicia que castigaba duramente todo lo que fuera rebeldía o que lesionara los intereses de cualquier poderoso.

Mezclados muchas veces esos jovencitos con hombres endurecidos en el delito, aprendían en pocos días de cárcel cuanto podían necesitar para ser avezados delincuentes y nada aprendían en cambio, sobre lo mucho que necesitaban conocer y apreciar para enmendarse y alejarse de esa mala senda a la que muchas veces ni siquiera habían llegado a pisar.

Esta legislación de menores que estamos considerando habrá de abrir un cielo de felicidad para los que estaban expuestos a aquel triste destino.

Ya la magnífica obra penitenciaria que ha realizado el gobierno del general Perón ha inspirado un nuevo impulso de reeducación y de dignificación del hombre caído en las sanciones del Código Penal.

Pero mucho más significará la ley que en breves momentos hemos de sancionar, porque ella se refiere y contempla cuidadosamente a los niños y jóvenes que con su espíritu abierto a todas las enseñanzas, necesitan ser atendidos muy especialmente por el régimen sancionador del Estado.

Esta es la forma en que llegará a los menores delincuentes la acción bienhechora del general Perón, alentado también por el espíritu inol-

vidable de nuestra querida Jefa Espiritual, Eva Perón.

Los niños, que son los únicos privilegiados de la patria, no son sólo los que vemos correr en las plazas de todas las ciudades y pueblos, jugando en los juegos infantiles que están allí a su disposición. No son únicamente los niños que van alegres y contentos a las miles de escuelas de todos los rincones del país; no son exclusivamente los niños felices que tienen sus padres y madres en hogares bien constituidos y que gracias a Perón tienen hoy todo lo necesario para vivir; también son niños —y a ellos llega la protección de nuestro movimiento peronista— los que carecen de hogar, que no tienen educación, que viven contra sus padres, tutores o cuidadores, y que caen en la tentación de un pequeño o grande hurto, que van camino a la corrupción y la degradación, que están moldeando su espíritu en conceptos torcidos y malsanos.

A ellos también quiere y protege nuestro conductor, el general Perón.

A ellos también amaba y ayudaba Eva Perón. Y su espíritu inmanente permanece en nuestro movimiento con ese mismo afecto por todos los niños de la patria, especialmente para estos que contempla la ley, que son quizá los más necesitados de todos, de ese cariño y esa protección que tan generosamente brotaban del corazón de Eva Perón.

Con estos sentimientos cordiales debemos considerar este proyecto de ley y sancionarlo, en la seguridad de que habremos alejado de los más graves peligros a muchos cientos de niños y jóvenes, y que habremos contribuido a forjar un buen número de argentinos, renovados en su espíritu por las sabias disposiciones de esta ley y por la genial conducción de nuestro jefe, el general Perón.

Esos menores delincuentes serán juzgados y sancionados con todo el justiciero y benévolo criterio de nuestra Doctrina Nacional, y serán cuidados y reeducados en los respectivos establecimientos correccionales con los modernos y especializados métodos que en ellos se han implantado.

Con estas breves y modestas palabras, dejo expuesto mi apoyo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo y confío en que habremos de darle la sanción legislativa que ella merece, con la comprensión y el apoyo de todos los señores diputados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ferrer Zanchi. — Bien ha dicho mi distinguido compañero de representación, el señor diputado Perette, que las estadísticas actuales demuestran el aumento de los delitos en todas las esferas, ya que no sólo han aumentado en

los adultos sino en lo que respecta a la delincuencia infantil y juvenil.

En la delincuencia infantil y juvenil intervienen dos elementos primordiales que inciden en la delincuencia; el factor hereditario constitucional y el factor ambiental. Sobre el primero, Quetelet, Lombroso, Krapf, Rilet, Gruhle y otros han hecho estudios interesantes, pero debemos destacar entre todos ellos los trabajos de Günther Just, quien ha confeccionado estadísticas amplias respecto a menores que han cometido delitos. De acuerdo a las mismas, sobre niños asociales el 31 por ciento responden al factor constitucional, el 18 por ciento al factor ambiental y el 41 por ciento a ambos factores combinados. De estos niños que habían cometido delitos, 45 por ciento se podían considerar relativamente normales y el 55 por ciento anormales. De estos últimos, un 29 por ciento, francamente anormales.

En el factor constitucional intervienen tres factores primordiales: la sífilis, la tuberculosis y el alcohol. La sífilis y la tuberculosis están en vías de ser sólo un problema del pasado. La terapéutica moderna, que incluye el uso exitoso de los antibióticos, va a hacer desaparecer esos dos elementos que en otra época fueron un verdadero flagelo de la humanidad.

Mattheu Molich, en 116 muchachos con Wassermann positiva, encontró el 21 por ciento con nivel mental medio, 36 por ciento nivel mental inferior y 43 por ciento subnormal.

Con respecto al elemento alcohólico, es importante tener en cuenta que es el elemento que determina muchas perturbaciones psíquicas. Bien decía Benigno Di Tullio que el alcohol es un realizador de tendencias criminales latentes.

Voy a citar un caso ilustrativo mencionado por Nelson, referente a la familia de un holandés llamado Jukes y a la gravitación que tuvo el alcohol en sus descendientes: 106 fueron vagabundos, 206 mendigos, 181 inmorales, 76 criminales y sólo 140 fueron personas presuntamente normales.

Verbeeck, el criminólogo belga, en trabajos semejantes llega a iguales conclusiones.

En la Alemania nazi, con motivo de la ley de esterilización sancionada el 1º de enero de 1934, la Oficina Racista Alemana dependiente del Ministerio del Interior, estableció que en Alemania, en esa época, se encontraban 250.000 locos, 200.000 cretinos, 75.000 idiotas, 100.000 epilépticos, y 2.000.000 de individuos con diversas psicopatías.

Es sumamente interesante el trabajo efectuado por Royo Villanova sobre la ley nazi de esterilización.

En la Argentina, uno de los hombres que más se ha ocupado de la delincuencia infantil es el doctor Carlos Arenaza, conocido mundialmente por trabajos efectuados sobre este tema; el

doctor Arenaza encontró en el factor social más que en el biológico la causa de la delincuencia infantil. Para Arenaza, el factor hogar es fundamental y en estadísticas de Chicago que van de 1899 a 1909, estableció que sobre 14.000 menores procesados, el 35 por ciento pertenecían a familias incompletas.

En Boston, sobre 2.371 niños delincuentes, sólo el 58 por ciento vivían con madre y padre. Esta estadística es desde el año 1907 al 1926.

En el censo general de Estados Unidos de 1923, sobre 10.039 menores reclusos por delitos contra la propiedad, sólo el 44 por ciento vivía con ambos padres.

Carlos Arenaza encontró en sus minuciosos estudios efectuados en la Argentina que sobre 625 menores delincuentes, 310 eran de matrimonios completos, 277 de matrimonios incompletos y 38 de padres desconocidos.

Cuello Calon comprobó en Barcelona que las cuatro quintas partes de los niños juzgados no tenían hogar normal, por falta de padre o madre, padre ebrio o madre prostituta.

Gregorio Bergman, en trabajos hechos en Córdoba con respecto a menores infractores, encontró que el 60 por ciento de los hogares estaba constituido en forma irregular.

En Italia, Ferriano comprobó que sobre 12.000 menores delincuentes, 3.000 de los padres eran alcohólicos, 1.590 eran condenados, 2.000 eran vagos y de las madres, 600 eran prostitutas.

La inadaptación escolar también tiene importancia. Bromer encontró en Boston que el 7 por ciento de los menores eran inadaptados escolares. Burt, en Londres, comprobó que el 4 por ciento de los menores eran inadaptados escolares.

No debemos descartar el factor literatura. La literatura malsana, hoy en auge, como las novelas policiales que se venden en todos los quioscos y en todas las esquinas, gravitan en la mente de los niños, incitando y facilitando la comisión de delitos; dicha literatura fomenta el delito.

También debe tenerse en cuenta el factor juego. Es un elemento de mucha importancia y que en la actualidad gravita especialmente en los varones; en cambio, en las niñas, el lujo las tienta.

Otro factor es la habitación; el conventillo, que es una verdadera escuela de delito, incita al niño a cometer delitos; en el conventillo el niño recibe ejemplos que rebajan su moral.

Reitero que no debe olvidarse el factor lujo en la mujer, que en muchos casos lleva a la prostitución. La calle y las malas compañías son factores concurrentes que influyen en los niños.

El cine es otro de los elementos de gran importancia. La censura debe ser severa con ciertas películas y estar adecuada a la modalidad de ciertos países y razas. En la Capital Fede-

ral la censura a veces resulta excesiva, pero es preferible que así sea y que no facilite la concurrencia de los niños a los cines donde se exhibe ese género de películas que desarrollan temas de delitos contra la sociedad. En Cincinnati, Estados Unidos, se ha comprobado que el 50 por ciento de los menores delincuentes eran niños que concurrían de manera habitual al cine. En ese mismo país del Norte, la estadística revela que por semana concurren 40 millones de niños a los cinematógrafos.

En la República Argentina, uno de los valores actuales que más se ha dedicado al estudio de los niños delincuentes y anormales es la doctora Telma Reca de Acosta. Sus profundos estudios y trabajos efectuados en los años 1928 y 1929 demostraron que el 50 por ciento de los niños que habían cometido delitos concurren habitualmente a los cines. En la actualidad, la doctora Telma Reca se encuentra efectuando estudios en Estados Unidos de América, becada por la Fundación Rockefeller.

También es necesario el control sobre la inmigración. En los Estados Unidos se ha demostrado —y lo mismo en otros países que han establecido control inmigratorio muy severo— que antes de implantarse ese control, el porcentaje de niños delincuentes de padres inmigrantes era muy elevado y que podía estimarse casi en el 60 por ciento.

Debemos destacar también la importancia del ambiente en que viven los menores. El profesor Cuello Calón, de Barcelona, manifiesta que la fuente de la criminalidad infantil y juvenil debe buscarse en el medio inmoral o corrompido en que transcurre la vida del menor.

Creo, como Cuello Calón, en la preponderancia del factor ambiental, sin desconocer los factores biológicos que influyen en menor grado que el ambiente.

En la Argentina, debemos mencionar un médico que trabajó de manera consciente y profunda en esta materia: me refiero al ex diputado radical, señor Nerio Rojas, profesor titular de medicina legal, conocido mundialmente por sus grandes conocimientos en la materia.

El profesor Nerio Rojas efectuó, como André Collin, un profundo estudio sobre el tema que estamos considerando, modificando de manera acertada la clasificación efectuada por Collin, que dividía la delincuencia infantil y juvenil en dos tipos de delincuentes: 1º El tipo social, que sin tener taras va al delito por influencia de causas externas (preponderante la influencia de los medios ambientales, como ser: familia, escuela, habitación, malas compañías, etcétera); 2º El tipo patológico, en que predomina el factor personal por anormalidad psíquica. Nerio Rojas muy acertadamente dividió este tipo patológico en dos: falso anormal psíquico (retardo pedagógico, debilidad, afecciones sensociales co-

mo sordera, etcétera), no presentando verdaderos trastornos psíquicos; y el verdadero anormal psíquico, que puede ser un enfermo mental, es decir, un alienado (dementes, oligofrénicos, imbeciles, etcétera), o epilépticos, histéricos, hiperemotivos, mitómanos, etcétera.

En una clasificación hecha sobre la base de estadísticas por los doctores Nerio Rojas y Carlos Arenaza, se hace referencia a los frecuentes delitos leves (mendicidad y vagancia); y luego a los delitos contra la propiedad, que están relacionados con la edad del niño, ya que cuanto mayor es la edad el porcentaje de delitos contra la propiedad aumenta.

Los delitos contra las personas, según esta clasificación, son más raros, ocurriendo lo mismo en los delitos contra la honestidad, referidos a la delincuencia infantil y juvenil. Después de los delitos contra la propiedad siguen en importancia los delitos contra la autoridad.

En la Argentina se ha hecho una estadística interesante a cargo del profesor Juan Carlos Arenaza; indica que sobre setenta y cinco vendedores de diarios, sesenta y cuatro cometieron delitos contra la propiedad, siete contra las personas y cuatro contra la autoridad, siendo reincidente un 40 % y sobre diecisiete vendedores ambulantes, quince incurrieron en delitos contra la propiedad, uno contra las personas y uno contra la autoridad, siendo reincidente un 27,05 por ciento.

Los establecimientos adecuados para corregir o ayudar a combatir la delincuencia infantil son necesarios. Los que dependían del Patronato de Menores, hasta el año 1943 eran nueve en total, de los cuales siete para hombres y dos para mujeres, siendo uno de ellos la escuela de artesanos Almafuerte, donde además de impartirse enseñanza industrial había un anexo para observación y clasificación de los menores varones. Otro establecimiento era la escuela hogar Santa Rosa, de mujeres, que tenía una casa de observación y clasificación de menores que habían cometido delitos.

Hasta el año 1943 el Patronato Nacional de Menores, además de los dos establecimientos citados, tenía otros siete: Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, establecimiento Carlos Pellegrini, Colonia Hogar Mariano Ortiz, Colonia Hogar Cayetano Zibecchi, establecimiento Los Arenales, todos éstos para varones, y para mujeres, además de la Escuela Hogar Santa Rosa, ya mencionada, la Escuela Hogar Santa Rita y Asilo Niñas Menores.

El aumento de la delincuencia infantil-juvenil, entre los años 1931 y 1943, se eleva de 800 a casi 1.500, es decir, en 12 años, menos de 700 casos.

Tengo aquí en mi banca la memoria general del Patronato de Menores (año 1943), que consta de más de 230 páginas con gráficos, láminas en colores, etcétera; este excelente trabajo gráfico fué impreso en la Colonia Hogar Ricardo

Gutiérrez por los jóvenes que habitaban dicha colonia, siendo esto una demostración de la obra útil efectuada por patronato bajo la acertada dirección del doctor Arenaza.

Varios proyectos de ley fueron presentados para tratar de combatir la delincuencia infantil. Por ejemplo, el referente a tribunales infantiles presentados por el doctor Pinto en 1925; el de creación de tribunales de menores, presentado por el ministro Coll en 1938; el código del niño, presentado por el ex diputado Cabral en 1941 y luego reproducido con modificaciones por el ex diputado Sammartino en 1948; el de creación de la Dirección de Asistencia de la Infancia Abandonada, presentado por el ex diputado Liceaga en 1946; el proyecto de código del niño, del ex diputado Modesto Ferrer, en 1948, proyecto muy completo y bien fundado.

El primer Plan Quinquenal, al ocuparse de los derechos de familia, se refería también a la delincuencia infantil y a la infancia abandonada; pero no se ocupó de manera real, fué un simple enunciado más. El segundo Plan Quinquenal, en los capítulos tercero y cuarto, se refiere también a este problema, y esperamos que tenga más suerte que el anterior.

La legislación argentina es insuficiente: está lo previsto en el Código Penal que se refiere a los menores, autores de delitos —artículos 36, 37, 38 y 39— y la ley 10.903, de Patronato de Menores, es una ley de protección, que prevé cuestiones de orden civil y penal, (artículos 14, 15, 16, etcétera).

En el orden provincial, existe en Santa Fe el código de defensa de niños, que es la ley 3.461.

En la legislación extranjera, la de Uruguay es la más completa y más avanzada, siguiéndole luego la de Suiza y Venezuela.

En mi concepto, la solución del problema se halla siguiendo lo que dice acertadamente Arenaza, que concreta a dos puntos: primero, el estudio previo de cada caso —estudios especiales y detallados— sin medidas de tipo standard; segundo, la importancia del factor hogar, no alejando a los niños del hogar, tratando de mejorar y elevar dicho hogar. Sólo en última instancia, cuando el hogar es inmoral e incompleto, se debe entonces sacar al niño de ese ambiente.

Es necesario también la creación de tribunales para menores, según lo aconsejado en el V Congreso Panamericano del Niño. También es necesaria la sanción del código del niño, y la creación de establecimientos adecuados para corregir a los menores que cometen delitos. Las granjas talleres y escuelas son eficaces.

En ese sentido, los artículos 1º, 2 y 3º de este proyecto de ley no contemplan de manera exacta las necesidades que tienen los niños y la juventud que comete delitos. Es imprescindible, sobre todo, la sanción del código del niño y la creación de tribunales especiales para menores. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. López (N.). — Señor presidente: la atención de todo el país se concentra hoy sobre el artículo 37 de la Constitución Nacional, sancionada en este mismo recinto por el bien de la patria y la seguridad de sus ciudadanos.

En ella se dignifica infinitamente al hombre que, por un momento, fué olvidado por esa maraña de prejuicios que formaba la «clase dirigente» del país, y el proyecto de ley que se envía para su consideración por el Poder Ejecutivo, tiene por objeto explicar la aplicación legal del concepto expresado en el tercer derecho de la familia incorporado a la Carta Magna.

El proyecto de ley que consideramos, y que incluye la determinación específica de qué es lo que puede constituir un bien de familia, deja aclarada la validez de numerosos principios de bien social sustentados en la doctrina de Perón, así como la prohibición de venta del bien inmueble, su inscripción como bien de familia en un registro especial a ese efecto y, en fin, las normas accesorias para determinar, en caso de que sea indispensable, la caducidad de su estructura legal como tal.

Ha concluido, ya hace mucho, la etapa durante la cual el techo, el «ranchito», como decían —y dicen— los obreros, era la presa codiciada por aquellos a quienes les resultaba demasiado pesado trabajar para vivir. Hoy el hogar, desde su punto de vista material, adquiere una solidez insospechada, mediante el esfuerzo yugulado de la acción gubernativa, en beneficio del bien cimentado devenir económico, de la unidad indisoluble que la familia constituye en el seno del Estado.

Señor presidente: este cuerpo no puede dejar de dar sanción favorable al proyecto remitido. No puede dejar de aprobarlo, no porque su aprobación pueda crear problemas de orden administrativo judicial, sino porque constituye un elemento importantísimo, una evidencia de sólido perfil en cuanto a la expresión de amor por el pueblo que siente la doctrina creada por nuestro líder para redención de la ciudadanía.

Grabadas en mis recuerdos de adolescente permanecen escenas de dolor, vistas en hogares desprovistos de su casita por la artera prolijidad de un experto en embargos, hipotecas y actividades accesorias.

La metamorfosis experimentada por la legislación social argentina en los últimos diez años permite expresar estas palabras, ya dichas por Perón para recordar cómo ha planeado el peronismo, y cómo viene concretando las grandes realizaciones. Las palabras a que me refiero fueron dichas por Perón el 11 de enero de 1949, y son: «Por eso hemos querido que el Estado se preocupe especialmente de la conservación de esa institución tan importante de la socie-

dad que es la familia, protegiéndola, amparándola y creando también un fondo o un capital familiar para su defensa económica. Serán formas que irán paulatinamente alcanzando su realización dentro de la legislación argentina, hasta completar la protección a que la familia tiene derecho.»

Para concluir esta brevísima exposición, con la cual deseo formular desde ya mi voto favorable al proyecto, me permito recordar el texto de la primera de las veinte verdades peronistas, que dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, y defiende un solo interés: el del pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Miel Asquía. — Pido la palabra, para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago moción de que se pase a cuarto intermedio, para reanudar la sesión dentro del término de una hora.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital.

— Resulta afirmativa de 80 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 40.

— A la hora 23 y 5:

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Hermida. — Señor presidente: vigorizar la familia — decía el general Perón el 3 de octubre de 1944 — es fortalecer a la Nación, puesto que ella es su propia célula. Hoy, a más de diez años de esta reflexión, este cuerpo considera un proyecto de ley cuyo contenido, profundamente humano, ratifica una vez más la línea de conducta que, en favor de la familia argentina, ha desarrollado y fortalecido el ejercicio de la doctrina peronista, en el diario juego de la libertad y de la protección concedida a esta institución social por las prescripciones del artículo 37 de la Carta Fundamental.

Considerada la familia por el Estado peronista como el elemento más importante de la nacionalidad, debía lógicamente verse favorecida con la posibilidad de incluir un bien sólido, inafectable e inalienable, de uso exclusivo de la familia, protegido por prerrogativas legales fijadas en esta ley. Este bien, que el gobierno peronista propone llamar bien de familia, está protegido en el proyecto de ley que considera esta Honorable Cámara por prescripciones que

no admiten interpretaciones sofisticadas, ya que se menciona claramente su inembargabilidad, la imposibilidad absoluta de su afectación ya garantizada con anterioridad por la Constitución Nacional en el mencionado artículo 37 (Derechos de Familia, III), en donde dice que «el Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine».

Y esa ley prevista en la Constitución Nacional, modificada en 1949, es la que trata ahora este Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, y su sanción vendrá a colmar la necesidad que abría la Constitución al determinar la garantía al bien de familia, cuya aplicación jurídica no estaba aún regida por una norma de ejecución uniforme y armónica como acostumbra nuestra justicia.

La doctrina peronista, cuya nombradía internacional es un motivo de orgullo para los argentinos, incorporó desde su instante primigenio la pristísima imagen del hombre como valor fundamental de la sociedad. Desde el primer balbuceo de su organización como un todo funcional dentro del Estado, hasta este hoy en el cual nos regocijamos bajo su amparo gigantesco, titánico, el hombre ocupó el foco de todos sus proyectos y recordó a las gentes que el hombre no era un objeto ni un accidente en el Estado; recordó que la nacionalidad que se representaba por una escarapela estaba urdida, en la intimidad de su tejido, por la felicidad y la seguridad física de su ciudadanía. Parece absurdo, pero fué preciso recordar a los políticos que la ciudadanía estaba conformada por hombres y no por abstracciones susceptibles de cálculo, de juego, de manejos claros y oscuros, incluso susceptible de olvido en el paréntesis que se tiende en las democracias entre dos elecciones.

La preocupación permanente por el hombre fué confirmada numerosas veces por nuestro líder, pero nunca tan vibrantemente como en la alocución del 21 de octubre de 1952, cuyo contenido social puede inferirse de estas palabras: «El movimiento peronista es un movimiento humanista no puede encargarse de la organización y despreñar al hombre. Para nosotros el hombre vale. Hemos hecho de nuestro sistema la defensa del hombre, y tenemos que seguir luchando para defender al hombre. No hay nada superior al hombre. No se hace el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Nuestro movimiento se ha hecho también para defender al hombre, que es, en último análisis, el único que ha sido exprimido, explotado y escarnecido durante tantos años. Nosotros estamos empeñados en la liberación y defensa de ese hombre. Por eso mal podríamos olvidarnos de él dentro de nuestro movimiento.»

La doctrina peronista promueve la defensa y protección de la familia; la constitución peronista garantiza sus bienes, según una ley que

fija su régimen jurídico, al cual deberá ajustarse el ejercicio legal. Y esa ley es ésta que aguarda, sin dudarla, una sanción favorable de la Honorable Cámara, a cuya consideración la ha enviado el Poder Ejecutivo nacional. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora delegada por Tierra del Fuego.

Sra. Fadul. — Después de las exposiciones que en forma brillante y con exhaustivos conceptos escuchamos de los distinguidos compañeros de mi sector que me precedieron, como miembro de la Comisión de Legislación General extraigo las fuerzas necesarias para participar en este debate.

En primer lugar está el mensaje con que el excelentísimo señor presidente de la República, general Perón, sometió este asunto al Honorable Congreso de la Nación, que abocado siempre a estudios profundos sancionó importantes leyes.

La nueva Constitución Nacional encierra las normas más sobresalientes para un pueblo libre y soberano, la igualdad de derechos, el respeto a las distintas razas, la convivencia pacífica de los pueblos y la más humana de todas las leyes sociales, incrustada en la nueva Constitución, capítulo III, artículo 37: los derechos del trabajador, que brega por una retribución justa, por condiciones dignas de trabajo, por el bienestar, por la protección a la familia, prueba irrefutable del sentimiento que anida en nuestro gobierno justicialista, especialmente en el querido general Perón.

Esta ley está de acuerdo con la prédica constante de la justicia en pro del bienestar de los menores y de la familia.

Es bien conocida la constante preocupación del gobierno por los problemas del niño, de quien ha dicho que es el único privilegiado en nuestra tierra. Esto es así porque esos niños de hoy han de ser los hombres de mañana; porque son el sector principal del capital humano que constituye el factor básico de la organización nacional.

Quien se ha formado moralmente en la solidad del hogar y ha debido completar su preparación en la lucha constante venciendo la opresión del medio pretérito — ¡felizmente pretérito! — para tomar su parte en la lucha idealista que transforma al país, sólo quiero decir que esta ley de profunda raíz justicialista es de aquellas que desde la eternidad saluda con su sonrisa maravillosa y bendice con sus palabras de amor nuestra inmortal y siempre querida Eva Perón.

Como peronista, como representante peronista, necesito decir que este proyecto de ley contempla profundos y muy delicados problemas que, por sobre todo, afectan y perturban al pueblo trabajador, a los hogares modestos, a

los hijos humildes de la patria. Es ley destinada, más que todo, a los que constituyeron y constituyen la falange fervorosa y decidida que tiene una sola jerarquía: la lealtad; que posee un solo ideal: servir con eficacia a la República; y que utiliza un solo verbo, compendioso, terminante y triunfal para proclamar sus anhelos y su voluntad inquebrantable: Perón.

Esa falange compacta, esa multitud entusiasmada, ese pueblo trabajador, dice y dirá siempre que el contenido de esta ley responde plenamente a las sugerencias, cabalmente interpretadas, perfectamente expuestas, de los que tanto han sufrido, de los que deben soportar situaciones dolorosas por imprevisión legal y que en la era justicialista quieren verse redimidos por la ley como lo están por los hechos.

Esta es otra conquista que prevalecerá, porque estos pasos se dan con tal firmeza que ya no habrá evento capaz de afectarla. Estamos legislando para el presente y para siempre, hasta que otras innovaciones, revolucionarias como ésta, permitan dar otro paso hacia adelante, que el peronismo es y será permanentemente progresista.

Voy a referirme, concretamente, a las disposiciones sobre bien de familia. Es el capítulo que, en forma especialísima, contempla la situación del hogar humilde. Por él se da estabilidad geográfica, por así decirlo, y fundamentación económica a la familia.

Mediante el bien de familia se asegura la estabilidad del hombre, la mujer y sus hijos; se favorece la unidad familiar, extendiendo sus beneficios a los parientes inmediatos, si vivieren juntos. Desaparecerán así algunos elementos que han venido contribuyendo a la dispersión familiar, con grave daño para nuestros sentimientos y de nuestra formación espiritual y moral.

Muchas veces ha acontecido que un matrimonio ha logrado adquirir bienes suficientes para su estabilidad, pero luego, por circunstancias adversas, ha visto caer en manos de prestamistas sin otra mira que su propio dinero el fruto digno y limpio de su trabajo. El derecho del prestamista ha prevalecido sobre el derecho a la vida misma, despedazando existencias útiles en aras de un puñado de dinero.

Hombres y mujeres que a fuerza de trabajo rudo y honesto, a costa de verdaderos sacrificios realizados en su juventud y madurez, han logrado adquirir un pequeño terreno, una quinta, una chacra, donde emplear sus fuerzas y tener asegurado el techo y el pan, ilusionados con la idea de que eso sería, además de garantía para la propia tranquilidad, el legado para los hijos de su encendido amor. Y esos hombres y mujeres han sido lanzados de su casa y su tierra, porque la ley amparó más a quien tenía mucho más y desamparó a quienes no poseían sino lo indispensable.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don José V. Tesorieri.

Sra. Fadul. — El amparo del bien familiar será completo desde la sanción de este proyecto de ley.

Los que con sus ahorros constituyan el bien de familia, lo tendrán garantizado mientras ese bien cumpla la elevada, la noble y humana función que la ley le asigna.

Es necesario que esto lo sepan todos los humildes de la patria.

Es preciso que nadie ignore que, con este nuevo instrumento legal, se afianza la liberación de los trabajadores.

Con leyes como ésta, se agranda la patria, y se agranda hacia arriba y en profundidad. En hondura de amor y en altura de santas ilusiones.

Esto es el justicialismo en acción.

Es el segundo Plan Quinquenal en marcha.

En el objetivo general VII del primer objetivo fundamental se expresa: «La familia será objeto de preferente atención por el Estado, que habrá de protegerla mediante el desarrollo de los derechos de la familia, que consagra el artículo 37 de la Constitución Nacional, el cual informará la reforma del Código Civil.»

La Constitución Justicialista contempló, precisamente, la institución del bien de familia, anticipándose así en 1946 lo que ahora se hará.

La doctrina justicialista, de la cual fué trasunto la declaración constitucional de que «El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine», expresa al respecto: «A los derechos del trabajador han sido agregados los de la familia. En nuestra sociedad, si hay algo importante, es precisamente la conservación y defensa de la familia, que es la verdadera célula de la Nación. Por eso el Estado se preocupa especialmente de la conservación de esa institución tan importante de la sociedad, que es la familia, protegiéndola y amparándola, y creando también un fondo o un capital familiar para su defensa económica. Serán formas que irán paulatinamente alcanzando su realización dentro de la legislación argentina, hasta completar la protección a que la familia tiene derecho.»

Estas son palabras que, en 1949, pronunciaba para el pueblo y la Nación, para la historia, el general Perón.

Esta ley será otra realidad peronista, obra de comprensión, de amor, de justicia, de verdadera justicia social, de amor al prójimo, de salvación para el humilde. Obra de amor y de justicia, como fué la obra de nuestra inolvidable Evita.

Ella misma lo dijo así, en *La razón de mi vida*: «Sí. Es de justicia, porque no alcanzo nunca a dar más de lo que pertenece a los descamisados. Estoy pagando lo que les fué quitado

durante un siglo de traición y de privilegios oligarcas.

•Y es también de amor, porque en mi obra está mi corazón, mi pobre corazón de humilde mujer que todo, sí, lo hace por amor.

•Por el amor a Perón. Por el amor a los descamisados de su pueblo... y, ¿por qué no decirlo?... de todos los descamisados del mundo.»

A esas ideas y a esos sentimientos, señor presidente, responde esta ley.

Tiene profunda raigambre peronista, porque escuchó el reclamo sin palabras del pueblo. Y tiene excelsa finalidad justicialista, porque el sentido de justicia social es su esencia y la positiva realidad social será su substancia.

Por todo ello, señor presidente, el pueblo espera su sanción, que hará honor a este Parlamento. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — La heterogeneidad de los temas comprendidos en el despacho que estamos considerando, surge de los discursos que hemos escuchado. Cualquiera de ellos tiene jerarquía suficiente para justificar la laboriosa sesión que está celebrando la Cámara. Una ley que contempla la minoridad delincuente, que al mismo tiempo encara la incorporación a nuestro régimen positivo del bien de familia, que modifica la edad matrimonial, que autoriza la indivisión forzosa, modificando el régimen sucesorio, y que cambia totalmente el régimen de la ausencia con presunción de fallecimiento, se parece a las piezas de distintos rompecabezas, que resulta lógicamente inconcebible queden comprendidos dentro del mismo debate.

No obstante, la representación radical no ha dejado de dar su opinión sobre todos estos temas, destacando los defectos que ofrecen las soluciones proyectadas por el Poder Ejecutivo y estudiadas por las comisiones específicas de la Cámara.

Hubiera deseado tener oportunidad de ocuparme de cada una de estas cuestiones, porque la mayor parte de ellas han merecido mi atención en la cátedra universitaria y mi preocupación como hombre político, pero no es posible agotar temas tan importantes en una sola exposición de término limitado. He de concretarme al que ha sido materia de menor desarrollo en el curso de la discusión, y en el cual, sin embargo, yo centro toda la importancia de la cuestión sometida a la Cámara: la ausencia con presunción de fallecimiento.

No siempre la vida humana llega a su término de modo que pueda comprobarse la muerte. En numerosas ocasiones, desaparecen las personas y se crea una duda acerca de si sobreviven o han muerto.

Surgen entonces en el derecho comparado soluciones para el problema de los desaparecidos, con respecto a cuya muerte existe incertidumbre. En el derecho alemán se llegó a la solución de que, reunidos determinados recaudos, debe declararse la muerte y esta declaración de muerte tiene, en general, efectos muy semejantes a los de la muerte real.

En el antiguo derecho francés, por el contrario, no se había hallado solución para el problema y durante mucho tiempo se recurrió al arbitrio de considerar que el desaparecido vivía hasta cumplir la edad de 100 años.

Pothier lleva una crítica destructiva a ese sistema y entonces se van dando los elementos que, recogidos por el código de Napoleón, establecen un procedimiento para resolver el problema de la incertidumbre con respecto a la vida o a la muerte del desaparecido. No lo equipara nunca a la muerte real. Pero como se trata de una persona que ha creado vínculos jurídicos, que ha formado un patrimonio, que tal vez tiene una familia, establece una serie de normas tendientes a asegurar la conservación primero, y la transmisión posterior del patrimonio, mediante un procedimiento particular que no es la sucesión por causa de muerte; y contiene, naturalmente, normas con respecto a la suerte de los demás vínculos jurídicos que la muerte modifica o disuelve.

Vélez se encontró frente a estos dos sistemas y dió una solución argentina que no es por cierto la mejor del código. Una de las materias que necesitan reformas es la ausencia con presunción de fallecimiento.

—Ocupa la presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

Sr. Fassi. — El tema parecería reducido en sus proyecciones sociales, como consecuencia de la facilidad de las comunicaciones, pero su trascendencia es puesta en evidencia por episodios como el naufragio del «Fournier» o el terremoto de San Juan.

El sistema de Vélez tiene el defecto de inspirarse en distintas fuentes, a las cuales no siempre tiene acceso el jurista. Si nos concretáramos a las normas que rigen la ausencia con presunción de fallecimiento, diríamos que ha acogido el sistema francés; pero al establecer en el libro IV del código cuándo se abre la sucesión, no se concretó a considerar que la sucesión *mortis causa* se abre por la muerte del causante, sino también por la presunción de muerte, lo que está de acuerdo con el sistema germánico.

No es posible en el curso de este debate presentar un panorama completo de las dificultades que este sistema de Vélez crea con respecto a la transmisión de los bienes del ausente; si es necesario tramitar al mismo tiempo el procedimiento de la ausencia con presunción de falle-

cimiento y el procedimiento de la sucesión *mortis causa*; y la forma como actúan las distintas instituciones del derecho sucesorio, tales como la aceptación beneficiaria, la responsabilidad *ultra vires*, etcétera.

Al mismo tiempo, el sistema de Vélez contiene uno de los textos de solución más tajantes con respecto a un problema que presenta la presunción de muerte: el de la subsistencia del vínculo matrimonial. Ese mismo criterio se traslada a la ley de matrimonio civil cuyo artículo 83 establece: «El fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio. Mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido, el matrimonio no se reputa disuelto.»

Esta cuestión, señor presidente, más de una vez preocupó al pensamiento jurídico argentino y tuvo sus expresiones en el arte nacional en una obra que conmovió a la ciudad de Buenos Aires: *La mujer de Ulises*. El drama de la mujer cuyo marido ha desaparecido, que puede haber muerto y, sin embargo, tiene que esperar, como la mujer de Ulises la reaparición del que talvez nunca ha de reaparecer.

En el derecho comparado son distintas las soluciones que se dan a esta misma cuestión, pero muy pocas del contenido severo de esta cláusula de la ley de matrimonio civil argentina.

En el derecho alemán una consecuencia natural del principio de la declaración de muerte, equivalente a la muerte misma, fué la disposición que frente a las segundas nupcias del cónyuge del desaparecido, declara la validez de esas segundas nupcias y la disolución del matrimonio anterior. Pero aun en ese derecho, que se inspira en la idea de que la declaración de muerte equivale a la muerte real, existen dos limitaciones: 1º) Que para que no sea impugnabile el segundo matrimonio, es necesaria la buena fe de los contrayentes en el sentido de que creían en la desaparición del cónyuge del primer matrimonio; si hubiere malicia en los que contraen el segundo matrimonio, al reaparecer el ausente, ese segundo matrimonio es impugnabile por nulidad; y, además, prevé que cualquiera de los cónyuges del segundo matrimonio, producida la reaparición del ausente, puede pedir la nulidad del segundo matrimonio para que subsista el anterior.

En el derecho francés —cuyas construcciones inspiran el ordenamiento jurídico argentino, con la salvedad de la disposición relativa a la apertura de la sucesión— el cónyuge del ausente que contrae nuevo matrimonio queda sometido a una acción de nulidad, con la aclaración de que dicha acción de nulidad sólo puede ser ejercida por el ausente cuando reaparezca, o por su mandatario, siempre que aporte la prueba de que el ausente vive.

En el derecho canónico la solución es que no puede contraer matrimonio el cónyuge del ausente, si es que la ausencia no está probada en forma indudable. Para la declaración canónica de ausencia, es condición inexcusable la prueba de la realidad de la misma respecto del desaparecido, aunque en la práctica moderna basta la «certeza moral» o una mayor probabilidad. Pero si el desaparecido viviera todavía, el segundo matrimonio es sin duda nulo, aunque goza del favor de derecho, propio del matrimonio putativo, si ambas partes, o una de ellas, obraron de buena fe.

Esta es la fuente inspiradora del actual Código Civil italiano, que admite el matrimonio del cónyuge del ausente pero supedita su validez a la circunstancia de que el ausente no reaparezca, porque si reapareciera valdría el primer matrimonio y no el segundo.

¿Qué es lo que resuelve el despacho que consideramos? Incorpora una solución sin precedentes en el derecho comparado que yo denominaré el «divorcio privilegiado *ad vinculum* peronista por mutuo consentimiento».

Lo grave de la cuestión es que a este propósito central se sacrifica toda la economía de la ausencia con presunción de fallecimiento, de manera que no es una garantía para el ausente el procedimiento en cuya virtud van a ser transferidos sus bienes a sus herederos, sin los recaudos suficientes para el caso de que su ausencia sea meramente temporaria y que reaparezca.

No es que esté conforme con la limitación de los términos para iniciar la acción por ausencia con presunción de fallecimiento. En este sentido, no ha innovado la comisión, porque tanto el proyecto de reformas del código, como algunas iniciativas parlamentarias y la doctrina en general, están de acuerdo con que se limite el término de la desaparición, que se computa a partir de la última noticia, en los casos ordinarios, para poder iniciar el juicio de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.

Pero lo que quiero enunciar, para que se comprenda bien cómo funciona esta institución, es la aplicación de las normas proyectadas a un caso concreto. Se presenta ante los tribunales el 19 de febrero de 1955 una persona casada, pidiendo la declaración de ausencia de su cónyuge y manifestando que ese cónyuge ha desaparecido en 1948; el juez acoge la acción, le nombra al ausente un defensor o le da intervención al defensor oficial, ordena publicar edictos una vez por mes durante seis meses, sin que se enuncie en la ley en qué diarios y cuál es la publicidad de esos diarios; la prueba, por serlo de un hecho negativo como es la no presencia o la falta de noticias del ausente, tiene que ser una simple información, pues muy pocos elementos hay para probar los hechos negativos,

y al cabo de seis meses de publicidad, el cónyuge denunciado como ausente no comparece al juicio y entonces se dicta la sentencia constitutiva de ausencia con presunción de fallecimiento. Y como este despacho dice que el día presuntivo de la muerte se establece en el último día del primer año y medio a partir de aquel en que se tuvo la última noticia, nos encontramos que en el supuesto que he planteado se establecerá como día presuntivo de la muerte del ausente el 30 de junio de 1950.

Mediante este procedimiento, que iniciado en febrero se termina en agosto o septiembre de 1955, ya en octubre el que obtuvo la declaración de ausencia podrá presentarse a los registros civiles de la República para contraer un nuevo matrimonio válido, y la ley, previsora en extremo, aclara que después de celebrado ese matrimonio la reaparición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio. Vale decir, que el cónyuge que se ha prestado para obtener lo que he denominado divorcio por mutuo consentimiento, aparecerá al día siguiente de las segundas nupcias de su otro cónyuge, liberado él también para contraer nuevo matrimonio. Indudablemente, que éste no va a ser un recurso fácil para la generalidad de las personas que tengan conflictos matrimoniales; pero va a ser la salida para más de una situación pública y notoria. Esto va a ocurrir, especialmente en circunstancias como las actuales, en que notamos una declinación de la moral y el sojuzgamiento de la justicia ya invocado por el diputado Latella Frías en este debate. Porque es esa justicia —ya intervenida en dos provincias argentinas—, que ha convalidado actos contrarios a la Constitución Nacional, el único dique que hubiera podido evitar que tales maniobras se consumaran.

Si éste no fuera el objeto de la reforma ¿cómo se concebiría que se hubiera organizado tan desaprensivamente la ausencia con presunción de fallecimiento y cómo se explicaría que técnicos en la materia hayan hecho esta confusión de instituciones para presentarlas todas juntas a los efectos de anarquizar el debate y permitir que el pabellón cubra la mercadería?

Afirmo que no existe en todo el derecho comparado una solución como la incorporada a este despacho; y no lo afirmo con la autoridad de mi palabra, ya que en la comisión pregunté a los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo que me indicaran cuál era la fuente del artículo 31 del despacho; en qué país del mundo se había aceptado una solución igual. Los señores asesores me contestaron que era una innovación, sin precedentes en el mundo, y que alguna vez a los argentinos nos correspondía el honor de innovar. ¡Vaya innovación!... ¡Pensar que ella se presenta en una ley que se denomina de amparo a la familia! Pensar que en el curso

de este debate hemos escuchado alguna importante exposición, en la cual se reactualizaba el verdadero sentido de la reforma de 1949 y se decía que era agregarle al concepto de «Estado de derecho» la nota de «Estado de derecho social», con argumentos que parecían olvidar otra nota igualmente evidente en todos los debates de la Convención Reformadora, y es que si se estaba construyendo en 1949 una nueva forma de Estado de derecho, tendría que ser calificado de «Estado de derecho social cristiano». Así surgía de las palabras del señor diputado por Corrientes, que además criticaba a un sociólogo alemán que se refería a un desdibujamiento del parentesco y de la familia. ¡Pero si asomamos a la realidad argentina, encontramos que esa realidad está dándole a gritos la razón al sociólogo alemán: ayer, cuando tratábamos la ley de filiación; hoy, cuando introducimos esta nueva causal de disolución del matrimonio; y mañana —no sé si hoy mismo—, cuando introduzcamos alguna otra modificación, tendientes todas ellas al desdibujamiento de la familia!

Esta vez, en este agravio que se hace a la institución de la familia, tal vez como otro episodio del desencadenamiento de los agravios y de los ataques a la Iglesia, no puede ampararse el Poder Ejecutivo...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Fassi. — ...diciendo que es un enfrentamiento de organismos profesionales con la Iglesia. Es un acto emanado del Poder Ejecutivo e inspirado en el propósito evidente de introducir la primera cuña en la solidez del matrimonio y de la familia argentina.

Sr. Bustos Fierro. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Fassi. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Sin ánimo, por cierto, de tratar de encauzar la exposición del señor diputado fuera de los términos en que él estime prudente realizarla, quiero hacerle notar al señor diputado que en toda su exposición —que he venido siguiendo atentamente—, hasta este momento, no se ha referido para nada a las hipótesis que la ley prevé.

El señor diputado ha recurrido, desde el comienzo hasta este instante, a la «hipótesis del absurdo», no a la hipótesis que funciona cubriendo la normalidad de los casos que la figura jurídica ampara, sino a la del absurdo, que, como el señor diputado sabe, como hombre de derecho, puede funcionar en todas las instituciones jurídicas prescritas por el derecho positivo. No hay ninguna figura del derecho positivo en que la hipótesis del absurdo no pueda entrar a jugar, a punto tal, de des-

truir la institución misma con argumentos que, en definitiva, tienen en realidad un sentido retórico o imaginativo más que de otro carácter.

El señor diputado no se ha ocupado en absoluto hasta el presente del problema que la ausencia genera ni de los varios problemas de la específica ausencia con presunción de fallecimiento, que es una vieja institución del derecho civil argentino y que en los muchos años de vigencia del Código Civil ha podido dar lugar también a esta «hipótesis del absurdo», a los fines de los intereses patrimoniales.

De la misma manera que el señor diputado acaba de presentar la hipótesis de un matrimonio que llega a los lindes de la inmoralidad que supone la hipótesis que ha introducido el señor diputado para hacer jugar su crítica, de la misma manera se puede introducir, en el juego de la institución de la actual ausencia con presunción de fallecimiento, del Código Civil, la hipótesis de matrimonios que a los fines patrimoniales hicieran combinaciones de esta especie.

Sr. Fassi. — Le ruego que no ocupe todo el tiempo que se me acuerda para mi exposición.

Sr. Bustos Fierro. — Si esa combinación se hiciera ahora a los efectos, repito, de disolver el vínculo matrimonial, yo afirmo que en el estado de conciencia social que ha adquirido el país, que en el estado de conciencia social, jurídica y moral que existe en el mundo entero, ese caso no interesa a la ética y al orden jurídico colectivo.

Este paradigma que el señor diputado ha venido dibujando a través de su exposición, el del absurdo, para enjuiciar una institución legislativa, a los fines del derecho positivo y de la intención del legislador, estaría repudiado y al margen de la ética común, y, desde luego, no interesa a la sanción legislativa.

Invito, en consecuencia, al señor diputado, con quien hemos debatido ampliamente en el curso de las reuniones de la comisión las premisas y las tesis contenidas en este proyecto, que se refiera concretamente al caso normal de la ausencia, a los problemas que genera para los directa o indirectamente afectados por la institución. Los problemas de la ausencia con presunción de fallecimiento, en este momento en que el mundo se ha achicado, en que las comunicaciones, por el avance de la técnica, se realizan con una premura extraordinaria por el mundo entero, no pueden ser juzgados con los mismos patrones que hace ochenta años lo fueron en el código de Vélez Sársfield.

Sr. Fassi. — El señor diputado está en la lista de oradores...

Sr. Bustos Fierro. — Me permito invitar al señor diputado para que se coloque en la hipótesis normal que contempla el código, ad-

virtiéndole que la hipótesis del absurdo —de que ha hecho juego y gala, y a los fines que indica— no podrá funcionar de ahora en más en el derecho positivo argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — Debo destacar que no se ha intentado, en la larga exposición que ha introducido el señor diputado en mi discurso, la demostración de que la hipótesis que he planteado fuera imposible. Se la califica de absurda, y yo contesto que un texto absurdo sólo puede proponerse un resultado absurdo.

Es absurdo que a esta altura de la ciencia jurídica se nos ocurra a los argentinos ser innovadores, para establecer el principio del artículo 31 que favorece la maniobra que he expresado claramente en este debate.

La interrupción se produjo justamente cuando iba a demostrar que todo el sistema de la ausencia con presunción de fallecimiento ha sido construido deficientemente, simplemente para poder engarzar la joya del artículo 31, que permite la disolución del matrimonio como consecuencia de la ausencia con presunción de fallecimiento.

Voy a comenzar mi análisis, hasta donde me permita el tiempo.

—Suenan la campanilla que indica que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Sr. Presidente (Benítez). — Ha vencido el plazo de que disponía para hacer uso de la palabra el señor diputado por la Capital; se compensan, después del vencimiento del término acordado al señor diputado por la Capital, los dos minutos y medio ocupados por la exposición del señor diputado por Córdoba, pero la Presidencia se cree obligada a hacer esta manifestación ya que el señor diputado por la Capital expresa el propósito de comenzar su exposición...

Sr. Fassi. — No, señor presidente; no voy a comenzar mi exposición. Intentaba robustecer mi argumentación demostrando que al propósito de facilitar un juicio rápido de disolución del vínculo matrimonial, se sacrifica toda la institución de la ausencia con presunción de fallecimiento. Pero no lo voy a hacer porque, como tengo entendido que el señor diputado Bustos Fierro es el último orador de la lista, estoy seguro que me concederá la interrupción para evidenciar que a partir del artículo 15, todos los artículos que componen este capítulo de la ausencia con presunción de fallecimiento son técnica y jurídicamente insostenibles.

Termino, y la manera como debo hacerlo es la mejor demostración de que los asuntos de

esta jerarquía necesitan una mayor latitud en su tratamiento legislativo, porque de lo contrario, las demostraciones que deben servir para ilustración de la Honorable Cámara no pueden seguir en todo su desarrollo a instituciones de la trascendencia de la que estamos considerando. Pero quede en pie la interrupción, que ejercitaré en su oportunidad, para que el señor diputado Bustos Fierro me devuelva los dos minutos y medio medidos con el mismo reloj con que la Presidencia los midió al señor diputado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Labanca. — Confieso, señor presidente, que las breves palabras que iba a pronunciar a continuación de las del señor diputado por la Capital han quedado por completo desarticuladas. Yo esperaba del señor diputado un discurso que versara sobre el articulado del proyecto en el aspecto de la regulación legal de la ausencia con presunción de fallecimiento. En su discurso, sin embargo, no se ha referido casi para nada al proyecto que está a consideración de la Honorable Cámara y, en cambio, ha recorrido panorámicamente los problemas que plantea este instituto en el derecho comparado, desde sus orígenes hasta la formulación de hipótesis que yo también me animo a calificar de extrañas.

La institución que estamos considerando se presta, en efecto, para el planteamiento de los más variados problemas jurídicos, lo cual debiera haber constreñido la exposición del señor diputado, que es precisamente lo que no ha ocurrido. El método que han aplicado para tratar el problema los señores representantes de la Unión Cívica Radical no concuerda, por otra parte, con la trascendencia del tema, el que, aunque no la tenga mucho en la práctica, sí la tiene, y de manera extraordinaria, frente a sus conexiones con los más diversos planteos de derecho civil.

El señor diputado por Córdoba manifestaba, por su parte, estar de acuerdo con la reforma parcial del código y que ésta penetraba por la ventana de sus instituciones. A esto replico que en épocas revolucionarias —los señores diputados de la oposición no parecen advertir que vivimos una revolución— es precisamente este el método más indicado, el más apropiado para la reforma. Y no vaya a pensarse por ello que el peronismo, o el Poder Ejecutivo, o este mismo Parlamento no estén empeñados en la reforma completa de nuestro viejo código; actualmente existe un anteproyecto impreso de Código Civil del cual se han tomado casi literalmente las disposiciones que el señor diputado Fassi ha creído improvisadas e interesadas

para cohonestar fines ocultos o no sé qué raras hipótesis planteadas por él.

Nosotros, señor presidente, creemos que así como la Francia revolucionaria tuvo su período legislativo intermedio, en el cual fué reformado el antiguo derecho y las viejas costumbres, mediante leyes que se referían a institución por institución, período que se extendió por decenios, hasta completar la elaboración de los principios que luego informarían el Código Napoleón, del mismo modo este Parlamento de la revolución nacional necesita ir tomando institución por institución en sus momentos oportunos para componer todo un conjunto de leyes cuya doctrina sea la base del futuro Código Civil de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y lo que los señores diputados de la oposición no alcanzan a ver: toda nuestra labor y todo nuestro empeño tienden a la reforma de la legislación con unicidad y ajustado criterio revolucionario. Es el fundamento primero que tienen todas las reformas parciales que introducimos a nuestras instituciones, a las que no acometemos por la ventana, sino que las afrontamos abierta y claramente, inspirados en lo que nosotros llamamos con orgullo, la Doctrina Nacional peronista. Este es el camino que seguimos, institución por institución, reforma tras reforma. No hay improvisación parlamentaria, ni fines ocultos. Puedo afirmar que el texto de los artículos que componen este capítulo referente a la ausencia con presunción de fallecimiento es el mismo que contiene el anteproyecto de Código Civil para la República, redactado en el Ministerio de Interior y Justicia de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Latella Frías. — ¿Me autoriza una interrupción el señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Labanca. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Latella Frías. — Las expresiones del señor diputado confirman la afirmación que he hecho, de que las reformas que se proyectan a las leyes fundamentales de la República son parciales. Esto que el señor diputado llama la revolución, que marcha y contramarcha, que va adelante y atrás...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Latella Frías. — ...es la mejor demostración de que es exacto que no hay un sistema jurídico, que no hay un lineamiento social y que todo va a la deriva; que esto no es sino la quiebra del derecho, la liquidación de las

instituciones y la muerte de la tradición jurídica de la República.

Sr. Rocamora. — ¡Qué descubrimiento ha hecho el señor diputado por Córdoba! ¡Que el proyecto que estamos tratando no es una reforma total!

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Labanca. — La única contramarcha que se advierte es la que hace el partido a que pertenece el señor diputado.

Sr. Perette. — La contramarcha va a ser el ataque que están haciendo a la Iglesia, y cuando nos den de contrabando la ley de divorcio.

Sr. Labanca. — Señor presidente: desde la sanción del código hasta la fecha no sólo se han reformado, por medio de leyes especiales, artículos del mismo, sino instituciones completas, como la del matrimonio civil, la del registro civil, etcétera, por lo que no es valedero el argumento de que seguimos un método equivocado, sino que hacemos lo que corresponde y lo que conviene al país.

Entrando en materia, debo manifestar que, efectivamente, esta institución de la ausencia con presunción de fallecimiento no era conocida en el derecho romano, ni en la vieja legislación española, ni tampoco en el antiguo derecho francés, sino que tiene origen en el derecho germánico, el que la caracteriza dando a la muerte presunta la trascendencia y los efectos de la muerte real, mientras que el derecho francés elabora a su turno la doctrina distinta que ha inspirado en gran parte a nuestro codificador.

Sin embargo, entre los dos sistemas, el legislador optó en su momento por una solución argentina, como dijo el señor diputado Fassi. Pues bien, al reformar hoy ese capítulo del código civil, el legislador peronista opta también por una legislación argentina, que es la que conviene. (*Aplausos.*)

No obstante, señor presidente, las observaciones del señor diputado por la Capital, no veo cuál es la originalidad absoluta del artículo 31 del despacho, que tanto le preocupa y cuyo torcido alcance ha señalado reiteradamente.

El código italiano en el artículo 65 establece, en efecto, que ejecutoriada la sentencia que declara la muerte presunta, el cónyuge puede contraer nuevo matrimonio. Y el código suizo...

Sr. Fassi. — Siga leyendo el artículo del código italiano; no lo lea fragmentariamente.

Sr. Labanca. — ...dice en el artículo 102 que el cónyuge de una persona declarada ausente no puede contraer nuevo matrimonio antes de que el juez disuelva el precedente, pudiendo demandar dicha disolución con la declaración de ausencia o por acción separada.

Lo que el señor diputado Fassi quiere es que diga cuáles son los efectos que puede aparejar la mala fe del cónyuge que hace un uso ilegítimo de esta institución o la de los contrayentes que proceden en fraude de la ley.

Es la propia ley de matrimonio civil la que da solución a este problema, y aun cuando no lo establezca la ley de ausencia, como podría ser de otro modo, porque no se refiere al matrimonio, sino simplemente a los efectos de la declaración de muerte presunta de uno de los cónyuges, las causas de anulación de aquél y las respectivas acciones habrá que ir las a buscar al capítulo XII de la ley de matrimonio, cuyas disposiciones y todas las demás concordantes de la misma y del Código Civil, permitirán hallar, como he dicho, la solución justa y adecuada para esos supuestos fraudulentos. Un intérprete honesto puede encontrar, así, la norma jurídica que posibilite la anulación de un matrimonio que ha sido contraído de mala fe; esto es, por ejemplo, con conocimiento de la existencia del presunto muerto.

En lo que se refiere a la prueba de la ausencia, que también ha criticado el señor diputado, la disposición es análoga a la vigente; y en lo que respecta al cómputo del plazo del año y medio y a la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio seis meses después —no sé cómo sacaba las cuentas el señor diputado—, debe advertirse que es condición para el ejercicio de la acción de declaración de fallecimiento presunto, el transcurso de tres años como mínimo sin noticias del ausente. Una cosa es que se fije como fecha presuntiva del fallecimiento el último día del primer año y medio de ese plazo en los supuestos ordinarios y otra cosa es la condición del transcurso del mismo para poder ejercerse la acción.

Por último, señor presidente, la reforma al régimen de la ausencia sigue en general las enseñanzas de la doctrina de nuestros autores, los cuales se inspiran casi unánimemente, al tratar esta materia, en la extraordinaria obra de Salvat.

Al formular el examen crítico del sistema del Código Civil al final del capítulo sobre ausencia, el doctor Salvat critica la fijación del doble período de la posesión provisional y de la posesión definitiva, y sostiene que es necesario no solamente acortar los plazos, sino suprimir la primera por innecesaria, agregando que en todos los casos de fallecimiento presunto debiera abrirse el juicio sucesorio como en los de muerte real.

Desde el punto de vista exclusivamente teórico, cabe observar aún —dice— la falta de lógica que hay, como lo hace nuestro código, en reputar muerta una persona y mantener al mismo tiempo en cabeza de ella, la propiedad de los bienes que le pertenecían. Frente a la

presunción legal de muerte, la ley opone, así, la ficción de su vida, dos cosas que parecen inconciliables ante la razón y ante la realidad de los hechos. Pensamiento que quizá pudiera completarse, pues si la reforma debe tender en lo que se refiere a las relaciones patrimoniales, a dar a la declaración de muerte presunta un sentido más real, con tanta mayor razón debe eliminarse la ficción de vida, a los efectos de las relaciones personales de los cónyuges, cosa que parece, como dice Salvat, inconciliable con la razón y con la realidad de los hechos.

De este modo, toda la argumentación que gira alrededor del artículo 31, desde estos puntos de vista, parece completamente artificiosa, pues se ha visto en dicho artículo lo que el mismo no dice.

Para terminar, y —de paso— dado el escaso tiempo que me resta, debo decir que las modificaciones principales que el proyecto introduce en la legislación vigente, aparte de que legisla sobre la simple ausencia y establece normas sobre curatela, lo que era preciso para llenar un vacío de la misma, son: primero, reducción de los plazos; segundo, supresión de los institutos de la posesión provisional y posesión definitiva, los que habían llevado a nuestros intérpretes, e inclusive al Código Penal (artículos 1.310 y 1.311), a hablar de sucesión provisional y sucesión definitiva; tercero, transferencia a los herederos de los bienes del presunto fallecido, por el hecho de la declaración de su fallecimiento; cuarto, institución de la prenotación e impedimento para enajenar o gravar esos bienes sin autorización judicial; quinto, libre disposición de los bienes, una vez transcurrido el plazo de cinco años desde la fecha del fallecimiento presunto; sexto, fijación de la hora presuntiva del fallecimiento, para los supuestos de conmorienencia; séptimo, superación de la inadecuada redacción del artículo 125; octavo, supresión de algunos recaudos legales innecesarios, como la prueba de que el ausente «haya sido gravemente herido» o de que «hayan muerto varias personas», con lo que se contemplan casos como el ocurrido en las Islas Orcadas (registrado en la revista «Jurisprudencia Argentina», tomo 3, página 648); y, noveno, posibilidad de contraer nuevo matrimonio, con lo cual se completan los efectos de la muerte presunta, acomodando la vida humana a la realidad de los acontecimientos.

Al dar término a mi exposición quiero destacar, una vez más, que nuestro partido cumple con su plataforma y con sus objetivos, integrando día a día una legislación cada vez más progresista. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pellerano. — Señor presidente: el proyecto del Poder Ejecutivo, que la Cámara tiene a

consideración, evidencia una vez más la amplia compenetración del excelentísimo señor presidente de la Nación con los problemas que inciden en la vida de relación.

La mente más obcecada no podrá dejar de reconocer que en el transcurso de estos diez últimos años se ha operado en todo el ámbito del país una honda transformación social, política y económica.

La legislación social argentina, inspirada por el general Perón, ha superado a aquellas de otras naciones que hasta ayer se consideraban depositarias del acervo cultural de la civilización occidental.

El espíritu profundamente humanista que anima al gran conductor de la nacionalidad encontró resistencia, no sólo en ciertos sectores de la opinión, sino también en las instituciones estructuradas bajo la égida de la Constitución del 53.

Era preciso, impostergable, para realizar la obra reparadora de injusticias atávicas, promover la modificación de nuestra Carta constitucional, influenciada por el liberalismo preponderante en el siglo XVIII. Los derechos consagrados por la Constitución del 53 fueron falsamente interpretados o tergiversados, permitiendo, ante la pasividad de la acción estatal, que un grupo de privilegiados ejerciera una verdadera hegemonía política, social y económica en provecho propio y en detrimento de los intereses del pueblo.

La revolución del 17 de octubre de 1945 no fué, como algunos hubieran deseado, un simple cambio del elenco gubernativo para mantener la estructuración del Estado surgido de la Ley Fundamental del 19 de mayo de 1853. El general Perón, con certera visión de estadista, percibió que la Argentina no podía marchar hoy por los carriles de un liberalismo agonizante, y desde la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión emanaron los primeros decretos leyes de inconfundible contenido humanista, puesto que tendían a la dignificación moral y material del hombre trabajador.

La obra posterior del general Perón no se ha apartado un ápice de los principios cardinales sustentados en aquellas horas iniciales. Su destacada acción de gobierno va jalonando etapas irreversibles en la evolución social, política y económica de la Nación.

La doctrina purificadora del Justicialismo no se ha limitado únicamente al campo social y económico. Es una concepción integral, cuyo fin no es otro que el de lograr la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y, como un medio para la realización de esos objetivos, es evidente la necesidad de promover una modificación en la legislación de fondo, tendiente a dar a las instituciones que rigen la vida civil una mayor solidez moral y material.

El proyecto de ley que ha llegado al seno de esta Honorable Cámara abarca diversos tópicos, pero todos ellos íntimamente vinculados a la célula primaria de la sociedad, o sea a la familia.

Los oradores que me han precedido en el uso de la palabra se han ocupado del examen de las disposiciones relacionadas con el menor que ha incurrido en la comisión de un hecho delictuoso, con las referentes a la ausencia con presunción de fallecimiento y con el régimen que establece el bien de familia.

Por lo tanto, y para no incurrir en repetición de conceptos, mi disertación se concretará al comentario de los artículos 51 y siguientes del proyecto sometido a la decisión de esta Honorable Cámara. Lejos de mi ánimo entrar en argumentos eruditos, con acopio de antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. La sola lectura del mensaje del Poder Ejecutivo es suficiente para demostrar la bondad de las prescripciones citadas precedentemente.

Las disposiciones del Código Civil que inciden sobre las cuestiones relacionadas con el régimen sucesorio, especialmente en cuanto al patrimonio dejando por el causante y que constituye el acervo hereditario, resultan, en la actual evolución de nuestro derecho positivo, anticuadas y en algunos casos injustas, tal como se puntualiza en el capítulo V del mensaje del Poder Ejecutivo.

El lapso de cinco años prescrito en el artículo 2.715 para mantener la indivisión forzosa de los bienes en virtud de un acto de última voluntad o por convención de los herederos, se extiende al término no mayor de 10 años.

La complicación de la vida moderna, la complejidad de los intereses en juego y el propósito de mantener la cohesión de la familia, han hecho indispensable ampliar el término señalado en la disposición del Código Civil ya citada. Además, debía contemplarse especialmente, el caso de la existencia de menores. El proyecto, interpretando fielmente los sentimientos de cualquier persona que con su trabajo ha logrado crear o acrecentar un patrimonio, lo autoriza a imponer a sus herederos la indivisión de bienes determinados, sea un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero o minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, hasta que todos los herederos cumplan la mayoría de edad, aún cuando ese tiempo exceda los 10 años. Ello no importa dejar librado al menor a la suerte de una mala administración, ya que la última parte del artículo 51 autoriza al juez a decretar la división cuando concurren circunstancias graves o de manifiesta utilidad y siempre que así lo solicite uno o varios coherederos.

Ya he expresado que los herederos pueden convenir que la indivisión se mantenga por un plazo que no exceda los diez años. El artículo 52 se refiere expresamente a la convención de los herederos, y la sola lectura de la disposi-

ción legal, destaca el interés de mantener la unidad de la familia, que en numerosos casos se disgrega por cuestiones de intereses. La división de bienes puede ser perjudicial a los propios intereses de los herederos, ya que la partición puede alterar o atenuar fundamentalmente la potencialidad económica del bien. La indivisión convenida entre los herederos no implica desconocer el derecho de éstos de efectuar una partición temporaria, respecto al uso y goce de los bienes.

En el caso de que hubiere herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes legales no tendrá efecto hasta la homologación judicial. No es necesario explicar que en esa forma se encuentran suficientemente resguardados los intereses de los herederos incapaces.

El artículo 53 autoriza a renovar los convenios al finalizar el plazo establecido, y ello es plausible si se advierte que la propia naturaleza del bien o bienes heredados puede exigir un estado de indivisión por un tiempo mayor. En el mismo caso que el artículo anterior, cualquiera de los herederos puede requerir la división del patrimonio antes del vencimiento del término de diez años, siempre que mediaren causas justificadas.

Se sobrentiende que en el caso de que los herederos no estuviesen de acuerdo con las causas aducidas por uno de ellos para solicitar la división de la herencia, corresponderá al juez de la sucesión apreciarlas y decidir la contienda, rechazando o haciendo lugar a la división antes de finalizar el plazo convenido.

El proyecto de ley no podía dejar de contemplar el caso de los cónyuges supérstites que se ven obligados, por imperio de expresas disposiciones del código civil, a efectuar la partición de todos los bienes del acervo hereditario, ante el requerimiento de los hijos. Son múltiples los casos planteados en los tribunales, y frente a lo dispuesto en el artículo 3452 del Código Civil, la resolución no podía ser otra que la de hacer lugar a la partición, aun mediando la oposición del cónyuge. El artículo 53 pone remedio a esta anomalía en los casos de tratarse de un bien que constituya una unidad económica, otorgándole al cónyuge el derecho a oponerse a la división por un término no mayor de diez años. Sólo pueden hacer uso de ese derecho tan justo los cónyuges que hayan adquirido o formado el bien en todo o parte. No obstante la oposición, el juez de la sucesión podrá autorizar el cese de la indivisión antes de la expiración del término fijado en el artículo, si concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifiquen tal decisión.

La ley no puede tener interés alguno en mantener la indivisión del bien si se prueba la existencia de causas graves que pueden poner en peligro los intereses de los herederos, o cuando

la partición puede aportar una mayor utilidad económica. Durante la indivisión, la administración del bien corresponde al cónyuge.

En la disposición se especifican los bienes que pueden ser materia de la oposición: establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero o minero o de una índole tal que constituya una unidad económica, y en la última parte del artículo se incluye a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos.

El artículo 54 determina que la indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros, sino a partir de su inscripción en el registro respectivo, y el artículo 55 expresa que los acreedores particulares de los copropietarios no podrán ejecutar el bien indiviso, sin perjuicio de que podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación que puedan corresponder al deudor.

Por último, el artículo 56 contiene una disposición que revela una amplia comprensión del problema que plantea el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El interés del fisco cede ante el de los herederos y no podía ser en otra forma, por emanar el proyecto de un gobierno que vela por la estabilidad social. El precitado artículo dispone que la Dirección General Impositiva acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto sin interés y con o sin fianzas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Nudelman. — Considera la Honorable Cámara una ley que se pretende llamar de bien de familia, menores y sucesiones, y que resulta en realidad un *potpourri* legislativo, aderezado con ingredientes que reforman artículos de los códigos de procedimientos civil, penal y comercial.

Cuando se sancionó el Código Aeronáutico, se fundó la urgencia en que era necesario reunir en un solo cuerpo todas las leyes dispersas sobre la materia, para darles claridad, precisión y concordancia, según el viejo precepto de técnica legislativa, facilitando así la adecuada aplicación por la justicia. Ahora, no sólo se agrupan materias sin ninguna vinculación entre sí, sino que se las dispersa de su legítima ubicación actual, volviendo obscura, imprecisa y discordante la norma jurídica, no tan sólo creando verdaderas dificultades para su recta aplicación, sino también obligando a los propios legisladores a la desubicación intelectual en el abordaje de tan dispares creaciones.

El proyecto trata de reformas parciales para el juzgamiento de menores. Con pulcritud de lenguaje se emplea la expresión «infracción jurídica», en vez de la de «delito» que usa la actual terminología del Código Penal; pero se olvidan en cambio reformas fundamentales que necesita el país sobre el particular.

En la misma ley, sin tener nada que ver en el asunto, se cambia la edad mínima para contraer matrimonio, y se legisla sobre ausencia con presunción de fallecimiento, sobre la constitución del bien de familia y sobre la indivisión de los bienes. Y se pretende sancionar todo eso con urgencia sorpresiva: ayer en comisión, hoy en la Cámara, sin posibilidad de la meditación necesaria, de la información y colaboración técnica de los estudiosos, de la prensa del país, de la doctrina y de la jurisprudencia. No hubo tiempo siquiera para el análisis responsable de reformas que transformarían en modo fundamental tan importantes instituciones jurídicas.

Con el tiempo que han perdido los doctos en fabricar este *mboyeré* legislativo —para usar el dulce lenguaje guaraní— habría podido hacerse una cosa seria, si serio y claro fuera el propósito de legislar sobre todo esto. Conocido el proyecto, el desconcierto fué de tales proporciones que en la sorpresa todo el mundo, legisladores y no legisladores, se preguntaban qué habrá detrás de esta nueva técnica legislativa, la que, a tenor de la nueva conciencia en marcha y de la abstracción incomprensible llamada Doctrina Nacional, pretende reestructurar la vida del país. Algunos se dedicaron a desentrañar el enigma. Pensaron que acaso en el artículo 31 estaba el secreto del *potpourri*, servido por una cortina de humo y en virtud del cual se obtendría el divorcio por el mutuo consentimiento, sin tener la valentía de presentarlo por la vía normal y corriente. ¿Habrá algún injerto después?, se preguntaban otros. ¿Es un propósito persecutorio, o simplemente la consecuencia de una reacción espasmódica en momentos tan particulares para la espiritualidad argentina?

La verdad es que todos estamos azorados. Es evidente que en el Parlamento de una democracia no se puede legislar así.

Los santos apóstoles de la nueva doctrina dieron a su turno una explicación. Unos dijeron que efectivamente era una particularidad legislativa: no tenía precedentes en el mundo; y ya era tiempo —agregaron— de que marcáramos rumbos en el concierto universal. Eso se dijo en comisión. Otros, más modestos en sus pretensiones, ensayaron decir en el recinto que se había olvidado que estamos viviendo una revolución.

Creemos que muchas instituciones jurídicas, en su incesante progreso, necesitan ser modificadas y ordenadas a tenor de la evolución de

los tiempos que corren. Pero eso debe hacerse con estudio y con meditación y, sobre todo, en clima de seguridad jurídica y con libertad, para que tengan valor de permanencia. No se puede improvisar en cuestiones tan importantes. Dijo alguna vez un confesor que, cuando algunos profesantes penetran al templo aparentando orar, hay que poner a cubierto el sagrario para saber qué negocio obscuro se traen envuelto entre las cuentas del rosario; yo espero que algún espíritu ilumine este recinto y que dentro de pocos minutos podamos decir cuál es el negocio que se trae oculto entre las cuentas de este *potpourri* legislativo.

En materia de menores, ya que tengo que hablar de la ley, los trece artículos del despacho no responden a las necesidades de la realidad social argentina. Las modificaciones que se proponen —substrayendo del Código Penal los artículos 36 a 39— tienden a aumentar la imputabilidad hasta los 16 años y a dar un régimen especial de juzgamiento entre los 16 y 18 años y uno diferente de ejecución entre los 18 y los 22 años.

Nada se dice sobre las medidas de protección y de dirección, sobre la patria potestad, sobre las condiciones de detención y reclusión, sobre los establecimientos necesarios, ni sobre el tribunal de menores y personal especializado que debe estudiar con responsabilidad moral la personalidad del menor, su educación y readaptación a la vida social. El tribunal de menores es institución esencial para el juzgamiento de los menores. Cuello Calón afirmaba que el juez de menores, aparte de las condiciones morales, debía ser un psicólogo y tener conocimientos de medicina mental. Debía, además, estar asistido por juristas, maestros, profesores, y asistentes sociales en número suficiente y con medios económicos y establecimientos apropiados como para servir realmente el propósito de reeducación y defensa social que se persigue frente al menor en «infracción jurídica».

En el V Congreso Panamericano del Niño se estableció la necesidad de recomendar de un modo muy especial a los gobiernos de los países representados la creación y organización, en forma definitiva y estable, de tribunales especiales para menores que tengan por objeto el conocimiento de todos los casos en que intervienen los niños como autores o como víctimas de actos cometidos por mayores que puedan constituir delitos o contravenciones a la ley. El juez integrante de ese tribunal —se dijo—, más que funcionario encargado de administrar justicia ha de ser amigo y consejero del niño; podrá ser persona de uno u otro sexo, mayor de treinta años, que se haya caracterizado por su obra de protección infantil; pero, sobre todo, deberá tener conocimiento sobre aquellas materias que permitan una mayor comprensión del alma infantil.

La mayoría de los autores coinciden en aceptar la importancia de factores patológicos individuales y sociales múltiples en el estímulo criminógeno. Por eso la prevención y reeducación debe fundarse sobre bases científicas, lo que exige tener conocimientos especializados, y al mismo tiempo noble pasión, en esta clase de disciplinas.

Las estadísticas de Collin, Colombier, Ordall y Rhot Gruhle asignan porcentajes que oscilan entre el 45 y el 75 por ciento para los factores patológicos. Leónido Ribeiro afirma que todos tienen algún factor patológico. Arenaza, el gran médico que consagró parte de su vida al estudio de estos problemas, señala entre nosotros un 49 por ciento de anormales. Rousseau sostenía que el niño nacía bueno y que era la sociedad que lo pervertía. Lombroso, exagerando sin duda el factor antropológico, decía en cambio que el niño nacía pequeño delincuente y se modificaba en la vida social. Freud, sobre la base de estudios neurológicos, hacía residir el factor delictuoso en los conflictos instintivos. De Sanctis sostiene que entre los más pequeños existe mayor porcentaje de anomalías personales y que, a medida que se aumenta en edad, predominan los factores sociales. Es a éstos a quienes hay que oponer especialmente los remedios sociales, para crear el medio económico, moral y social que evite la posibilidad delictual.

Los autores y las estadísticas coinciden con Ellen Key en que la vida doméstica destruida, el sistema escolar falto de criterio, la desintegración del hogar, sobre todo en la parte paterna, y las uniones ilegítimas, son los que dan un mayor porcentaje de delincuencia infantil.

Arenaza, en el relato al Congreso de Criminología, afirmaba que las reacciones antisociales de los menores no son sino el síntoma de las dificultades de la familia, del hogar, de la escuela y del ambiente, que obran sobre el niño, perturbando su desarrollo y su adaptación social, con tanta mayor eficacia en cuanto se ejercen sobre organismos debilitados por afecciones adquiridas o transmitidas por sus progenitores.

En gran porcentaje de casos, hay que ir a la solución del problema por medio del internado; pero no es ése el único medio. Grace Abbot sostuvo en un trabajo presentado en el Congreso Panamericano del Niño que sólo el 10 por ciento de la delincuencia juvenil reclamaba internación; los demás necesitan únicamente asistencia médicosocial, que puede ser hecha mediante libertad vigilada.

La ley 10.903, que estimuló la patria potestad como un deber de los padres, modificó el viejo concepto romanista del Código Civil, que establecía la obligación de alimentos por los padres con respecto a sus hijos, pero nada más. No hay sanción frente al abandono moral o material y sus lógicas consecuencias: la vagancia,

el vicio y el delito. La acción, incluso de alimentos, sólo la inicia el afectado; casi nunca el ministerio pupilar.

Por el artículo 18 de la misma ley 10.903, dictada el 21 de octubre de 1917, para el caso de que un menor de 18 años fuera acusado o sea víctima de un hecho que no importe delito del derecho penal, el juez podrá imponer a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada, con respecto a ese menor, multa de hasta 200 pesos o arresto hasta de un mes, o ambas penas a la vez.

Esta ley, que fué resultado del esfuerzo de aquella figura ejemplar de nuestra medicina, el doctor Luis Agote, recientemente fallecido, establece que cuando los jueces sobresean provisional o definitivamente a los menores de 18 años, cuando los absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de 18 años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años, si se hallare material o moralmente abandonado en peligro moral.

En el artículo 22 se habla del plan general de construcciones de establecimientos de prevención, de escuelas reformativos, de colonias escuelas, y de colonias reformativos para prevención y reforma de los menores por la educación y el trabajo.

La verdad es que desde el año 1917 —ya van transcurridos casi 40 años— no se han aumentado, a pesar del aumento de la población y de la delincuencia infantil, los establecimientos que en aquel entonces se construyeron como consecuencia de la ley; al contrario, desde 1943 se fueron destruyendo y desorganizando los pocos existentes, como lo voy a demostrar.

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente 1ª de la Honorable Cámara, doña Delia D. Degliuomini de Parodi.

Sr. Nudelman. — En un país cuyo presupuesto anual excede los 20.000 millones de pesos y donde, según se dice «los únicos privilegiados son los niños», lo único que existe es lo que se ha construido hace casi 40 años. Ya veremos, señor presidente, cómo se ha cumplido la ley. Sólo quiero decir desde ahora que la alcaldía de menores no sirve su verdadera finalidad, ni mucho menos. Allí deberían ingresar los menores por muy corto tiempo, y separados convenientemente, para ser sometidos luego a los exámenes físicos y psicológicos antes de entregarlos a los padres o tutores o de darles destino en establecimientos adecuados. Esa alcaldía no es hoy un establecimiento transitorio, ni se encuentra en condiciones técnicas ni de higiene medianamente aceptables. Depende de la Policía Federal, en vez de depender directamente

del Patronato de Menores. El clima moral allí imperante malogra el propósito de prevención y corrección que persigue la ley.

Allí viven los menores en vida promiscua; su estado no es provisoria: podría citar casos concretos de niños de edades distintas, que viven en ese ambiente de delincuencia, proclive al contagio delictuoso, desde hace 3 y 4 años.

Los de mal comportamiento son enviados al establecimiento llamado El Retiro, que antes constituía un anexo de la colonia Ricardo Gutiérrez, de Marcos Paz, en olvido total del verdadero objetivo que, dentro de su plan integral, perseguía esa colonia modelo de reeducación, citada en su tiempo como ejemplo en el mundo, y en la que tuvo activa participación organizativa el probo magistrado de singular vocación por el problema, doctor Jorge E. Coll.

Allí van hoy, como desperdicios humanos, a vivir en promiscuidad, sin criterio selectivo, menores de 14 a 18 años, comprometiendo la recuperación social del futuro ciudadano. Esa es la realidad de lo que ocurre allí y en los otros establecimientos de menores, tanto de varones como de mujeres. Sin embargo, el mensaje afirma que «este gobierno despliega energías como nunca se ha hecho hasta ahora para redimir a los niños y jóvenes que, tal vez impelidos por un ambiente social nocivo, cayeron en infracción».

Invito a los señores diputados a que visiten esos establecimientos, y tendrán oportunidad de comprobar la verdad de mis afirmaciones: verán cómo se están malogrando los propósitos de una ley de prevención y reeducación que tendía a asegurar legítimos derechos del menor y su bienestar físico y espiritual.

He querido analizar —aunque sólo sea dentro del poco tiempo de que dispongo— algunos aspectos actuales de la política en materia de menores, para ubicar el problema. Este proyecto no contiene las soluciones que reclama perentoriamente la enorme población infantil necesitada de la protección tutelar del Estado. Se hace necesario legislar, agrupando la legislación, la política preventiva y correctiva de los establecimientos, del tribunal de menores, del personal especializado, de las normas del procedimiento, etcétera. Nada de eso se dice. En lo que interesa, no se mejora la legislación existente. Parecen artículos sueltos de un proyecto sobre menores, evidentemente injertados en la ley para servir otro propósito. La ley actual no es completa. Muchos menores quedan fuera del amparo necesario de la protección moral y social. Pero es evidente que si funcionaran como corresponde la ley penal y los institutos creados por la ley 10.903, con la dirección abnegada y ejemplar con que lo hicieron los doctores Jorge Coll y Carlos A. Arenaza desde la presidencia del Patronato de Menores, mucho habríamos andado a la fecha por el ca-

mino de las grandes soluciones. No se trata de modificar únicamente el régimen de la minoridad y forma de juzgar a los menores.

Decían Coll y Gómez, en su proyecto de código penal, que no se trata de declarar inimputables a los menores de 18 años, desde que la inimputabilidad en materia penal solamente tiene, ante la ciencia, un sentido procesal. Los menores que han cometido un delito pueden continuar siendo peligrosos, y serlo más todavía cuando lleguen a los 18 años. Es absurdo no prolongar la disciplina más allá de los 21 años. Y agregaban que debe tenerse substancialmente en cuenta la personalidad individual, la norma jurídica, la pena o la medida de seguridad.

Peco también señala la necesidad de estudiar el hecho cometido en vinculación con la personalidad, los móviles determinantes y el estado ambiental, sirviendo de base a un sistema de sanciones tutelares que van desde la libertad vigilada hasta la internación.

Este maestro de derecho penal distingue el menor de 14 años, y el menor de 18 y mayor de 14 años. Se traza una separación entre los menores de 18 años y los mayores de 18 años. Para los casos del moralmente pervertido o para el caso de revelar particular peligrosidad por su persistente tendencia a la comisión de hechos considerados delictuosos, propone prolongar la internación en el establecimiento diez años, más allá de los 22 de edad. Como se ve, en esos dos proyectos, siguiendo las tendencias más modernas, se fija para la acción tutelar del Estado un límite de edad mucho mayor que el fijado en el proyecto del Poder Ejecutivo.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

Sr. Nudelman. — Ya en el año 1925, un eminente magistrado, el doctor Octavio González Roura, que estudió estos problemas, presentó un plan integral y orgánico que concretó en un conocido libro. En lo fundamental proponía: irresponsabilidad penal absoluta hasta los 18 años; edad de transición entre los 18 y 22 años; en todos los casos la sociedad estaba perfectamente defendida —decía—, porque se substraía al menor de su seno y la autoridad podía disponer de éste por un tiempo mucho más largo que si hubiere condena.

Se daban al juez los más amplios poderes para decidir en cada caso sobre lo que más conviene al interés del menor y de su recuperación para la vida social; no puede decidirse nada sobre la suerte del menor sin escuchar la opinión de una mujer especializada que asiste al juez (la mujer, juez de menores); se substraen definitivamente al menor del Código Penal, del Palacio de Justicia y del Ministerio de Justicia, y

se hace intervenir al Ministerio de Salud Pública (no se habla allí de pena, de castigo, de tribunal ni de juez); un plan orgánico de acción preventiva respecto del niño, la familia y la sociedad (todo estaba previsto, desde los problemas del alcoholismo y las enfermedades infectocontagiosas crónicas, hasta el de los hijos adúlteros, sobre la base de que todos los niños tenían derecho a tener padre y madre); un plan curativo, que comprende la acción reformadora de los especialistas sobre el menor, los establecimientos adecuados, etcétera; se suprimía la actual Defensoría de Menores, verdadera agencia de colocaciones, sobre la base de que no debe aceptarse que el gobierno de la Nación, por intermedio de ese organismo anticuado, destine a los niños al servicio doméstico. Se suprimía igualmente la actuación del fiscal en los asuntos de menores, porque consideraba que no se trata de acusarlos.

Me permitiré, señor presidente, solicitar a esta altura de mi exposición la inclusión en el Diario de Sesiones de este plan de organización de la protección jurídica y social del menor.

En el proyecto del Poder Ejecutivo se propone un sistema de graduación de la inimputabilidad hasta los 16 años, régimen especial de los 16 a los 18, y régimen diferente de ejecución entre los 18 y los 22. No puedo detenerme en mayores detalles sobre la legislación comparada. Ya lo ha hecho, por otra parte, con precisión, el diputado Perette. Me bastará decir solamente que en este aspecto el proyecto tampoco está de acuerdo con la legislación más avanzada sobre la materia.

En el análisis comparado sobre delincuencia juvenil, hecho por las Naciones Unidas, se afirma categóricamente que en América latina la delincuencia de menores ofrece las mismas características que en todas las demás partes del mundo; esto es, tiene carácter progresivo y está determinada por causas que son, fundamentalmente, la miseria, la desorganización familiar y el abandono de los menores. Por lo tanto, su existencia y su aumento traducen la falta de una política adecuada al respecto.

En materia de edad penal, el principio moderno consiste en establecer una sola edad de minoría penal. El menor es siempre irresponsable, sin perjuicio de las medidas de readaptación que puedan adoptarse en su favor. Establecen este principio sólo nueve países y, en consecuencia, los nueve restantes, al mantener diversos periodos de minoría penal, se encuentran retrasados en el progreso.

El proyecto que consideramos establece precisamente esas distintas gradaciones que se critican.

En tales países —termina el informe— los menores no se encuentran siempre protegidos, ya que existe la posibilidad de que se les apliquen sanciones penales. La conclusión es que

dichos países deben modernizar sus legislaciones estableciendo una sola categoría de minoría penal.

Sr. Bustos Fierro. — Si me permite el señor diputado una breve observación...

No son recomendaciones de las Naciones Unidas, sino las conclusiones del informe de un juez chileno, el doctor Samuel Gajardo, presentado a esa organización mundial.

Sr. Nudelman. — Es un informe elaborado sobre la base del que cita el señor diputado por Córdoba y de otros informes más. Se trata de un estudio serio sobre delincuencia juvenil, hecho por el Departamento de Asuntos Sociales, División de Bienestar Social, de las Naciones Unidas, y editado en libro en Nueva York en 1952, el que pongo a disposición de la Honorable Cámara.

Coincidiendo con esos mismos conceptos, en la resolución de Bruselas de este año se establece que la idea de la reeducación debe ser dominante en el tratamiento de los menores delincuentes, después de haber comprobado que el elemento esencial reside en la manera en que las penas y medidas que se adoptan son ejecutadas, y que es muy difícil pronunciarse, en vista de la variedad de las legislaciones, en pro o en contra de la existencia de penas. Que para la elección de la medida, como de la pena, el criterio a considerar no debe ser jamás el de la gravedad del hecho sino el de la personalidad del menor, habida cuenta de la necesidad de la defensa de la sociedad. Que el límite máximo para la competencia de la jurisdicción minoril debe fijarse en dieciocho años, pero que sea cual fuere la jurisdicción llamada a estatuir después de este límite, es necesario que se establezca un régimen especial, tanto desde el punto de vista del procedimiento como de la ejecución penal, hasta los veinticinco años.

La legislación en general establece la inimputabilidad en el límite de los dieciocho años, unificando la minoridad porque se considera que hasta esa edad se es susceptible de cambios y reacciones opuestas, siendo necesario vigilar esas reacciones y las alternativas psicológicas en el trabajo y en la escuela, para discernir con criterio el debido tratamiento. No hay peligro en elevar la minoridad llevándola hasta los dieciocho años, en vez de los dieciséis que establece el proyecto, porque no se trata de declarar la inimputabilidad, ya que en el caso la edad, como ya dijimos, tiene sólo un sentido procesal.

Se dijo que entre las ventajas del proyecto estaba la de substraer al menor del ámbito penal. Es un principio plausible, pero cuando se hace eso para servir una legislación completa, cuando con sentido orgánico en un código del niño, como existe en muchos países de América, se trata de regular el conjunto del problema. Tal, por ejemplo, lo que sucede

en el gran país hermano del Uruguay. Pero en el proyecto del Poder Ejecutivo se substraen al niño del Código Penal sin dar en cambio el código que reclama una seria legislación sobre la materia. Es que no parece existir tal interés. El propósito oculto es otro; ya lo veremos.

Afirmo, señor presidente, que detrás de este proyecto, tal vez dentro de muy pocos minutos, se develará la incógnita. En forma de injerto vendrá la ley de divorcio, que no se animan a plantear como corresponde por la vía normal y corriente de toda legislación, con la previa y amplia difusión pública que merece un asunto de esa trascendencia.

La substracción del ámbito penal de todo lo referente al menor es legítima —repito—, pero para encuadrarla en un código integral del niño. La política criminal se orienta en general hacia la prevención del delito. Este concepto, sobre todo, es de fecunda aplicación en materia de menores, y ése es el criterio que debe orientar el código que se dicte alguna vez en protección del menor en peligro moral, donde juegan, aparte de los factores patológicos, los factores ambientales o sociales. No debe esperarse el hecho antisocial; hay que anticiparse al hecho descubriendo al menor en peligro potencial para la debida protección, ya sea internándolo en establecimientos adecuados o para disponer la libertad vigilada o la colocación familiar. Las medidas de protección y vigilancia deben ir más allá de los 22 años para adecuar científicamente los propósitos auténticos de la defensa social, siguiendo la evolución del tratamiento y modificando según convenga la índole de ese tratamiento en cada una de las evoluciones.

Todo ello reclama, junto con la flexibilidad de la ley, los medios económicos y sociales indispensables. En la dirección dos elementos son esenciales para perfeccionar la técnica del tratamiento: el Consejo de Asistencia Social o el patronato debidamente integrado, y los tribunales de menores; el primero, para vigilar los establecimientos y disponer la admisión del niño, adecuando los planes que más convengan a su formación.

El juez debe ser unipersonal según lo acepta la mayoría de las opiniones autorizadas. La opinión del juez debe forjarse con el asesoramiento médicopsicopedagógico y de asistencia social previa, para que pueda llenarse ampliamente el propósito tutelar de la ley. Cumplidas estas medidas, hay que enviar a los menores a establecimientos destinados sólo para ellos, evitando el contagio delictuoso en las primeras etapas. Después hay que ubicarlos en institutos que permitan el estudio completo de la personalidad, para mandarlos finalmente a las casas hogares del tipo modelo Ricardo Gutiérrez.

Se compensa todo el gasto que pueda demandar la construcción y atención de establecimientos

de esta naturaleza con las cárceles y los hospitales que se cierran, ya que cada una de esas unidades constituyen avanzadas en el progreso. El clima moral y económico del país es tal que las estadísticas demuestran que no son solamente los delincuentes quienes necesitan de la protección tutelar. De unos seis mil menores internados actualmente en establecimientos que dependen de la Dirección de Menores, sólo 800 están a la orden de jueces; los demás están en abandono físico o moral por falta de medios de los padres o por factores de desintegración de la familia.

La colonia Ricardo Gutiérrez estaba organizada bajo el sistema de verdaderos hogares. En cada hogar había treinta niños entregados a la dirección de un matrimonio convenientemente preparado para eso. Las diferencias de cada hogar permitían el adelanto progresivo de la corrección junto con el descubrimiento de la personalidad del menor. La corrección se hacía por medio del estudio y del trabajo.

Con el mismo objeto se fundó el establecimiento Santa Rosa, que alojaba mujeres menores de 18 años, en la primera etapa de su detención. Se las substraía así de la Correccional de Mujeres, que aloja a toda clase de delincuentes, desde las morales hasta las condenadas a perpetuidad por delitos comunes.

Se creó después el establecimiento Santa Rita, en Boulogne, con la misma orientación de la colonia Ricardo Gutiérrez. Estaba dirigido por hermanas de caridad.

El Patronato de Menores, que atendía un plan integral con sentido científico y moral, fué intervenido. Se lo transformó en una Dirección de Menores. Se cambiaron varios interventores que carecían de preparación para las tareas y sin concepto técnico sobre el trascendental problema. Se consideró que había que implantar en el hogar Santa Rita un ambiente social distinto después que se fueron las hermanas de caridad. Se crearon salones de baile para las niñas; todos vivían de fiesta corrida. Vino el desconcepto público. Más de setenta menores fugaron en pleno abandono moral. El establecimiento Santa Rosa se convirtió en una oficina pública, pasando a ser Santa Rita un establecimiento desquiciado que costará mucho trabajo rehacer para ponerlo al servicio efectivo de la reeducación de las menores desamparadas.

Mientras tanto, en la Correccional de Mujeres y en el Asilo San Miguel alojan hoy a todas las menores de 22 años, con verdadero peligro de contagio delictual. Además, con una falta de sensibilidad inexplicable en estos momentos, más de veinticinco dignísimas niñas universitarias están también alojadas en esa correccional a disposición del Poder Ejecutivo, lo mismo que los otros cuatrocientos estudiantes que en distintas cárceles del país purgan el delito de defender la libertad.

Sr. Miel Asquía.—Está mal informado el señor diputado.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Nudelman.—El que está mal informado es el señor diputado. Yo lamento, señor presidente, no poder entrar en los detalles de todo este régimen carcelario que ha sido desvirtuado, perturbado y desorganizado a tenor de la nueva conciencia en marcha.

No se puede articular una ley de menores sin estudiar con seriedad todo el problema.

Me permito llamar a la reflexión a los señores diputados con las propias palabras del presidente de la República, que el día 10 de junio de 1953, en el Segundo Congreso de Derecho Comercial, afirmó que en materia de legislación y, sobre todo, en legislación de fondo, hay que andar con paso lento y seguro. Los males que el apresuramiento puede acarrear en estos campos son imprevisibles y la prudencia más elemental aconseja, antes de decidirse por lo mejor, controlar nuestras costumbres con lo bueno hasta terminar el estudio racional y minucioso.

Ahora, con este proyecto, considerado a tambor batiente para servir sólo de cortina de humo, se pretende trastornar instituciones jurídicas fundamentales, comprometiendo el porvenir.

El vencimiento del tiempo me impide abordar otros aspectos de este problema y de las demás cuestiones que comprende este proyecto polimorfo. Termino, pues, diciendo, en síntesis, que es tan malo como todos los votados en las últimas hornadas y que merecieron nuestras críticas. Malo como el que se prepara para la entrega de los ferrocarriles, del petróleo y del uranio. Malo como el propósito oculto que lleva entre sus entrañas, comprometiendo la seriedad y limpieza con que se debe legislar en el Parlamento de una democracia.

Pero no importa; frente a todas las desesperanzas, pensamos con un gran escritor que en la cerrazón que nos rodea, hay de vez en cuando, sin embargo, grandes claridades que rasgan el espacio del mundo moral, y nos dejan ver, más allá de las fronteras de nuestras desilusiones, en las lejanías más remotas de nuestra percepción, los espigones de la tierra del futuro, dorados por el sol de grandes promesas y esperanzas.

Tenemos fe, señor presidente, en las grandes reservas del pueblo argentino y en el triunfo final de nuestra causa, la causa de la libertad y de la democracia, que permitirá legislar para bien de todos como mandan la libertad y la democracia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez).—Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro.— Señor presidente: como traigo la palabra de la Comisión de Legislación Penal para informar el despacho que la Cámara está considerando, quiero hacer presente que mi exposición esencialmente ha de dirigirse a ese aspecto del proyecto que consideramos, y he de hacerlo con la entonación y el examen de antecedentes que corresponde a la seriedad de instituciones legislativas que tienen que marcar un rumbo en la política que el Estado sigue con respecto a este importante sector de la vida social que son los menores.

Quiero significar con ello, señores diputados, que mi exposición habrá de ajustarse fundamentalmente a los conceptos que anuncio, tratando en la medida de mis fuerzas, de informar a la Honorable Cámara de la manera más cumplida que sea posible, sobre los alcances que tiene esta ley que sancionamos en la parte comprendida entre los artículos 1º y 13º del proyecto. De otra parte, tengo en cuenta que la interpretación judicial de esta legislación tendrá que hacerse oportunamente por los tribunales y por los letrados que habrán de aplicarla, para lo que, indudablemente, la introducción de tópicos extraños a la misma perjudica notoriamente la seriedad que debe tener un examen de este tipo.

Con todo, señor presidente, no me considero eximido de referirme también, así sea en forma circunstanciada, a algunos aspectos generales del proyecto en consideración, mucho más después de recibir la cordial invitación en su fondo, por más que ha sido estridente en su forma, formulada por el señor diputado por la Capital cuando me anunciaba su propósito de revancha frente a la interrupción que le solicité y me concedió. Anticipo que en el momento oportuno voy a conceder con el mejor de los gustos la interrupción que me ha pedido el señor diputado con tanta antelación, y anuncio que dada la limitación del término de que disponemos para hacer uso de la palabra, solicitaré a la Presidencia que le conceda al señor diputado interruptor en ese momento el doble del plazo de que hice uso en mi oportunidad.

Con referencia al aspecto que hace esencialmente a mi exposición, deseo significar a la Honorable Cámara que el régimen de menores incursos en hechos que la ley califica como delitos, constituye un paso trascendente en la legislación argentina, tal como lo precisa el mensaje del Poder Ejecutivo y tal como lo ha recalcado en su exposición de carácter general nuestro distinguido colega el señor representante de Mendoza, doctor Ventura González.

También quiero destacar a la Honorable Cámara que en las palabras de los señores diputados de la oposición este proyecto de ley ha sido en cierta manera subestimado con alcan-

ces que no hacen por cierto al mismo. Porque ha de tenerse en cuenta que esta iniciativa forma parte integrante de todo un anteproyecto sobre régimen legal de los menores de edad, anteproyecto que contempla todas las facetas del problema. Esto es, no solamente atiende a la reformatión de la ley de fondo, sino también contempla la instauración del tribunal de menores y la institución de los establecimientos específicos destinados en lo futuro a perfeccionar y a inaugurar nuevos tipos de establecimientos a los fines reeducativos y tutelares de los menores.

El Poder Ejecutivo lo puntualiza expresamente en su mensaje. No obstante que en la comisión hemos discutido continuamente durante tres días el proyecto en consideración, pareciera que los señores diputados de la oposición no han tenido oportunidad de detener su vista en el párrafo del mensaje en el cual el Poder Ejecutivo nos dice sobre este particular, de una manera perfectamente intergiversable, lo siguiente: «Las disposiciones legales que se proponen sintetizan principios de fondo aplicables a la materia y constituyen un anticipo a la reforma integral que sobre el régimen de la minoridad se tiene a estudio y se elevará oportunamente a la consideración del Honorable Congreso».

Vale decir que tanto en el proyecto elevado por la comisión redactora cuanto en la preocupación del Poder Ejecutivo está ya todo esto que ha sido motivo de una exposición de violenta exaltación por parte de los señores diputados en el sentido de que no nos han sido enviados juntamente con este aspecto de la reformatión de la ley de fondo otros aspectos complementarios. Se trata de aspectos que involucran inversiones de presupuesto, como también problemas atinentes a la selección de los jueces que por sus condiciones personales, pedagógicas, etcétera, deban constituir los tribunales de menores, y que involucran también una multitud de cuestiones técnicas a los fines de los establecimientos a los cuales habrán de ser destinados los menores. Insisto, señor presidente, en que se trata, como dice el Poder Ejecutivo, de aspectos que están a su estudio y que habrán de complementar en no muy lejano tiempo la reformatión de la ley de fondo en lo concerniente a esta materia.

Sr. Perette. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Bustos Fierro. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Sólo quiero advertir que, al informar el despacho de la minoría, dejé constancia durante mi exposición de que en el mensaje del Poder Ejecutivo se anunciaba la preparación de un estatuto integral sobre la minoridad, al

mismo tiempo que señalé nuestra discrepancia con este proyecto.

De manera que el sector de la Unión Cívica Radical no ha ignorado el mensaje en la parte a que se ha referido el señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Me complace la afirmación que hace el señor diputado por Entre Ríos, pero en ese caso, la representación opositora pudo haberse omitido todos los largos párrafos que ha tenido que escuchar la Honorable Cámara respecto a la circunstancia de que este proyecto era defectuoso.

Informo también a la Honorable Cámara que este anteproyecto, en cuanto atañe a la materia que estoy considerando, ha sido redactado por una comisión de hombres extraordinariamente versados en la materia, a los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha designado después de la primera reunión del Poder Judicial de la Nación celebrada en el año 1952. Cien años después de la Constitución Nacional originaria ocurre por vez primera, y bajo el régimen de Perón, la realización de la primera reunión del Poder Judicial de toda la Nación, para estudiar sus problemas específicos.

Entre las recomendaciones emanadas de esa reunión figura la de la reformatión del régimen de menores, como una de las múltiples, serias y severas inquietudes que han preocupado a los señores magistrados de toda la Nación Argentina reunidos en esa Conferencia.

Los miembros redactores del proyecto, que integraban esta comisión, y cuyos nombres voy a dar para ilustración de la Cámara, son conocidos magistrados y tratadistas distinguidos en la materia del régimen de minoridad, cuya versación y cuya preocupación sobre ella viene de largos años atrás —20 y 25 años—, durante los cuales han estado preocupados sobre estos temas publicando obras y artículos, colaborando constantemente en los institutos universitarios y estudiando en su propia función judicial.

Los juristas redactores de este estatuto son los siguientes. Preside la comisión el doctor Praxedes M. Sagasta, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, encargado precisamente de la aplicación de la ley 10.903, llamada ley Agote; vicepresidente de la comisión es el doctor Jorge Gallegos, juez nacional en lo penal, uno de los hombres que tiene más versación en el problema tratado en este trabajo: «El menor ante el derecho penal», una de las obras básicas sobre la materia dentro de la cultura jurídica argentina, y que tiene un prefacio encomiástico desde hace 15 años escrito por otro jurista distinguido, estudioso del derecho penal, el doctor Jorge Coll, coautor del anteproyecto Coll-Gómez de reformas al Código Penal, tan conocido por todos los hombres es-

pecializados. Integran también la comisión el doctor Mario H. Pena, el doctor Alejandro R. Caride, juez nacional de menores, el doctor Rodolfo Pessagno, juez nacional y profesor de la materia, el doctor Julio J. Alfonsín, que es secretario en lo correccional y una de las mentes más ilustradas que tiene el país en estos asuntos, el doctor Julio Martínez Vivot y el doctor Juan Carlos Landó.

Esta comisión, designada, como digo, a consecuencia de la primera Conferencia del Poder Judicial del año 1952, ha celebrado en cumplimiento de la importantísima misión que le fué encomendada 129 reuniones plenarias y de subcomisión antes de elevar su trabajo a la Corte Suprema de Justicia, la que lo ha remitido a su vez al Poder Ejecutivo, por cuyo conducto lo conoce la Honorable Cámara en el día de hoy.

Las comisiones asesoras de vuestra honorabilidad, vale decir la Comisión de Legislación General, presidida por el distinguido colega señor diputado González, y la Comisión de Legislación Penal, que me honro en presidir, han estudiado detenidamente este proyecto, introduciéndole muy pequeñas modificaciones y aconsejan a la Honorable Cámara prestar su voto favorable al despacho, en la inteligencia de que incorporaremos con ello a nuestro sistema legal una de las más avanzadas y eficaces legislaciones sobre la materia, a la que, sin duda alguna, ha contribuido de manera notable la capacidad, el patriotismo y el empeño puestos por los señores componentes de la comisión redactora, a quienes desde mi banca de representante del pueblo les rindo el tributo de gratitud y de reconocimiento a que se han hecho merecedores.

De una manera previamente aclaratoria al despacho que estoy informando, y en total acuerdo con las conclusiones de la referida comisión, yo diría que la sanción de esta ley vendrá a dar satisfacción a reclamos, anhelos y expresiones provenientes de los más heterogéneos sectores y fuentes sociales, pero todos contestes en este importantísimo problema de la minoridad ante el derecho penal.

A este efecto, me he permitido formular, a fin de abreviar mi exposición sobre estos particulares, un cuadro que solicito de la Honorable Cámara sea incorporado a la versión taquigráfica a esta altura de mi exposición.

Sr. Perette. — ¿A qué se refiere el cuadro?

Sr. Bustos Fierro. — Se refiere a los distintos sectores a los cuales responde el proyecto de ley, vale decir contempla los intereses de la familia, de los menores, de la sociedad, de la opinión pública, los antecedentes históricos, la opinión de los especialistas, etcétera. De una manera gráfica se presentan allí, para la mejor comprensión del problema, las distintas fuentes y las diversas requisiciones a que responde el proyecto que estamos considerando.

Si es exacto que, por los motivos que acabo de exponer, de aquel anteproyecto consideramos en este momento solamente el aspecto que atañe a la reformación del derecho penal de fondo, deseo destacar que la reforma contenida es verdaderamente medulosa, y que, como queda establecido en el estudio de las comisiones, se pueden señalar con respecto al derecho vigente no menos de once características que significan un estado de avance sobre el mismo.

Estas notas serían las siguientes: 1) Substracción al menor del Código Penal; 2) Elevación de la edad de la inimputabilidad hasta los 16 años; 3) Substitución del criterio punitivo por el criterio tutelar; 4) Imputabilidad relativa en los menores de 16 a 18 años; 5) Régimen diferencial en la ejecución de la sanción para los menores de 18 a 22 años; 6) Extensión al menor emancipado de los beneficios del régimen de tutela jurídica; 7) Obligatoriedad del examen integral del medio y de la personalidad del menor; 8) Ejecución diferenciada según los resultados de ese examen; 9) Obligatoriedad del examen mental en ciertos casos; 10) Concordancia de las soluciones con las que han sido auspiciadas por el IV Congreso Internacional de Jueces de Menores, reunido en Bruselas en julio del corriente año, en lo que respecta al menor hasta los 18 años, y a la ejecución entre los 18 y 22; 11) Computación optativa para el juzgador de la reincidencia, que en el estado de la legislación vigente resulta obligatoria.

Basta la reflexión detenida, minuciosa y analítica sobre cada una de las características que acabo de enunciar, para que la Cámara advierta hasta qué punto es exacta la afirmación de que la reforma que estamos considerando es verdaderamente medulosa y significa un avance extraordinario frente al derecho positivo en vigencia.

Antes de pasar a otros aspectos de la reforma legal que entrará a funcionar, quisiera referirme, así sea en un muy ceñido lineamiento, al enfoque del problema de la minoridad a través de la experiencia histórica, de la legislación comparada y de la doctrina, porque de esa manera no solamente cumpla con el deber de informar a la Cámara de la mejor manera que me es posible, sino también porque, de resultados de estas informaciones, podrán aparecer contestadas una serie de observaciones que han sido hechas a la ubicación ideológica de las soluciones que auspicia el proyecto en consideración, sea por oposición, por contraste, por comparación o por cotejo, sobre el espíritu y sobre la letra de la nueva ley, que, como bien lo ha señalado el informe de los señores miembros de la comisión redactora al señor presidente de la Corte Suprema, ha tenido celoso cuidado de evitar tanto el exceso de teorías, como la exageración escolástica de las doctrinas y todo calco inadaptable, ya que es bien sabido, dice el informe, que las teorías, por seductoras que parezcan, no logran muchas veces el ajuste acer-

tado con las necesidades, conveniencias y posibilidades locales, atendiendo en cambio a responder ampliamente a las exigencias de nuestra idiosincrasia, al sentir jurídico que nos es propio, a los superiores postulados universales que constituyen principios axiomáticos en los campos del derecho y de la sociedad, para obtener así un instrumento eficaz que dé solución a las inquietudes que lo promueven y satisfaga también uno de los más elevados y plausibles propósitos gubernativos.

A mí me resulta extraordinariamente grato constatar y poder expresar a la Honorable Cámara que estas soluciones que se entroncan directa y esencialmente con la concepción del mundo y de la vida del justicialismo argentino se han anticipado en muchos respectos a varias de las recomendaciones y de las ponencias que han sido aprobadas precisamente en esta última conferencia de jueces de menores celebrada en Bruselas en el IV Congreso Internacional de Jueces de Menores en el mes de julio de 1954. Esto le ha permitido decir a nuestro distinguido representante en ese Congreso —el doctor Rodolfo Pessagno, magistrado de cuya capacidad, honestidad e ilustración nadie duda, y profesor adjunto de la materia en la Facultad de Derecho de Buenos Aires—, al final de su informe sobre este particular, estas palabras acertadas que me voy a permitir leer. Me refiero a las que pronunciara en la Facultad de Derecho dando cuenta de la labor realizada en dicha conferencia: «Para que se comprenda que esta labor es prestigiosa para nuestro pueblo, para difundir el origen de ella en el IV Congreso de la Asociación Internacional de Jueces de Menores, que hoy hace treinta días concluyó sus sesiones; para que se comprenda acabadamente la trascendencia y significado de esta obra, y para que se advierta también con cuanta simpatía y respeto se mira en el exterior a nuestro pueblo, pues se sabe que sus tres premisas fundamentales: soberanía política, independencia económica y justicia social, no son en menoscabo de nadie, sino en procura del bienestar de todos para lograr esa inexcusable conciencia de la masa ciudadana, es con ese honroso auspicio que he tenido el honor de hablar ante vosotros.»

Exponía el profesor Pessagno las conclusiones del congreso a que hago referencia, en el que, repito, se ha hecho por vía de recomendación y voto la adopción de soluciones que ya estaban contenidas en este proyecto, elevado muchos meses atrás por los magistrados y redactores argentinos, en consonancia con la doctrina justicialista.

Por otra parte, en esa conferencia se recibió expresas demostraciones de aprobación sobre el particular.

Es indudable que en todas las épocas la minoridad ha sido considerada como una situación de excepcionabilidad en sus relaciones con el

derecho represivo, si bien es también indudable que esa excepcionabilidad se ha inspirado y fundamentado en las más variadas y heterogéneas —yo diría en las más caprichosas— motivaciones. Diría también que no obstante ese carácter de excepcionabilidad del menor frente al derecho penal, el tratamiento duro, cruel y despiadado del menor, desde los albores mismos de la experiencia histórica hasta el umbral de nuestros días ha sido una página sombría en la evolución de las instituciones represivas.

Desde los sacrificios humanos ofrecidos sobre menores en nombre de las religiones y de los mitos, de los cuales nos da una brillante imagen, en lo que se refiere al imperio azteca, don Salvador de Madariaga, en su maravilloso libro *El corazón de piedra verde*; desde las facultades conferidas al «pater familias» por la ley de XII tablas, que llegaban a la venta, empeño y muerte del menor; desde las mutilaciones que se ejercían —según Mateo Alemán lo dice en su *Guzmán de Alfarache*— en pleno siglo XVI sobre los menores para ejercitar la mendicidad; desde los procesos de penas de muerte en la hoguera por brujería y por hechicería que se practicaban en pleno siglo XVII; desde la pena capital para niños de diez y once años, autorizada por el derecho inglés en pleno siglo XVIII; desde la suspensión por las axilas que se autorizaba en Francia; desde el ahorcamiento de menores en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1828, hasta la pena del látigo que se autorizó ya en el umbral del siglo XX por la *children act* de Gran Bretaña; hasta el abandono, la desidia y la verdadera lucha entablada en nuestro propio medio para substraer al menor de la sórdida existencia que vivía en su jornada y en su tipo de trabajo hasta el advenimiento del gobierno de Perón; todo ello formó parte de un siniestro cortejo de experiencias históricas vinculadas a la situación del menor frente al derecho represivo.

No quiero entrar a referirme, para no dilatar impensadamente mi exposición, a cuál era la situación del menor de edad en las cuatro viejas y pretéritas civilizaciones —caldeo-asiria, egipcia, india y china—; no quiero ni siquiera referirme a cuál era la situación del infante y del efebo en el llamado «milagro griego», llamado así desde el día en que Renán rezó su famosa oración laica en el Acrópolis; pero yo preguntaría, señor presidente, ¿cuál es el fundamento de la excepcionabilidad del menor que consagra la ley de XII tablas, que distingue púberes e impúberes y que aplica a estos últimos solamente medidas policiales, como la *castigatio* y la *verberatio*? En que el niño es el continuador del culto de los dioses; en que estaba llamado a alcanzar las más altas magistraturas, en el sentido estatolátrico de la vida.

¿En qué descansa la excepcionabilidad que le acuerda el derecho germánico primitivo, que

exime de castigo al menor de doce años? Se ha dicho que descansa en la noción de «discernimiento», noción que campea tanto para adultos como para menores, pero esencialmente ello responde a la noción del «resarcimiento del daño», que es el fin de la pena en el derecho germánico; que se extiende y que compromete a todo el grupo consanguíneo a que pertenece y que origina instituciones como el *wergeld*, la «componenda» y el «estado de Faida». ¿En qué descansa la razón de la excepcionalidad que se reconoce al menor frente al derecho represivo del «Espejo de Sajonia», que refleja el derecho medieval alemán? Descansa en la razón de que es el clan el destinatario del fin de la pena, y el que está comprometido por la acción del menor.

¿En qué reposa la excepcionalidad del derecho canónico, cuya vigencia y penetración en el derecho positivo de todo el orden occidental podría ser puntillosamente puntualizado? En la noción de «malicia». El derecho canónico dice que el menor hasta los siete años carece de malicia y reputa, en cambio, que desde los siete años hasta la pubertad —período de responsabilidad dudosa— dependen de la investigación, «porque la malicia puede suplir la edad». ¿En qué reposa la excepcionalidad de la Ley de Partidas, que fija dos etapas a la minoridad frente al derecho represivo, una para los delitos de lujuria y otra para los demás delitos, y consagra la atenuación de la pena para los menores desde los diez años y medio hasta los catorce en algunos casos, y en otros desde los catorce a los diecisiete? Reposa en la noción de pecado y piedad, conceptos que humanizaron en gran parte el derecho histórico, porque así como el cultivo del derecho en Roma humanizó el viejo derecho quirritario, es indudable que el cristianismo, especialmente a partir de la época de San Luis Rey, insufló humanidad a las normas represivas de la sociedad primitiva. Llegó el proceso de emancipación del derecho penal: se constituye como rama autónoma del conocimiento y surgen multitud de escuelas que tratan de interpretar el derecho y, con ello, los fundamentos de la excepcionalidad del menor frente al derecho represivo.

El doctor Jorge Gallegos, uno de los redactores de la ley que estamos considerando, ha estudiado detenidamente en este volumen, que me permito aconsejar a los interesados en la materia, las distintas doctrinas penales acerca de la excepcionalidad del menor.

Aparece la escuela clásica del derecho penal, que representa fundamentalmente Carrara, cuya doctrina se incorpora a la casi totalidad de los códigos de derecho positivo del siglo pasado, que plantea el problema del «discernimiento» como la noción sustantiva para la declaración de la irresponsabilidad absoluta del menor de

doce años y la responsabilidad atenuada de los menores de doce a dieciocho años.

Contra ese planteo reacciona la escuela positiva que atribuye la causa de la delincuencia infantil a los factores exógenos más que a factores endógenos.

Viene después la escuela antropológica de Lombroso con sus conocidas exageraciones acerca del delincuente nato y sus tipificaciones, para corregirlas más tarde en la propia concepción de Lombroso, que acepta el juego de las distintas ciencias y de las técnicas de la educación y las aportaciones de la sociología, psiquiatría, psicología, etcétera, para el cabal conocimiento del niño.

Viene luego Enrique Ferri, autor de la noción defensiva que penetra en crecidísimo número de leyes del derecho positivo, noción defensiva que habrá de chocar y encontrarse en congresos jurídicos internacionales con la otra noción a que haré referencia más adelante y que mereció críticas de nada menos que Binding y Grispigni.

Ya puede ver la Honorable Cámara a través de estas breves referencias cómo la excepcionalidad del menor en sus relaciones con el derecho represivo ha tenido a través de la experiencia histórica y de la doctrina las más variadas y caprichosas interpretaciones. Ello explica la prudentísima posición adoptada en la solución de este problema por los autores del proyecto, alejándose de construcciones teóricas y posiciones de escuelas, tratando de dar a nuestros problemas una solución concordante con nuestra idiosincrasia y también en coherencia con las soluciones universales. Esto justificó también el nacimiento de esa nueva orientación de crear respecto del menor un nuevo derecho, una disciplina enteramente tutelar, una disciplina que está pretendiendo a justo título el rango de una verdadera ciencia, con métodos y objetivos propios y que la autorice a apartar el derecho del menor del derecho penal.

Sobre este intento que en cierta manera la representación opositora ha cuestionado, expresa la autoridad nada menos que de Jiménez de Asúa: «Este nuevo derecho se eleva hoy dando el modelo de lo que será en el porvenir el derecho penal todo.»

También tenía anotado un juicio del especialista doctor Sebastián Soler, de tan prestigiosos méritos, que en el transcurso de su exposición creo que leyó el señor diputado por Entre Ríos, pero que convendrá tal vez reiterar: «Tan profunda ha sido la modificación —dice Soler— que hasta se afirma la autonomía del derecho penal referido a los menores, el cual entra a formar parte de otra sistemática de carácter estrictamente tutelar, conjuntamente con otros estudios sobre menores abandonados o en peligro. Como consecuencia de ese sistema de ideas es que, en el primer Congreso Nacional Francés de Derecho Penal, Garcón manifestó que podía afirmarse que los menores estaban fuera del

derecho penal; para ellos no se habla más de expiación ni de responsabilidad.»

Cotejemos estas expresiones con lo que nos dice el Poder Ejecutivo en su mensaje: «La idea que priva en el proyecto es la de substraer a los menores del Código Penal, para ser sometidos a un régimen especial, adecuado a las modalidades de cada uno, destinándolos, cuando correspondiera, a establecimientos asistenciales y educacionales. Excluir al menor del ámbito penal constituye un postulado de la Doctrina Nacional.

La firma de ese mensaje reitera y complementa, esta vez en el plano del derecho ordinario, la inspiración de esa magnífica Carta Magna de 1949 que también personalmente y hasta con su puño y letra inspiró el general Perón, que para lograr la irrevocable decisión de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, escribió en las columnas templarias de la Constitución, entre otros conceptos fundamentales, estas palabras monitoras del inciso 4º de los derechos de la familia: «La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado»; y reiteró en el capítulo IV de manera intergiversable la decisión irrevocable y el claro deber de los poderes públicos de llegar al logro de una juventud «físicamente sana, perfeccionada en sus facultades intelectuales, templada en su carácter y cultivada integralmente en todas las virtudes personales, familiares y cívicas».

El texto de la ley que las comisiones especializadas aconsejan aprobar está orientado en este campo de conceptos básicos y responde a imperativos que, como bien se recordó, están señalados en el segundo Plan Quinquenal, que constituye una de las leyes fundamentales de la Nación, en el objetivo XXIX, E. 37.

Para dar una idea más clara de su estructuración me he permitido preparar un pequeño gráfico cuya inserción me permito solicitar en el Diario de Sesiones a esta altura de mi exposición.

Sr. Perette. — ¿Esos cuadros vienen a constituir una interpretación del proyecto por la mayoría de la comisión?

Sr. Bustos Fierro. — Sí, señor diputado.

Sr. Fassi. — Me permito recordar al señor diputado por Córdoba que me ofreció la oportunidad de hacer una interrupción.

Sr. Bustos Fierro. — Ya la autorizaré, señor diputado.

Como la Honorable Cámara podrá apreciar, los menores de dieciséis años, incurso en hechos que la ley califica como delitos, serán objeto de medidas tutelares; los menores de dieciséis a dieciocho años, puestos bajo procesamiento de sanción facultativa que va a la exención en la infracción de acción privada y otras de leve relevancia, y condicionado el

pronunciamiento judicial al régimen de previa internación y tratamiento de un año y al cumplimiento de los dieciocho años, imperando en todo caso el sistema de las medidas tutelares, incluso para los menores emancipados, y quedando subordinada la privación de libertad, en los casos excepcionales en que ésta se pronunciare, a que lo sea en institutos especiales hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. En cuanto a los menores comprendidos entre los dieciocho y veintidós años de edad, es decir, aquellos que la ciencia penal y sus concurrentes estiman han alcanzado ya el «fenotipo», se los somete al régimen ordinario, si bien siguen en vigencia a su respecto los principios de internación en institutos especiales hasta el límite de la mayor edad y la aplicación facultativa de la reincidencia.

El artículo 2º de la ley alude al régimen de libertad vigilada, institución que es ampliamente conocida, lo que me exime de comentario, si bien debo hacer notar que está en el espíritu de la misma, y con ese alcance lo aconseja la comisión en mayoría, que en atención a los fundamentos sobre los que reposa el régimen de la ley, las medidas judiciales que supongan la segregación transitoria o definitiva del medio familiar deberán aplicarse con criterio restrictivo, especialmente cuando más corta sea la edad del menor.

En cuanto al dispositivo del artículo 3º, dejamos señalado con igual alcance que el menor de dieciséis a dieciocho merece, en principio, el mismo tratamiento tutelar establecido y que la única diferencia consiste en que está comprendido dentro del proceso penal, entendiéndose a éste en el concepto moderno de secuela de actos desarrollada para resolver la litis, por si ocurre el caso especial de aplicar una sanción. En estos casos, es obvio que ese proceso deberá tramitarse con todas las garantías y recaudos legales, observación que es igualmente válida para lo dispuesto en el artículo 4º.

En cuanto al dispositivo del artículo 8º, hacemos presente a la Honorable Cámara con idéntico alcance que el artículo fija como límite los 18 años para el cambio de sistema, respondiendo a una idea transaccional y de orden práctico, lo que no significa olvidar que ese sector intermedio entre los 18 y 22 años es generalmente recuperable para la vida social. Se trata, por tanto, de un problema primordial de ejecución de la sanción y tiene en miras prevenir la habitualidad o persistencia en el delito, y es lo importante que estos infractores sean sometidos a un tratamiento diferenciado.

Por último, en cuanto atañe al artículo 12, que aplica las normas precedentes al menor emancipado por matrimonio u otra causa legal, hacemos también presente a la Honorable Cámara con igual alcance y desde luego a los fines interpretativos de la ley, como en los ante-

riores supuestos, que ello responde a prevenir situaciones de grave riesgo moral o material que puedan presentarse, y que las correspondientes medidas tutelares deberán aplicarse previa la cuidadosa y prudente aplicación en cada caso, teniendo muy en cuenta la finalidad primordial de esta ley, que atiende no solamente a la protección integral del menor, sino también a la consideración, constitucionalmente privilegiada, del grupo familiar constituido.

Todos estos caracteres que, naturalmente, por la precariedad del tiempo de que disponemos, he debido exponer un poco esquemáticamente, han sido objeto durante el curso del debate de la réplica de la representación opositora formulada a través de varios señores representantes.

Se ha dicho en tono de crítica al proyecto que estamos considerando que en primer término este proyecto involucra una pluralidad de asuntos mezclados sin ninguna razón explicable, según la frase del señor diputado Perette; de una heterogeneidad que la están revelando los propios discursos, según las palabras del señor diputado Fassi, que llegó a llamar a la ley «pieza de rompecabezas», y de un popurri legislativo, según el señor diputado Nudelman.

A este respecto quiero hacer una sola observación que implica la contestación a ese argumento formulado en forma dispersa, pintoresca y hasta elocuente.

La razón unitiva del despacho que estamos considerando está directamente vinculada al dispositivo del artículo 37, parágrafo 2º, de la Constitución Nacional, que me voy a permitir leer para mejor recordación de la Honorable Cámara: «La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.

«1. — El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad política de los cónyuges y la patria potestad.

«2. — El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca.

«3. — El Estado garantiza el bien de familia, conforme a lo que una ley especial determine.

«4. — La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.»

Vale decir que los cuatro objetivos que están taxativamente declarados dentro de un concepto unitario de protección en sus aspectos morales, económicos y legales, respecto de la familia, respecto de los bienes y respecto del estatuto de los niños, están en este despacho explicando en unidad, aun cuando en estricta técnica legislativa puedan aparecer como aspectos heterogéneos.

Afirmo que evidentemente los señores diputados opositores lo han olvidado, porque a este

respecto parece que padecen de amnesia o de cierta alergia a la Constitución Nacional, que han jurado cumplir y hacer cumplir.

Esta técnica de acumulación de asuntos diversos está, por otra parte, como sabemos todos los hombres de derecho, consagrada en verdaderos monumentos de la ciencia jurídica universal; lo está, por ejemplo, en el *corpus juris civilis*, en las constituciones justinianas, y lo está incluso en una multitud de sanciones que ha dado esta Honorable Cámara, en todos los tiempos, modificatorias del derecho civil y penal, incluso por vía de la ley de presupuesto nacional.

El señor diputado Perette nos ha dicho que el país padece de crecimiento de la delincuencia infantil, y a continuación afirmó que no hay estadísticas. Yo pregunto: si no hay estadísticas, ¿en base a qué ha hecho su afirmación el señor diputado Perette?

Sr. Perette. — El gobierno no publica las estadísticas sobre delincuencia criminal desde hace mucho tiempo, ni en el orden nacional ni en el orden provincial. Por estudios realizados, como el de un especialista en la materia, el doctor Nerio Rojas, he dado las estadísticas que el mencionado autor ha podido aportar desde el año 1930 a 1946, que son las últimas que menciono al estudiar problemas de la delincuencia y de medicina legal, en base a los anteriores boletines oficiales.

De manera que no hay ninguna contradicción. El gobierno no publica estadísticas, a pesar de la requisitoria de la oposición; y en la propia comisión —lo sabe el señor diputado, que es presidente de la misma— no hemos podido lograr las cifras estadísticas oficiales que habíamos reclamado.

Sr. Bustos Fierro. — El señor diputado por Entre Ríos confiesa en esta oportunidad que las estadísticas por las cuales se ha guiado pertenecen al doctor Nerio Rojas. Yo admito la seriedad de esas estadísticas si las ha hecho con criterio científico, pero si lo ha guiado un criterio político tengo que ponerlas en duda, porque ya hemos conocido bien en ese aspecto en esta Cámara al doctor Nerio Rojas. (*Aplausos.*)

Sr. Belnicoff. — Esa estadística está hecha sobre la base de informes policiales.

Sr. Bustos Fierro. — Por otra parte, esa estadística debe comprender las jurisdicciones nacional y provincial.

Yo he tomado mis referencias de las estadísticas consignadas en la Cámara Nacional en lo Penal de la Capital, y así, muy rápidamente, voy a citar una estadística del juzgado nacional tipo, desde el año 1945 hasta la fecha. Año 1945, 4.731 casos; 1946, 5.243; 1947, 4.202; 1948, 3.604; 1951, 3.592; 1952, 3.693; 1953, 3.044; 1954, 2.936. En el mismo orden de paralelismo siguen las estadísticas de los otros juzgados, de las cuales

resultaría, no el crecimiento de que nos ha habido el señor diputado, sino lo contrario, y tan luego en la Capital Federal.

Sr. Perette. — El crecimiento de la delincuencia juvenil es un hecho incontestable en el país.

Sr. Bustos Fierro. — El señor diputado Nudelman se ha referido hace un momento al «Estudio comparado sobre delincuencia juvenil», publicado por las Naciones Unidas.

Sr. Nudelman. — La conferencia sobre «Delincuencia y dictadura», pronunciada por el doctor Nerio Rojas en la Facultad de Derecho, fué muy ilustrativa.

Sr. Bustos Fierro. — Esta estadística a que hizo referencia el señor diputado no ha sido aprobada por las Naciones Unidas, sino que, como observé en una interrupción que formulé al señor diputado Nudelman, se trata de un informe presentado por un hombre muy experto como es el juez Gajardo, de Santiago de Chile, y acogido en su publicación por las Naciones Unidas. Pero al final de esa publicación se transcriben los índices de crecimiento de los delitos. En la página 82, que no ha leído el señor diputado por la Capital, se registran las estadísticas referentes a nuestro país. Los números índices correspondientes a los años 1947, 1948 y 1949 indican un decrecimiento paulatino de los delitos juveniles, no obstante el fenómeno del aumento de la población, que puede estimarse en un 8 %, por lo menos, en los tres años aludidos.

Este mismo informe, en la última página —que tampoco ha leído el señor diputado por la Capital— dice, por boca del doctor Gajardo, que el aumento de la delincuencia juvenil es en América un fenómeno perfectamente establecido, y señala que las estadísticas actuales acusan un aumento, «con algunas excepciones que revelan sin duda la eficacia de los servicios de protección respectivos». Significa que las estadísticas muestran de manera clara el aumento de los delitos infantiles en las repúblicas de Brasil, El Salvador, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, etcétera; pero Argentina queda excluida de esa lista; vale decir que la República Argentina no figura sino entre «las excepciones que revelan sin duda la eficacia del servicio de protección». (*Aplausos.*)

Sr. Perette. — En un cuadro que tengo en mi poder, y cuya inserción en el Diario de Sesiones solicito, figura el crecimiento de la delincuencia en la capital desde 1929 a 1946

Sr. Bustos Fierro. — En cuanto a los establecimientos, que también han sido objeto de un prolongado ataque por parte de los señores diputados en el sentido de que no existen en el país en el número necesario y de que el tratamiento que se da a los menores en los existentes dista mucho de ser ejemplar, tengo en mi poder la

nómina respectiva y voy a solicitar se incorpore a mi exposición. De acuerdo a la misma hay 40 establecimientos tipificados en la Capital Federal; 48 en la provincia de Buenos Aires; 25 en las provincias de Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Entre Ríos; 44 en las provincias de Corrientes, Presidente Perón, Eva Perón, Misiones, Salta y Mendoza. Faltan algunas estadísticas de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y de territorios. Lo interesante es confrontar esta estadística con relación a las registradas en otros países. Argentina, con una población que alcanza a la fecha a casi 19 millones, dispone de 136 establecimientos distribuidos en todo el país. Francia, con más de 40 millones de habitantes, dispone de 9 establecimientos oficiales. Bélgica, con 10 millones de habitantes, dispone de 10 establecimientos oficiales. Inglaterra, con 45 millones de habitantes, sólo alcanza a una docena. Desde luego que la razón de esta anomalía reside en que en esos países, lamentablemente, los menores van directamente a la cárcel. En cambio, Estados Unidos, con 750.000 menores delincuentes, dentro de esta estadística tiene un promedio de establecimientos oficiales que tampoco se acerca al nuestro.

Quiere decir que no estamos atrasados en esta materia. Desde luego, no estamos en el desiderátum, puesto que cuando Perón llegó al gobierno había sólo 10 establecimientos especializados.

En los últimos minutos de mi exposición no quiero dejar de cumplir la promesa que había formulado al señor diputado Fassi de concederle la interrupción que me había solicitado. Pero antes quiero significar que el señor diputado por la Capital concentró su atención, con su conocida autoridad, sobre el problema de la ausencia, que es uno de los capítulos de esta ley. Los diputados de la mayoría esperábamos del señor diputado Fassi, cuya veteranía, experiencia y maestría en materia de derecho es conocida, que se ocupase con la seriedad y con la preocupación que merece de un problema tan fundamental como es el de la ausencia en su doble aspecto de la ausencia simple y de la ausencia con presunción de fallecimiento. Porque este tipo de figura jurídica presenta problemas de los más variados aspectos, en el orden personal, social, económico, jurídico, patrimonial; vale decir que la ausencia simple y la ausencia con presunción de fallecimiento traen un cortejo de figuras o de problemas estrictamente jurídicos que inciden sobre múltiples aspectos: contratos, la familia, el derecho sucesorio, hasta en lo referente a los problemas cívicos. En el lapso de que disponía el señor diputado para su exposición hubiera sido una satisfacción escucharlo encarar esos problemas con la amplitud de criterio con que lo consideramos capaz de hacerlo. En cambio, el señor diputado Fassi

—lo dije en una interrupción y lo sostengo— se fué exclusivamente a la «hipótesis del absurdo». Refirmo que no hay ninguna institución del derecho que esté a cubierto de la hipótesis del absurdo. Hablemos de posesión, de propiedad, de contratos, de derecho sucesorio, de cualquier figura jurídica, y veremos que en cualquiera de estas instituciones puede introducirse y hacerse jugar esa hipótesis del absurdo.

La ley cubre las relaciones normales de los hombres. Por eso nos interesaba una exposición que se refiriera puramente al problema jurídico que es el problema de la ausencia simple y el problema de la ausencia con presunción de fallecimiento. Yo confieso que el señor diputado Fassi me ha desencantado; ha querido tirar la estocada de carácter político para decir que con esta ausencia con presunción de fallecimiento estamos intentando refugiarnos o estamos intentando ocultar otros objetivos de segundo, tercero o cuarto orden. Nosotros, los hombres del Partido Peronista, no utilizamos ni necesitamos eso; afrontamos los problemas enteramente, frontalmente, con toda valentía y con toda la decisión que se necesita. Desde luego, la historia de nuestros actos emancipadores prueba que nunca hemos sido acompañados por los señores diputados opositores en su zigzagante posición exitista.

De manera que a fin de conceder al señor diputado por la Capital la interrupción que ha solicitado, voy a hacer uso de la benevolencia de la Honorable Cámara para que me acuerde unos minutos más a fin de dar término a mi exposición.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — Voy a demostrar en breves minutos que mi impugnación a la parte del despacho que ha sido motivo de mi comentario, alcanza a todo su articulado.

Con respecto a los ausentes se distinguen tres situaciones: la del denominado no presente, acerca de cuya muerte no se tiene ninguna incertidumbre; el ausente, con respecto al cual existe incertidumbre sobre si vive o ha muerto; y el ausente que se presume muerto.

En nuestro Código Civil sólo se dan soluciones para los dos últimos supuestos: para aquel respecto al cual existe incertidumbre sobre si vive o está muerto y con respecto al ausente, presunto fallecido.

El despacho que estamos considerando trata de llenar esta laguna y lo hace de una manera manifiestamente equivocada: contempla el caso del no presente en el artículo 15; presenta el ca-

so del ausente cuya existencia es incierta en el artículo 17; y se refiere al caso del presunto muerto en el artículo 22.

En cuanto al primer supuesto, al no presente, al que no está en el lugar donde debe cumplir un acto jurídico y que es su domicilio o residencia, el despacho dice: «Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia sin que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado.» Quien posea la mas leve noción de derecho comprende que éste no es un no presente; éste es un presente acerca de cuya existencia existe incertidumbre. Vale decir que, de entrada, cuando el proyecto quiere resolver la situación del no presente, de aquel de cuya existencia no hay incertidumbre, ya se está refiriendo a un desaparecido del cual no se tengan noticias.

Trata el segundo supuesto, en el artículo 17, del desaparecido con respecto a cuya existencia existe incertidumbre. No hay una sola legislación en la que no se agregue a estos elementos uno más, el transcurso de algún tiempo sin noticias, porque la sola circunstancia de que una persona se haya ausentado de su domicilio y no haya dado noticias de su existencia, no basta para que se torne incierto si está vivo o está muerto. En todos los derechos se fija un término, corto o largo, vencido el cual se puede dictar la declaración de ausencia.

En este proyecto, en el artículo 17, en el afán de acortar términos, se dice: «Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador, el Ministerio Público», etcétera. Significa esto que no se fija ningún lapso para integrar los elementos en cuya virtud pueda haber incertidumbre con respecto a la supervivencia del ausente.

De pronto, dando un salto en el vacío, aparece la presunción de muerte que se organiza sobre la base de la ausencia, durante tres años, del domicilio. Vale decir que, aplicando las normas de este despacho, vamos a dejar sin representación al no presente sobre cuya vida no hay incertidumbre.

Además, cuando se le presenta a un juez el pedido de declaración de simple ausencia, el magistrado no va a tener elementos legislativos para encuadrar la figura jurídica y decir si procede o no la declaración de ausencia. Todo esto no interesa; lo que interesa a los redactores del proyecto es la presunción de muerte, en los términos angustiosos en que lo permite este despacho.

Ahora veremos cómo organiza el proyecto la presunción de muerte.

Cualesquiera sean las circunstancias de la vida moderna ¿es posible que por el simple hecho de que una persona esté ausente de su domicilio durante tres años sin dar noticia de su existencia, se abra un procedimiento en cuya

virtud se lo despoja de todos sus bienes? ¿Podría citarse en el derecho comparado, en países que tienen medios de comunicación tan perfectos como los nuestros, que son sociedades más firmes y asentadas en las que no se produce la migración de hombres con tanta facilidad como en nuestro medio, que al cabo de tres años se despoje a una persona de todo su patrimonio para entregárselo a sus herederos por el simple hecho de que no está en su domicilio y de que durante esos tres años no ha dado noticias?

No hay en el derecho comparado una solución igual. Es una creación del proyecto.

Se dirá que hay un recaudo. La posesión provisional y la posesión definitiva en este proyecto se suple por la circunstancia de que la transmisión del patrimonio se hace a los herederos con una nota marginal en el Registro de la Propiedad, que les permite o les prohíbe la disponibilidad de los bienes inmuebles durante cinco años, no a contar de la sentencia sino a contar desde el día presuntivo de la ausencia.

¿Quién ignora, señor presidente, que en un patrimonio se transmiten innumerables bienes que no figuran inscritos en el Registro de la Propiedad? ¿Dónde figuran en este despacho las previsiones sobre los frutos y todos los recaudos a fin de poder colocar esta legislación en concordancia con las demás normas del Código Civil?

Si dentro de la estructura del Código Civil ha resultado un problema casi insoluble para la doctrina, determinar si la organización de la ausencia con presunción de fallecimiento excluye o no la sucesión por muerte ¿qué solución vamos a dar con los pobres artículos que acabo de comentar?

No quiero abusar más de la consideración de la Honorable Cámara, pero creo haber demostrado que si el despacho ha sido tomado de un proyecto de Código Civil, si este proyecto es el anticipo del código que va a remitir a la Cámara el Poder Ejecutivo, ojalá nunca leguemos al país la mala obra legislativa de que es anticipo el despacho que consideramos.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Voy a tratar de aprovechar los minutos finales de mi exposición para concluir así con mi informe. No quiero dejar de señalar ante la Honorable Cámara y ante el pueblo de la República que nuestra tolerancia es mucho mayor que la de los señores diputados, pues se le ha concedido al señor diputado por la Capital una interrupción no ya del doble del tiempo que me fué otorgado, como lo pedí, sino de cinco veces más, y él nos ha dado una clase de derecho civil.

Lamentablemente debo señalar también que este tipo de discusiones es el que tiene que hacerse en el estudio de comisiones, donde nos hubiese complacido mucho escuchar estas observaciones del señor diputado.

Sr. Fassi. — Señor diputado: en comisión también colaboré. En primer lugar expresé que el artículo 15 estaba equivocado, y que no se refería al caso de no presencia.

Sr. Bustos Fierro. — Este tipo de discusiones incluso puede ser materia del debate en particular, cuya razón de ser, precisamente, es que puedan modificarse las disposiciones informadas en el debate en general.

El señor diputado por la Capital nos dice en su larga clase que acaba de dar, que la solución traída no cubre la figura jurídica de la no presencia; que cubre meramente la figura jurídica de la ausencia simple y de la ausencia con presunción de fallecimiento. Sobre este particular repito que lo constructivo es el debate, el cambio de ideas y la reformación surgidos en el estudio en comisión.

Sr. Fassi. — Y lo ofrecí, señor diputado.

Sr. Bustos Fierro. — Pero me interesa dejar constancia de que todas estas manifestaciones que acaba de hacer el señor diputado por vía de interrupción debieron formar parte de su exposición, en lugar de estar pivoteando durante todo su tiempo en la hipótesis del absurdo, para concluir en caprichosas interpretaciones.

Sr. Fassi. — Caprichosas en el concepto del señor diputado.

Sr. Bustos Fierro. — Para ilustrar los conceptos que he expresado, solicito de la Honorable Cámara la inserción en el Diario de Sesiones de un último cuadro que he realizado, donde cotejo las disposiciones del Código Penal con las de la ley 10.903 y el texto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que estamos considerando. Creo que será un elemento útil para la claridad de las distintas soluciones que deberá brindar a los encargados de aplicar esta ley.

Concluyo, señor presidente. De nuestra parte, no dejamos de advertir que estas soluciones que damos, que se inspiran en la concepción del Justicialismo argentino, podrán ser tal vez argumentadas en el sentido de que en definitiva constituyen una nueva ideología, con todas las ventajas y todas las desventajas que una ideología supone. Pero si nos interesa remarcar que lo substancial de la concepción justicialista, su gran disenso con las ideologías precedentes, es que nosotros no radicamos nuestra fe en la virtualidad de las soluciones abstractas para las posibilidades de soluciones de los problemas sociales o humanos de cualquier especie. Nosotros avanzamos resueltamente hacia la realidad concreta en todos los aspectos que hacen a los destinos del ser humano y de la sociedad.

Perón lo concretó en diáfano y popular lenguaje al sentar esa iluminativa consigna que preside todo nuestro acontecer social: «Mejor que decir es hacer; mejor que prometer es realizar.» En otras palabras, que el Justicialismo no pone su confianza exclusivamente en

las soluciones logradas en el campo intelectual o en el campo verbal —que ha originado tantas extrañas imposturas y aberraciones a lo largo de los tiempos—. Y si avanzamos en el terreno de la legislación escrita es porque el orden de la vida, el orden que regla a todos los seres inanimados y vivientes determina relaciones definidas y muestra, como lo diría Alexis Carrel, que la conducción de la vida y de la conducta, como la conducción de un vehículo, exige el sometimiento a un código de ruta.

Pero para nosotros lo esencial, lo perdurable y lo monitor no sera nunca la norma escrita, sino la vivencia y la vigencia de su espíritu. Dicho en otras palabras, confiamos en la obra del hombre. Al hombre juez, al hombre profesional, al hombre afectado directa o indirectamente por el problema del menor, al hombre pueblo, en suma, le entregamos el texto de la ley escrita, para que contribuya a su éxito con su esfuerzo, su consagración, su talento y su labor.

Pensemos, señores diputados, que antes de abordar la solución de este problema polifacetal en el sólo campo de lo jurídico, Perón y Eva Perón lo acometieron, con incansable pasión argentina, reformando la situación económica y social del trabajador; estableciendo infatigablemente la vivienda familiar, urbana y rural, los innumerables hogares escuelas, hogares de tránsito, policlínicos, salas de auxilio, campos de deporte, colonias de veraneo, en fin, las mil instituciones sembradas a voleo por todos los rincones del suelo argentino, en todos los ámbitos de la patria y que sería interminable enunciar, realizadas todas para atender a la salud física y moral del menor, que es pedestal del hombre de mañana.

Por eso, porque ellos fueron animados de esa alta pasión de derrotar y de extirpar la miseria, la vagancia, la mendicidad, el abandono, el cúmulo, en fin, de esas lacras y semilleros del mal en la niñez y en la juventud, encarando así las soluciones de este inmenso problema en sus más profundos estratos, sus nombres estarán siempre profundamente vinculados a las soluciones que damos, como a las que realizamos en este momento. *(Aplausos.)*

Pensemos en ello, señores diputados, y tal vez entonces cobrará ante nuestras pupilas y ante nuestras conciencias el sertido de plenitud y de cabal misión que tiene la nueva ley de la República. *(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)*

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar si se incorpora al Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado por Entre Ríos.

—Resulta negativa de 101 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar si se incorpora al Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta negativa de 123 votos; votan 134 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar si se incorpora al Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado por Córdoba.

—Resulta afirmativa de 126 votos; votan 134 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar en general el despacho de las comisiones de Legislación General y Legislación Penal.

—Resulta afirmativa de 125 votos; votan 134 señores diputados.

Sr. Alonso. — Pido que se rectifique nominalmente la votación.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar nominalmente.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Prosecretario (Murano). — Han votado 141 señores diputados: 133 por la afirmativa y 8 por la negativa.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Acosta, Acuña, Agüero, Albarelos, Albertelli, Albrieu, Alonso, Alvaredo de Blanco Silva, Alvarez, Argumedo de Pedroza, Arias, Astorgano, Atala, Balbi, Bidegain, Biondi, Blasi, Brigada de Gómez, Brizuela, Bustos Fierro, Campano, Campora, Camus, Cantore, Carballido, Carena, Carreras, Carrizo, Castagnino, Castro, Casuccio, Caviglia de Boeykens, Clement, Cobelli, Chalup, Dacunda, Da Rocha, Degliuomini de Parodi, Degreef, Deimundo, del Río, De Prisco, Díaz de Vivar, Diskin, D'Jorge, Domínguez (C. J.), Domínguez (R.), Dussaut, Espejo de Ramos, Fernández (E.), Fernández (H. S.), Flores, Fontana, Forteza, Gaeta de Iturbe, García, Gianola, Gobello, Goitia, Gómez, Gomis, González (A. F.), González (V.), Gramajo, Gro, Hermida, Idománico, Labanca, Lanfossi, Lannes, Loguercio, López (G.), López (N.), López (P.), López (P. G.), Luna, Macabate, Macri, Maestro, Martínez, Matis, Merlo, Messina, Miel Asquía, Miguel de Tubío.

Montes, Moreno, Moreschi, Moya, Musacchio, Ordóñez Pardal, Orlandi, Osella Muñoz, Otero, Pallanza, Parino, Paz, Pellerano, Peralta, Pérez, Pérez Otero, Pericás, Picerno, Piovano de De Castro, Posada, Pracánico, Presta, Preste, Rinaldi, Rocamora, Roche, Rodríguez (C. E.), Rodríguez (M. F.), Rodríguez de Copa, Rouggier, Rumbo, Sáinz, Salaber, Salvo, Scandone, Siboldi, Spachessi, Tejada (B. M.), Tejada (M. U.), Tesorieri, Tofanelli, Tommasi, Torterola de Roselli, Ulloa, Vergara, Villafañe, Villa Maciel de Cano y Zerega.

—Votan por la negativa los señores diputados Belnicoff, Fassi, Ferrer Zanchi, Gallo, Latella Frías, Nudelman, Perette y San-tucho.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración en particular.

Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 19.

Sr. Espejo de Ramos. — En las bancas disponemos de ejemplares impresos del proyecto de ley; propongo que se omita la lectura del texto de los artículos, y hago indicación de que la votación se haga por capítulos.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se prescindirá de la lectura del texto de los artículos del proyecto de ley, y la votación en particular se hará por capítulos.

Sr. Perette. — En nombre del sector radical, y para no volver a repetir todas las impugnaciones que hemos formulado a los distintos capítulos en las exposiciones en general, las reitero en este tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo I.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 122 votos; votan 130 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo II.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 123 votos; votan 131 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo III.

Por Secretaría se va a dar cuenta de las modificaciones y agregados que se proponen en nombre de las autoridades de la Honorable Cámara y del bloque de la mayoría.

Sr. Secretario (González). — Se propone que el artículo 31 quede redactado en la siguiente forma:

La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio, quedando disuelto el vínculo matrimonial al contraerse estas segundas nupcias. La reaparición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio. También transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al juez que la dictó pidiendo que se declare disuelto el vínculo matrimonial si con anterioridad ambos cónyuges no hubieran manifestado por escrito al juzgado que se han reconciliado. El juez hará la declaración sin más trámite, ajustándose a las constancias de los autos. Esta declaración autoriza a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias.

Quando el divorcio se hubiera declarado con anterioridad a esta ley, el derecho a que se refiere el apartado precedente podrá hacerse valer a partir de los noventa días de la vigencia de la misma y siempre que hubiese transcurrido un año desde la sentencia.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Degliuomini de Parodi. — Señor presidente, señoras y señores diputados: hoy la Cámara trata un problema trascendente, que hace a la felicidad y bienestar del hombre, la mujer y la familia, al postular el agregado al artículo 31, de que se ha dado cuenta por Secretaría y que en este instante consideramos.

La fortuna quiso precisamente que sea yo, como mujer, quien también concorra a fundar con su voto la razón, habilidad y justicia del presente agregado, pues como mujer deseo interpretar las angustias, desazones y decepciones de miles y miles de mujeres que, buscando una felicidad legítima en el matrimonio, lamentablemente encontraron en él decepción y desazón, como anteriormente dije.

Todas las criaturas humanas tenemos derecho a la felicidad en un amor perdurable y en un matrimonio respetable. Empero, las contingencias de la vida conspiran muchas veces contra la perdurabilidad de esta respetabilísima institución, y aquí es justamente donde el movimiento peronista concurre con su sentido realista, afanoso siempre de prodigar justicia al dar a cada cual lo suyo. Por ello es que yo, como mujer, levanto mi voz para posibilitar por el camino de la ley el don de la felicidad para aquellos que aun pueden alcanzarla.

El movimiento peronista se ha caracterizado siempre, como digo, por su sentido realista y por el enfoque práctico con que ha afrontado los problemas vitales argentinos. Este agregado al artículo 31 del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo es una prueba palmaria y evidente de mi aserto anterior.

Nuestro Código Civil, al legislar en el capítulo VII de la sección segunda del libro pri-

mero sobre el divorcio, se refiere a diversos aspectos de la disolución de la sociedad conyugal, pero proclamando en el artículo 238: «El matrimonio válido no se disuelve sino por la muerte de uno de los esposos», y en el 240: «El fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio. Mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido, el matrimonio no se reputa disuelto.»

Estas disposiciones del código han motivado la existencia de situaciones de hecho sumamente dolorosas para los protagonistas, quienes encuentran muchas veces una solución ficticia fuera de las normas legales o fuera de las normas morales. Yo como mujer no puedo aspirar a otra cosa que no sea a las perfectas fórmulas legales y morales. Por ello es que con la ley venimos nosotros a legalizar situaciones morales que hacen directamente, repito, al prestigio de la mujer, del matrimonio y de la familia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

El artículo reformado viene a solucionar el problema que plantea el artículo 240 del Código Civil, en cuanto establece que la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio, quedando disuelto el vínculo matrimonial al contraerse estas segundas nupcias. Se soluciona así el problema que aqueja hoy a numerosas personas que, a pesar del fallecimiento presunto del cónyuge desaparecido, no pueden contraer nuevas nupcias, viéndose privadas de la posibilidad de formar un nuevo hogar y de contraer nuevos vínculos.

La segunda parte del artículo tiende también a solucionar otra situación mucho más extendida que la anterior. No se oculta a nadie, porque no es posible tapar el cielo con un harnero, que existen en el país numerosos matrimonios que, desgraciados en su unión por una u otra circunstancia, han obtenido un divorcio que implica la separación de cuerpos y de bienes, pero no la disolución del vínculo matrimonial. En esa situación los ex cónyuges no pueden volver a casarse, y frente a los problemas que el diario vivir trae aparejados, y frente a las solicitudes de sus sentimientos, sólo les cabe o un renunciamiento total a toda vida afectiva o la búsqueda de una solución extralegal, recurriendo a divorcios y nuevos casamientos en el extranjero, solución, señor presidente, a medias, que trae aparejada toda una secuela de complicaciones y de situaciones dudosas e inestables, tanto para los nuevos cónyuges como para su posible descendencia.

A nadie se le escapa, y menos aún a las mujeres, que estas situaciones dudosas e inestables a las cuales antes hice referencia son un factor mortificante que, incluso en sectores pequeños y mezquinos, provocan una injusta *capitis diminutio* social en la mujer, la cual para esos

espíritus —repito—, aun habiéndose casado en el extranjero bajo el imperio de una legislación extranjera, es una mujer que vive en mortificante relación extramatrimonial, algo así como marginal a las leyes de la moral y de las buenas costumbres.

Sí, señores diputados; situaciones dudosas e inestables, mortificantes de su yo, no solamente para la mujer, sino incluso para los hijos. ¿Y todo por qué? Porque el legislador argentino hasta esta hora justicialista de Perón no se atrevió a abordar el problema.

Yo, como mujer, lo abordo, porque sé que haremos un bien y que miles y miles de personas nos habrán de agradecer. La moral no se afectará, como podrán sostener sus impugnadores, sino que se vigorizará, y la felicidad de muchos será el mejor premio de nuestros afanes. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

La segunda parte del artículo, como decía, busca solución realista a ese problema real, estableciendo que en caso de existir una sentencia declarativa de divorcio cualquiera de los cónyuges, después de transcurrido un año, podrá presentarse al juez pidiendo que se declare disuelto el vínculo matrimonial, con lo que quedará en libertad de contraer nuevo matrimonio. Se trata, pues, de una disposición netamente realista frente a una conocida situación de hecho que aqueja y preocupa a muchos argentinos.

El peronismo aporta una solución directa, inmediata, efectiva, sin las estridencias de un proyecto divorcista. Nosotros no somos divorcistas, somos realistas, sin el escándalo de una ley que se imponga por igual a todos, lo deseen o no lo deseen. El peronismo aporta una solución que al par que permitirá a quienes lo quieran obtener la disolución de su vínculo matrimonial, permitirá también no obtenerla a quienes por escrúpulos morales o de conciencia no quieran aceptarla. Nosotros no imponemos soluciones; ¡ofrecemos soluciones! (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Mantenerse en la situación en que los coloca nuestra legislación actual es un derecho optativo. Porque nótese bien que esta reforma no establece la disolución ipso jure del vínculo matrimonial por el mero transcurso del tiempo. Para que esa disolución se cumpla es necesario que a más de transcurrido el año sin la manifestación de haberse reconciliado, uno de los cónyuges solicite al juez la declaración que consagre la disolubilidad del vínculo. En esta forma, pues, aquellas personas a quienes causas tan graves como las que exige nuestro código han movido a solicitar su separación de cuerpos y de bienes, pero que por escrúpulos morales y religiosos muy respetables no desean llegar a la disolución total del vínculo matrimonial, pueden perfectamente abstenerse de hacerlo con sólo no efectuar la presentación judicial solicitando esa disolución, con lo cual aquél que-

daría subsistente hasta que se produzcan algunos de los supuestos previstos en los artículos 219 y 223 del Código Civil.

En nombre de las autoridades de la Honorable Cámara y de nuestro bloque propondré que, inmediatamente a continuación de estas palabras que estoy pronunciando, se publique en el Diario de Sesiones, como exposición de los motivos sociales y fundamentos jurídicos de esta modificación y agregado al artículo 31 del proyecto que estamos considerando, el informe que el señor presidente de la Comisión de Legislación General de esta Cámara, doctor Ventura González, presentara a nuestro bloque —y que depositó en Secretaría— en ocasión de considerarse en él esta reforma; informe que ha de juzgarse interpretación auténtica del agregado propuesto.

Señor presidente, señoras y señores diputados: Eva Perón vivió atormentada por la felicidad de su pueblo. Eva Perón, aun en las horas dolorosas de su larga e injusta agonía, vivió pensando en la felicidad de la mujer, en la felicidad sin retaceos, generosa y amplia, no fundada en coyunturas pequeñas y mezquinas, y menos aún fundada en la muerte presunta o efectiva tal cual lo postulan los artículos 219 y 223 del Código Civil.

El codificador frío puede edificar un instituto jurídico fundado en la muerte; pero Eva Perón, que dió su vida cantando a la vida, aspiró siempre a fundar la felicidad en la vida, como un himno permanente a la belleza; ella se basó siempre en los valores eternos de la criatura humana hecha a imagen y semejanza de Dios. (Aplausos.)

Eva Perón, desde aquí te digo: nosotras, las mujeres, sabemos cumplir nuevamente con nuestro deber al cumplir con Perón y con el pueblo. ¡Nuestro mandato lo ejercitamos, una vez más, limpiamente y con todo honor! (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Informe del señor diputado Ventura González, presidente de la Comisión de Legislación General (1)

Al señor presidente del bloque de diputados peronistas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Angel J. Miel Asquía.

De mi mayor consideración:

Estando a consideración de este cuerpo el problema vinculado con la necesidad y conveniencia de establecer en el país el divorcio absoluto, tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con el propósito de hacerle llegar mi opinión sobre tan importante cuestión.

En primer término he de exponer en apretada síntesis las razones y fundamentos que según mi modo

de ver, hacen indispensable la modificación del Código Civil, a fin de establecer en nuestro derecho positivo el divorcio *ad vinculum*.

En segundo término formularé una apreciación concreta sobre el valor, sentido y alcance del texto que está a consideración del bloque.

Entrando en materia es necesario poner de relieve que la cuestión del divorcio *ad vinculum* no es un problema religioso sino un problema de legislación, como sostiene Bibiloni en su anteproyecto de reforma al Código Civil, al tratar sobre la materia.

En efecto, no es un problema religioso porque la solución que se propugna no es obligatoria sino facultativa. El texto que tiene a estudio el bloque dice: «Transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio, cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al juez que la dictó pidiendo que se declare disuelto el vínculo matrimonial si con anterioridad ambos cónyuges no hubieren manifestado por escrito al juzgado que se han reconciliado. El juez hará la declaración sin más trámite ajustándose a las constancias de los autos. Esta declaración autoriza a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias.»

Como se ve, el texto establece que sólo a pedido de parte (cualquiera de los cónyuges aun el culpable) y cumplidos los recaudos pertinentes (transcurso de un año y no reconciliación), la mera separación de cuerpos se convierte en disolución del vínculo.

Quiere ello decir, que si los esposos, por motivos religiosos o de cualquier otra índole, no quieren llegar a la disolución del vínculo, el proyecto les permite una mera separación de cuerpos, respetando así sus convicciones más íntimas.

Más aún: en el caso de que uno de los cónyuges formulara el pedido y como consecuencia de ello el vínculo quedara disuelto, ellos son libres de usar o no la facultad emergente de la disolución, es decir, pueden o no volver a contraer nuevas nupcias, cosa que harán o no de acuerdo con sus ideas, creencias o intereses.

El problema que se plantea con el divorcio es el mismo que se plantea con el matrimonio civil.

La existencia del matrimonio civil no impide ni obliga celebrar el matrimonio religioso. Este se realizará o no de acuerdo a las creencias religiosas o de otra naturaleza de los contrayentes.

En consecuencia, creo firmemente que el texto a consideración no afecta ni la libertad de cultos ni la libertad de conciencias.

Haciendo un estudio del divorcio absoluto en la legislación comparada y observando su evolución a través del tiempo, llegaremos a esta conclusión: el divorcio absoluto ha existido desde la antigüedad y se mantiene hasta nuestros días, habiendo sido aceptado por la inmensa mayoría de los países actuales. Si ello es así, es porque indudablemente responde a una necesidad social.

En efecto, el divorcio absoluto lo encontramos en Grecia y en Roma, existiendo también en el Derecho Germánico. En la Edad Media el Derecho Canónico tuvo una influencia extraordinaria. Este derecho, basándose en los Evangelios, proclamó el carácter sacramental de matrimonio y la indisolubilidad del vínculo (Concilio de Trento) y sólo admitió la separación de cuerpos.

Producida la Revolución Francesa en 1789, se dictó en Francia la ley de 1792 que admitió el divorcio absoluto en forma amplia (mutuo consentimiento, incompatibilidad de caracteres, etcétera). Posterior-

(1) Véase la resolución de la Honorable Cámara en la página 2806

mente al dictarse el Código Napoleón (1804) se consagró también el divorcio *ad vinculum* por las siguientes causales: adulterio, exceso y sevicias, injurias graves, condena criminal y mutuo consentimiento. A raíz de la caída de Napoleón y con la Restauración, vino una ley en Francia, en 1816, que suprimió el divorcio absoluto y sólo admitió la separación de cuerpos, hasta que se dictó la ley Naquet que lo admitió nuevamente. De acuerdo con esa ley, las causales de divorcio son: adulterio, excesos y sevicias, injuria grave, y condena criminal. Esta enumeración es taxativa, pero, como muy bien lo hace notar Planiol, la jurisprudencia francesa, a través de una interpretación amplia del concepto de injuria, ha extendido en la realidad las posibilidades del divorcio.

En la legislación francesa se admite también la mera separación de cuerpos por las mismas causales que el divorcio. Es digno poner de manifiesto el artículo 310, que dice: «Cuando la separación haya durado tres años, la sentencia será de derecho convertida en sentencia de divorcio por demanda formulada por uno de los esposos.»

En lo que se refiere al derecho comparado, como he dicho más arriba, la mayoría de los países ha aceptado en la hora presente el divorcio absoluto.

Para corroborar lo que precede basta traer a consideración el trabajo titulado «Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos en la legislación comparada», que resultó del estudio encomendado por la Comisión de Códigos del Honorable Senado de la Nación al Seminario de Derecho Civil (IV Curso) de la Facultad de Derecho de Buenos Aires (trabajo del señor Martín T. Ruiz Moreno - año 1925).

En este trabajo se divide a las legislaciones en cuatro grupos que son los siguientes: primer grupo: países que sólo admiten la separación de cuerpos; segundo grupo: países que establecen sólo la separación para los católicos, el divorcio y la separación o el divorcio solamente para los no católicos, y el repudio para los judíos; tercer grupo: países donde se admite el divorcio y la separación de cuerpos sin distinción de creencias; y cuarto grupo: países donde sólo se admite el divorcio o el repudio.

Corresponden al primer grupo los siguientes: España, Italia, Canadá, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, nuestro país y Terranova.

Corresponden al segundo grupo: Austria, Polonia e Irlanda.

Corresponden al tercer grupo: Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia, Portugal, Checoslovaquia, Finlandia, Luxemburgo, Hungría, Yugoslavia, Holanda, Mónaco, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Cuba, Santo Domingo, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Méjico, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Madagascar, La Martinica y Cochinchina.

Corresponden al cuarto grupo: Rumania, Bulgaria, Rusia Soviética, Grecia, El Salvador, Haití, Argelia (país musulmán), Anam, Japón, Persia (país musulmán), países musulmanes en general, China e India.

Es necesario tener en cuenta que los que preceden son datos del año 1925 y que algunos países con posterioridad, como por ejemplo el Perú, han establecido el divorcio absoluto. Por lo expuesto queda demostrado en forma categórica que la inmensa mayoría de los países actuales han adoptado el divorcio *ad vinculum*, resultando indudable que éste responde a una necesidad social.

En lo que respecta a la República Argentina, producida la Revolución de Mayo, siguió, no obstante ésta, rigiendo la legislación de la época colonial, modificada por leyes y decretos de nuestros gobiernos patrios.

Las Partidas establecían como es sabido la indisolubilidad del vínculo, si bien es cierto que en algunos casos excepcionales admitían la disolubilidad, como se desprende de la partida IV, título XII, leyes I y II.

No obstante ello, en el país sólo se admitió la separación de cuerpos, porque la legislación de Indias, en esta materia se inspiró totalmente en el Concilio de Trento.

Al dictarse el Código Civil se estableció el matrimonio religioso, dictándose posteriormente la ley de matrimonio civil de 1889, que legisla en su artículo 64 sobre el divorcio, estableciendo que éste consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que se disuelva el vínculo matrimonial. El artículo 66 establece que no hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos, y el artículo 67 determina las causales del mismo.

En el país se han presentado varias iniciativas tendientes a establecer el divorcio absoluto. Entre ellas tenemos: el proyecto de Juan Balestra, de 1889; de Carlos Olivera, de 1901; de Alfredo L. Paracios, de 1907; de Conforti, de 1912; de Pinedo, de 1914. Este último proyecto consistía fundamentalmente en agregar al artículo 7º de la ley de matrimonio civil las palabras «en el país», que significaba en realidad darle mayor flexibilidad, atemperando el rigorismo de nuestra ley.

También podemos citar un proyecto de Bravo y Justo, de 1925.

El anteproyecto de Bibiloni admite el divorcio *ad vinculum*, como se puede apreciar leyendo los artículos 617 a 646. Dentro de estos artículos es interesante lo que determina el 644: «Transcurridos tres años desde que fué ejecutoriada la sentencia de separación personal, se convertirá en sentencia de divorcio absoluto a pedido de cualquiera de los cónyuges, aunque fuese el culpable, si no hubiese mediado reconciliación.»

En cuanto al proyecto de reforma al Código Civil de 1936, mantiene el principio de la indisolubilidad, pero en una nota acompaña también el anteproyecto de Bibiloni, que admite la disolución del vínculo.

Estos son los antecedentes que podemos citar, entre otros, en nuestro país.

Creo que es necesario establecer el divorcio *ad vinculum* en la República por las siguientes razones fundamentales que paso a exponer.

Es sabido que actualmente la gente que quiere divorciarse sin salir del país obtiene una sentencia de divorcio de países extranjeros, celebrando en alguno de esos países un nuevo matrimonio, también sin necesidad de ausentarse del país.

Esto significa, como muy bien afirma Bibiloni en su anteproyecto, que «el divorcio extintivo del vínculo ha penetrado en la República por vía de la colusión». Esta situación lógicamente afecta a la familia argentina y crea problemas muy serios respecto a los hijos.

Participamos en un todo de la opinión de Bibiloni cuando dice textualmente: «y una de dos: o se adoptan graves medidas respecto de los efectos legales de los divorcios autorizados por tribunales incompetentes, y sobre la validez de los nuevos matrimonios

—y con eso el mal se agravará, probablemente sin impedir el hecho fundamental si se persiste en limitar los efectos del divorcio—, o se establece la institución para encerrarla dentro de los términos prudentes. Lo que no se puede es dejar las cosas en el estado en que se encuentran.

Raymundo Salvat, en su obra *Tratado de Derecho Civil Argentino —Familia—* (Matrimonio), sostiene lo siguiente: «Frente a esa situación (se refiere a los casos en que se obtienen los divorcios en el extranjero), nos parece que sería preferible tener nuestra ley de divorcio, que permitiera a los esposos cuyo vínculo matrimonial se encuentra de hecho roto y definitivamente concluido regularizar su situación y aspirar, si es así su deseo, a la formación de un nuevo hogar que les brinde la felicidad no encontrada en el primero.»

Pienso que frente a un matrimonio desquiciado el verdadero planteamiento del problema es el siguiente: ¿Qué conviene más, la mera separación de cuerpos o el divorcio absoluto, es decir, extintivo del vínculo matrimonial? Creo que el divorcio *ad vinculum* es más conveniente por las siguientes consideraciones. Dice Bibiloni en su anteproyecto del Código Civil respecto a este asunto: «La separación tiene todos los efectos del divorcio absoluto respecto de la unión misma de los esposos, característica y esencial del matrimonio y la tiene respecto de los hijos. Tiene, además, el inconveniente propio de ella, que el divorcio salva, de no permitir a los esposos la restauración de su vida moral por la constitución de una familia que los libera «de la corriente que los arrastra», hacia situaciones oscuras y desgraciadas para ellos y para los bastardos que engendran. Son los hijos los que, en definitiva, son heridos por la política de la ley.»

El interrogante que he planteado hace un instante podemos analizarlo desde el punto de vista de los esposos y desde el punto de vista de los hijos.

Desde el punto de vista de los esposos es evidente que la mera separación de cuerpos impone a los cónyuges: o el celibato perpetuo o el adulterio. Vale decir que la ley obliga a los esposos o bien a violar una tendencia natural (instinto de la procreación) o bien a tener relaciones extramatrimoniales. Situaciones ambas inadmisibles. Si los cónyuges separados entran en el terreno de las relaciones extramatrimoniales —cosa que ocurre normalmente— ello afecta la moral, la familia y la sociedad.

En cambio, el divorcio *ad vinculum* facilita la constitución de una nueva familia, es decir, uniones legítimas y morales evitando los inconvenientes a que he hecho referencia.

Con relación a los hijos el interrogante se resuelve, según mi opinión, de la siguiente manera: ya sea que estemos frente a una separación de cuerpos o frente a un divorcio absoluto, la situación de los hijos es la misma, desde el punto de vista legal en ambos casos. En ambas situaciones los padres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones respecto de ellos. Tienen el deber de alimentarlos, de proveer a sus necesidades, de educarlos, etcétera.

Desde el punto de vista moral, educativo y social creemos que están en mejor situación los hijos de esposos divorciados en forma absoluta que los que se encuentran meramente separados.

Decía Barroetaveña en 1902 en uno de los más luminosos debates que se han realizado en el Parla-

mento argentino: «La cuestión respecto a los hijos se plantea en estos términos: ¿Quién podría sostener que es más moral para los niños: presenciar las uniones irregulares, la vida desorbitada de sus padres, las uniones concubinarias, que forzosamente tienen que venir, o los hogares felices, reconstituídos por uniones en que la esposa o el esposo divorciado aportaran al hogar un compañero digno de la consideración social? Y planteada la cuestión así no cabe lugar a la objeción hecha, porque hasta los mismos adversarios deben reconocer que conviene más la reconstitución del hogar por medio de un matrimonio legítimo, que la vida desordenada, de libertinaje, de los esposos separados de cuerpos.»

Hay además otro argumento fundamental que nace de comparar la situación de los hijos de los divorciados con los hijos de los viudos.

Se dice que el divorcio *ad vinculum*, al permitir nuevas nupcias, trae como consecuencia que los hijos del matrimonio disuelto se vean perjudicados por el segundo matrimonio y que ello hay que evitarlo. No es aceptable este argumento.

En efecto, si las ulteriores nupcias son perjudiciales para los hijos de un matrimonio anterior, entonces habría que comenzar también por prohibir que los viudos contrajeran nuevas nupcias, porque tanta consideración y respeto merecen los hijos de un divorciado que los de un viudo.

Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido prohibir las ulteriores nupcias de personas que se encuentran en estado civil de viudez.

En conclusión, reitero que pienso que frente a un matrimonio desquiciado, es más conveniente el divorcio que la mera separación de cuerpos.

Se argumenta que una ley de divorcio absoluto ha de traer como consecuencia un aumento de los divorcios en perjuicio de la familia y de los hogares bien constituidos.

Héctor Lafaille, en su obra *El derecho de familia* dice, siguiendo a Augusto Comte, que el divorcio engendra el divorcio, porque indiscutiblemente, según Lafaille, se reflexiona menos para contraer matrimonio cuando se sabe que la ley permite la disolución del vínculo. Se agrega, en este orden de ideas, que es mala política autorizar el divorcio absoluto, y en defensa de esa posición se citan estadísticas. Se dice que en Francia, después de la sanción de la ley Naquet, en 1884, hubo aumento inusitado de divorcios.

Me parece que el argumento que precede no es valedero, porque se realiza un enfoque errado del problema.

Bibiloni, frente a la afirmación de que el divorcio engendra el divorcio sostiene que: «imputar a la ley de divorcio las desuniones que lo traen es como imputar a la sanción de los códigos penales el aumento universal de la criminalidad.»

La verdad es que el aumento de los divorcios es universal y no es mayor la moralidad en los países que prohíben el divorcio en forma absoluta que en aquellos que lo permiten.

Lafaille, que es adversario del divorcio *ad vinculum* sostiene que en nuestra legislación el matrimonio es más indisoluble que lo que exige la necesidad social y más estricto que el aceptado por el Derecho Canónico. Sostiene que el principio de la indisolubilidad debe hacerse menos riguroso, haciendo jugar en forma orgánica y sistemática preceptos o normas vinculados con las nulidades.

Esta posición de Lafaille demuestra la necesidad impostergable de la reforma a nuestro derecho en

esta materia del divorcio. El mismo Lafaille sostiene en la obra citada «que la familia atraviesa en nuestra época por un momento difícil», debido, según su opinión, a diversos factores entre los cuales se encuentran los siguientes: el industrialismo, el descenso de los nacimientos y la concepción de los derechos individuales, todo lo cual ha traído como consecuencia disminuir la cohesión del vínculo familiar.

Pienso, en definitiva, respecto a este asunto, con Bibiloni cuando afirma que lo que en realidad ha aumentado son los motivos determinantes de las causas de divorcio.

Por todo lo expuesto, creo que es urgente y necesario dictar en el país una ley que en forma prudente legisle sobre el divorcio absoluto.

Pasando al segundo punto de este análisis, formularé algunas breves consideraciones sobre el texto a consideración del bloque.

El texto dice así: «Transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio, cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al juez que la dictó, pidiendo que declare disuelto el vínculo matrimonial, si con anterioridad ambos cónyuges no hubieran manifestado por escrito al juzgado que se han reconciliado. El juez hará la declaración sin más trámite ajustándose a las constancias de los autos.»

Esta declaración autoriza a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias.

Cuando el divorcio se hubiere declarado con anterioridad a esta ley, el derecho a que se refiere el apartado precedente podrá hacerse valer a partir de los 90 días de la vigencia de la misma y siempre que hubiere «transcurrido un año desde la sentencia».

El texto comienza diciendo: «Transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio...» (Lógicamente el término de un año empieza a contarse desde que quedó firme la sentencia de divorcio. La expresión divorcio se refiere a la mera separación de cuerpos sin disolución del vínculo, en esta parte que estoy considerando.)

Sigue diciendo el texto: «...cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al juez que la dictó...» (Vale decir aun el culpable) «...pidiendo que declare disuelto el vínculo matrimonial...» (Vale decir que la disolución del vínculo es facultativo de los cónyuges) «...si con anterioridad ambos cónyuges no hubieran manifestado por escrito al juzgado que se han reconciliado...» (Vale decir, que para poder solicitar la disolución del vínculo matrimonial es necesario, además del transcurso de un año, que no haya existido reconciliación. La reconciliación sólo puede ser alegada si ambos cónyuges así lo hubieran manifestado por escrito al juez. No hay otra forma) «...El juez hará la declaración sin más trámite, ajustándose a las constancias de los autos...» (Es decir, el juez lo único que tiene que considerar para resolver es si ha transcurrido el año y si no ha habido reconciliación, debiendo ajustarse a las constancias de los autos.

En consecuencia, el juez está obligado a declarar disuelto el vínculo reunidos que sean estos cuatro requisitos: 1º Sentencia firme de separación de cuerpos; 2º Transcurso por lo menos de un año desde aquella; 3º Que no haya habido reconciliación expresada en la forma que el texto determina, y 4º Que lo solicite cualquiera de los cónyuges aun el culpable.) «...Esta declaración autoriza a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias...» (Es lógico que disuelto el vínculo puedan contraer nuevo matrimonio.)

De acuerdo con lo que precede, resulta que la solución del proyecto, según mi modo de entender, es prudente y equilibrada, pues permite las siguientes soluciones: a) Que los cónyuges queden sólo separados de cuerpo, manteniendo el vínculo matrimonial. Ello ocurrirá cuando decretado el divorcio los cónyuges no se han reconciliado ni han solicitado la disolución del vínculo; b) Que se llegue a la disolución del vínculo matrimonial. Ello ocurrirá cuando existiendo sentencia de separación de cuerpos transcurre por lo menos un año, no hay reconciliación en las formas que determina el proyecto y el o los cónyuges piden la disolución del vínculo; c) Que no habiendo solicitado la disolución del vínculo en cualquier tiempo los esposos pueden reconciliarse con todos los efectos que la reconciliación significa en nuestro derecho (artículo 71 de la ley de matrimonio civil. Debe tenerse en cuenta que la reconciliación sólo puede probarse por escrito ante el juez).

La última parte del texto contiene una norma de carácter transitorio vinculada con los divorcios dictados con anterioridad a la época en que entre en vigencia el texto que he analizado, si se transforma en ley.

Su contenido es claro y no es necesario analizarlo.

De sancionarse este proyecto, evidentemente la legislación actual ha de resultar fundamentalmente modificada en este aspecto del régimen del matrimonio.

El principio que informa al proyecto es el de admitir la disolución del vínculo matrimonial, y es, a través de la aplicación de ese principio, en función con la legislación actual que ha de resultar la solución de los múltiples casos que, lógicamente, han de plantearse en la práctica.

Sin otro motivo, saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

Ventura González.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente: sorpresivamente, a las tres de la madrugada, el sector de la mayoría, en forma totalmente subrepticia e inesperada, presenta a la consideración de la Cámara una reforma fundamental al artículo 31 del proyecto.

Afirmamos, en primer término, que esta reforma expuesta a través de las palabras de la señora diputada preopinante no hace sino agravar el tono y el peligro de ese artículo 31, que ha merecido nuestra total y absoluta discrepancia a través de los fundamentos que hemos expuesto.

He escuchado atentamente a la señora diputada y afirmo que este procedimiento demuestra un proceder inusitado en el funcionamiento del Parlamento y en el desenvolvimiento de las sesiones extraordinarias. Se trata de una reforma al artículo 31 que implica consagrar el sistema de divorcio completo en la vida argentina, en esta forma sorpresiva y subrepticia que no ha de prestigiar al Parlamento, ya que ella no consulta la necesidad de una controversia abierta, franca y amplia, dentro y fuera de este recinto,

frente a un problema social tan importante como es el que se vincula al divorcio, relacionado íntimamente con la familia y el desenvolvimiento de la organización social.

La verdad es que se cumple nuestro vaticinio al decir que era una «ley ómnibus», sin solución de continuidad, y que se podía convertir en una caja de sorpresas, con la inclusión de nuevas reformas que no se han querido confesar. Los hechos han ratificado nuestras afirmaciones. Los fundamentos expuestos por la señora diputada por la Capital demuestran que la disposición que se propone significa consagrar un sistema modificatorio del artículo 219 del Código Civil y de otros preceptos de nuestra legislación de fondo, para llegar no sólo a la separación de cuerpos —que admite nuestra legislación—, sino a la disolución del vínculo matrimonial.

Resulta extraordinario que el Parlamento argentino considere en estas condiciones un asunto de tal índole. El procedimiento resulta inexplicable.

En este articulado y reforma, más que un acto legislativo, más que un acto de gobierno, veo un nuevo acto de persecución del régimen peronista contra una institución del país con la cual hoy no coincide y a la cual ha declarado la guerra. No es éste un acto con fines de legislación o de mejoramiento social; es típicamente un acto de beligerancia del peronismo contra la Iglesia, que, por encima de toda discrepancia, merece, como todas las religiones, el mayor de los respetos.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Perette. — Es un definido acto de persecución del peronismo y forma parte de las distintas etapas de persecución que el régimen ha cumplido contra otras instituciones y bienes esenciales del país, contra las libertades públicas, en afrenta de los derechos humanos, partidos opositores...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Perette. — Quiero señalar tres hechos sugestivos. Nada dijo el peronismo de esta modificación esencial en favor del divorcio cuando se hizo la reforma constitucional; nada se dijo cuando se sancionó el segundo Plan Quinquenal, que todo lo «contemplaba», y nada se dijo en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Más aún: la incorporación de este asunto por vía de un artículo de un proyecto de ley significa alterar la propia convocatoria a sesiones extraordinarias, porque no está determinado ese asunto entre los motivos de ella y hace nula e ilegal la sanción que se propugna.

Saben los señores diputados que el divorcio se vincula íntimamente a toda la organización

social. No tememos las transformaciones sociales; no tememos las soluciones o reformas progresistas que impongan problemas familiares y humanos del país. Cuando se discutió la implantación de la enseñanza religiosa hemos previsto las horas de inquietud que hoy vive el país y ahora ratificamos lo que entonces denunciábamos.

No modificamos ninguna actitud y mantenemos nuestra invariable posición —sin ningún exitismo— en favor de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, de la libertad de cultos y la libertad de creencias, tan esenciales para el desarrollo civilizado de los pueblos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Perette. — No entraremos en el análisis del problema de fondo sobre la larga controversia entre divorcistas y antidivorcistas, ya que este proyecto implica —repito— un acto definitivamente persecutorio contra la Iglesia como consecuencia de las discrepancias y acontecimientos recientes de pública notoriedad.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Perette. — No analizaremos, pues, el problema del divorcio, puesto que planteamos una impugnación previa y esencial frente al proceder sorpresivo y subrepticio por parte de la mayoría.

Reitero las razones y criterios que expuse al tratarse la ley de equiparación de hijos sobre la necesidad de que leyes de esta índole deben tratarse con la más amplia dilucidación pública y el aporte general de todos los sectores sociales. Sorpresivamente se quiere imponer una reforma tan esencial, a espaldas de la sociedad argentina y sin que el país —ni los miembros del Congreso— conociera que estaba en el tapete de la discusión parlamentaria una ley de esta índole, que debe obedecer a exigencias sociales y reclamos colectivos plenamente acreditados. La maniobra de la mayoría, la inclusión ilegal de este asunto, nos releva de considerar la cuestión del divorcio, sin perjuicio de las ideas y opiniones que cada legislador pueda sostener sobre la materia.

Afirmamos que esta precipitación implica un hecho grave y afecta de modo serio nuestra organización social, y que no es admisible que por vía de este procedimiento clandestino se sancione una esencial reforma de ley de fondo...

—Hablan varios señores diputados simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Perette. — Nosotros no le vamos a «hacer el juego» a este régimen en el sistema de persecución que tanto aplica en el país y que ahora...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sra. Degliuomini de Parodi. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Perette. — Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Degliuomini de Parodi. — Si el señor diputado por Entre Ríos quiere hacer aparecer a nuestra causa en pugna con las instituciones católicas, le digo que la oposición nuevamente ha equivocado el camino. El pueblo de Perón nunca estuvo más cerca de la Iglesia Católica y de Cristo que desde que apareció Perón. (Aplausos.) Y nunca estuvieron este pueblo y el gobierno tan preocupados con problemas sociales como en esta oportunidad.

Yo quisiera saber si el proyecto presentado en 1949, firmado por los diputados radicales Rodríguez Araya, Mercader, Zavala Ortiz, Dellepiane y Cufre, era total y absolutamente contra la Iglesia. Desearía que los señores diputados de la oposición expusieran su pensamiento frente a ese proyecto totalmente divorcista. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — La señora diputada por la Capital pretende hacer absolver posiciones a la representación radical. Le expreso, con todo respeto, que no lo admitimos. Voy a contestar a la señora diputada diciendo que parecería «que quiere tapar el cielo con un harnero»...

Sra. Degliuomini de Parodi. — Me he referido a un proyecto presentado por diputados radicales, señor diputado.

Sr. Perette. — «No son divorcistas» los gobernantes peronistas; pero establecen ahora sorpresivamente el divorcio. «No son enemigos de la Iglesia», pero encarcelan a los sacerdotes y les declaran la guerra...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Perette. — La Unión Cívica Radical no se presta al juego de este régimen ni a las persecuciones. Este asunto del divorcio se usa como un instrumento de beligerancia con la Iglesia, que se caracteriza en los documentos recientes del peronismo. En el acto del Luna Park, del 25 de noviembre, se definió esa postura, que se refleja en leyendas sugestivas como éstas: «No queremos enseñanza religiosa»; «Queremos la derogación de la ley de profilaxis»; «Queremos el divorcio», etcétera, lo que implica un total cambio de rumbo en la orientación oficialista...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia llama a la cuestión al señor diputado por Entre Ríos. Está en consideración el artículo 31.

Sr. Perette. — Estoy estrictamente en la cuestión.

Sr. Presidente (Benítez). — Debe referirse el señor diputado por Entre Ríos al artículo en discusión.

Sr. Perette. — Quiero reiterar que nosotros sostenemos y propugnamos ayer y hoy los mismos conceptos, siguiendo una invariable línea de conducta...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Perette. — Nosotros servimos —sin existismo— los intereses fundamentales del país, condenando todas las persecuciones y atropellos...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Perette. — Efectivamente, han existido en el partido iniciativas como la mencionada por la señora diputada por la Capital, pero ninguna significación puede ello tener con respecto al hecho de que subrepticia y clandestinamente se sancione, por una ley ómnibus, el divorcio, cuya discusión no se han animado a afrontar en un debate amplio y controversia pública.

Nosotros no nos vamos a prestar a este procedimiento. Es necesario que frente a este fundamental problema se tenga la serenidad que su dilucidación merece. El sector radical está dispuesto a afrontar el debate correspondiente, pero no «haciendo el juego» a la mayoría.

Impugnamos el procedimiento seguido al proponerse esta reforma fundamental a nuestra legislación civil, y sostenemos que es absolutamente nula una sanción de esta índole.

Decimos más: este debate se hace a espaldas de la sociedad argentina. ¿Por qué se ha de sancionar una reforma de esta naturaleza a espaldas de la sociedad argentina, con la ignorancia de la prensa de la República y en momentos en que no se permite la controversia debida? Destaco esta circunstancia: en todo este largo debate nadie ha dicho nada al respecto.

Sr. Presidente (Benítez). — Lo está diciendo el señor diputado, que debe ajustar su exposición al asunto en debate.

Sr. Perette. — El sector radical no puede de ninguna manera aceptar el procedimiento ilegal y anticonstitucional seguido por la mayoría.

Esta es una manifestación más del miedo del gobierno: le tiene miedo a los estudiantes; le tiene miedo a los obreros; le tiene miedo a las procesiones; le tiene miedo a la Iglesia; le tiene miedo a la prensa, radio y tribuna libres; le

tiene miedo a la libertad; le tiene miedo a la oposición...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Por segunda vez la Presidencia llama a la cuestión al señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Hemos tenido nuestra profunda discrepancia con actitudes de la Iglesia, y nosotros no dejamos de sostener nada de lo que hemos sostenido.

—Hablan a la vez varios señores diputados, y suena la campana.

Sr. Cantore. — El señor diputado por Entre Ríos está fuera de la cuestión.

Sr. Presidente (Benítez). — Por última vez la Presidencia llama al señor diputado por Entre Ríos a la cuestión en debate; si insiste en apartarse de ella, la Presidencia se verá obligada a consultar a la Honorable Cámara sobre si el señor diputado está —o no— dentro del asunto a consideración del cuerpo.

Sr. Perette. — Estoy en la cuestión porque estoy denunciando el plan de la mayoría y del oficialismo peronista...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Perette. — No estamos dispuestos a «hacerle el juego» al peronismo, que se siente imbuído de estos sospechosos y sugestivos afanes de «reformas sociales» que jamás enunció y que ahora promueve sin debate público, olvidándose de que temas de esta índole siempre fueron motivo de memorables debates e intensas controversias populares que hoy se rehuyen...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Perette. — En definitiva, el sector radical anuncia que no ha de prestarse al juego de la mayoría y que se retira del recinto.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar el capítulo III.

—Resultado afirmativa por unanimidad; votan 117 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo IV.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa por unanimidad; votan 117 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo V.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa por unanimidad; votan 117 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo VI.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa por unanimidad; votan 117 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Sra. Degliuomini de Parodi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Degliuomini de Parodi. — Como lo he anunciado, señor presidente, solicito que la Honorable Cámara resuelva insertar en la versión taquigráfica el informe que el señor presidente de la Comisión de Legislación General de esta Cámara, doctor Ventura González, presentara a nuestro bloque con motivo de considerarse en él el agregado que he propuesto al artículo 31 del proyecto en discusión. Asimismo, solicito que se inserten en el Diario de Sesiones el proyecto de ley de divorcio presentado por la representación radical en la sesión celebrada por esta Honorable Cámara el día 19 de mayo de 1949 y el proyecto presentado por el ex diputado Absalón Rojas el 21 de agosto de 1946.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar si se incorporan al Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por la señora diputada por la Capital.

—Resultado afirmativa de 117 votos; votan 118 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se harán las inserciones en la forma solicitada (2).

Sr. Miel Asquía. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago moción de que se pase a cuarto intermedio, para reanudar la sesión a la hora 9 del día de hoy.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital.

—Resultado afirmativa por unanimidad; votan 118 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 3 y 25 del día 14 de diciembre.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 2807.

(2) Véanse las inserciones en la página 2812.